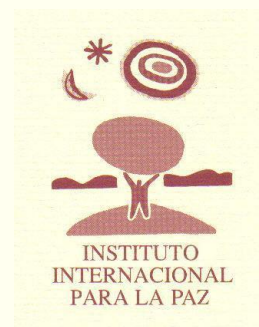


DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARME



El respeto a los derechos y la dignidad de la persona en la vida militar

Escrito por Tomàs Gisbert

Jueves, 20 de Octubre de 2011

La recientemente aprobada Ley orgánica de los derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas ha creado una nueva figura, el Observatorio de la Vida Militar. Este observatorio nace de la propuesta que realizó Justicia i Pau, conjuntamente con 25 ONG catalanas, y que fue asumida por la Ley de la defensa nacional de 2005. Esta propuesta recogía una de las principales conclusiones del trabajo de Información para la Defensa de Soldados, organización catalana que estuvo muy activa en los tiempos finales de la mili defendiendo a los jóvenes que se veían obligados a realizarla.

El Observatorio responde a la necesidad de que existan mecanismos de prevención y vigilancia para que la vida militar se desarrolle en el respeto y la dignidad de la persona. Los maltratos, humillaciones y abusos sobre militares y reclutas constituyen un fenómeno persistente en la mayor parte de los ejércitos del mundo, como recientemente se encargaron de recordar las humillaciones sufridas por los reclutas del buque escuela alemán Gorch Fock. El caso español no es una excepción, y la profesionalización reciente del personal militar no ha conseguido su erradicación.

No es un problema exclusivo de las personas afectadas, de las víctimas. Por la naturaleza propia de las fuerzas armadas tiene un alcance superior. La violencia, y el no respeto de los derechos humanos y la dignidad de sus miembros, condicionan de manera irreversible las finalidades de las fuerzas armadas y en esta medida afecta el conjunto de la sociedad. La sociedad debe vigilar que la vida militar no se construya en la vulneración de derechos y ha instrumentar los mecanismos precisos para evitarla.

Es aquí donde reside la importancia de la creación del Observatorio de la Vida Militar. Ha tenido que esperarse casi seis años, excediendo ampliamente los tres meses que la Ley de defensa nacional disponía, para que se haya aprobado definitivamente su creación. Expresión de las resistencias que han tenido que vencerse eran las carencias del proyecto de ley inicial, que planteaba un observatorio vacío de contenido y de competencias. En el proceso de debate parlamentario, de Justicia i Pau compareció en la Comisión de Defensa del Congreso y la ley finalmente ha mejorado el proyecto inicial, y lo ha mejorado en la dirección que indicamos. Ha reforzado su papel de vigilancia del respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de los miembros de las fuerzas armadas, principal motivo por el que propusimos la creación de este observatorio.

El Observatorio podrá actuar a “instancia de parte”, aspecto capital para que no sea un órgano volcado únicamente en hacer informes de despacho, y esto quiere decir que podrá admitir denuncias de particulares e investigarlas, con capacidad para acceder, si es preciso, a las unidades militares.

Ha incorporado en su composición a personas del ámbito de los derechos humanos, cuando el proyecto sólo admitía a personas vinculadas a la defensa, militar por supuesto, o a los recursos humanos, delatando de esta forma cuales eran las intenciones iniciales.

Se ha clarificado su dependencia directa de las Cortes Generales, como expresión de la vigilancia de la sociedad sobre la vida militar, eliminando del redactado la adscripción a la subsecretaría de defensa, lo que en la práctica lo convertía en un órgano dependiente del Ministerio de Defensa, el cual ahora se limitará a proporcionar sede y apoyo administrativo.

Naturalmente esta es la ley, pero será preciso ver cuál será la aplicación práctica del Observatorio de la Vida Militar, cuáles son los miembros escogidos por las Cortes para ponerlo en marcha, y de ello dependerá que quede como un observatorio más de los que nadie recuerda o que sea un órgano que pueda actuar realmente.

También, será necesaria la presión social, así como contar también con la presencia cada día más activa de las asociaciones profesionales de militares, en especial de aquellas que no buscan privilegios o una incidencia política sino, simplemente, ser tratados como ciudadanos normales, y no como carne de cañón de obediencia ciega. Y esto ha hecho que la ley haya avanzado también, aunque no de una manera plena, en el reconocimiento de los derechos ciudadanos de las personas de uniforme, que se haya reconocido el asociacionismo militar como instrumento legítimo para la defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales o, también, que se cree el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, como órgano de participación.

El desarrollo de esta ley pondrá a prueba si los ejércitos pueden renunciar realmente a la violencia interna, ya sea oficial o ya sea paralela, base que da cuerpo a la vulneración de derechos y de la dignidad de la persona en el seno de las fuerzas armadas. O si lo realmente razonable es pensar que estas violencias son una parte estructural de los ejércitos urgiendo aún más la necesidad de buscar otras formas de seguridad que no pasen por los ejércitos.

Hiroshima, Nagasaki, Chernóbil, Fukushima, paremos la próxima

Escrito por Xavier Bohigas

Jueves, 20 de Octubre de 2011

Artículo publicado en El Triangle

Uno de los sucesos más terribles de este año ha sido el accidente de la central nuclear de Fukushima. Cuando se produjo el accidente de Chernóbil, Occidente criticó los sistemas de seguridad de las centrales nucleares soviéticas.

Se dijo que un accidente de esas características no podría pasar nunca en una central nuclear occidental. El origen del accidente de Fukushima es, desde el punto de vista tecnológico, distinto del de Chernóbil. Pero ambos son similares en cuanto a las consecuencias medioambientales y de salud pública, causadas por la emisión de radiactividad. Estos dos accidentes también son comparables a la contaminación radiactiva producida en las explosiones de las bombas nucleares estadounidenses lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Últimamente se ha insistido mucho en el peligro que representa la generación de energía eléctrica a partir de la energía nuclear. Pero parece que nos olvidamos de otros peligros nucleares: los portaaviones y submarinos propulsados por energía nuclear y, sobre todo, las bombas nucleares.

Actualmente, hay nueve estados que tienen armas nucleares: EEUU, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Los cinco primeros han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y los otros cuatro no. Los estados signatarios del TNP se comprometen a permitir que la Agencia de la Energía Atómica (AEA), dependiente de la ONU, inspeccione sus instalaciones. No hay ningún control por parte de la AEA de las actividades nucleares de los estados no signatarios del Tratado.

Los estados más armados nuclearmente son EEUU y Rusia, que acumulan, aproximadamente el 95% del arsenal nuclear mundial. Se estima que mantienen unas 5.000 cabezas nucleares cada uno. Las consecuencias de una guerra nuclear serían catastróficas, provocaría la muerte de cientos de miles de personas a corto plazo y muchas más a medio y largo plazo debido a la contaminación radiactiva producida por las explosiones. El peligro de una guerra abierta entre

EEUU y Rusia parece, actualmente, bastante pequeño. Pero la existencia de un arsenal nuclear posibilita que se use.

Pero no sólo una guerra nuclear entre las dos superpotencias podría desembocar en un futuro apocalíptico. La utilización de una bomba nuclear, sea de forma voluntaria o por error, por parte de cualquiera de los estados nuclearmente armados ya provocaría un desastre radiactivo superior al derivado de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki o de los accidentes de Chernóbil o de Fukushima. Recordemos que una de las bombas nucleares actuales tiene una potencia media equivalente a diez veces la de las bombas que EEUU lanzó sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki que provocaron más de 220.000 muertes inmediatas y, más tarde, millones de muertos a causa de la radiación.

No podemos descartar una catástrofe nuclear provocada por accidentes relacionados con la gestión del arsenal nuclear. No es necesaria la explosión de una bomba para crear un desastre nuclear de este tipo. Recordemos que en 1966 cayeron cuatro bombas nucleares en Palomares que no explotaron y, todavía hoy, hay una enorme área de acceso prohibido debido a la peligrosidad de la radiación remanente. Es fácil de imaginar las consecuencias que se derivarían de un naufragio, sea por accidente o a causa de un ataque, de algún portaaviones o submarino propulsados por reactores nucleares.

Es positivo que nos preocupemos, y que denunciemos, el uso civil de la energía nuclear. Pero, también debemos exigir el desmantelamiento de todo el arsenal nuclear mundial y de todos los buques nucleares. Es evidente que el primer paso deberían darlo EEUU y Rusia. No parece que tengan ninguna intención, ya que consideran que el mantenimiento del armamento nuclear es una pieza fundamental de su política de seguridad. El último acuerdo de reducción de armamento fue más mediático que real, ya que, en la práctica, no hubo reducción. En cambio, la sociedad civil piensa que el mundo será más seguro cuando desaparezcan todas las armas nucleares. Una dicotomía más entre los intereses de los poderosos y la sociedad civil.

Cuando luchamos por el cierre de las centrales nucleares de generación de electricidad, tenemos que añadir en nuestras reivindicaciones la desaparición inmediata de las armas nucleares. ¿Nuclear?, ¡Ni civil ni militar!

Las transnacionales mineras en Barcelona

Escrito por Tomàs Gisbert

Martes, 21 de Junio de 2011

Del 10 al 12 de mayo pasado, en medio de una discreción casi total, se reunió en Barcelona la “Global Metals @ Mining conference” organizada por el Bank of America /Merrill Lynch.

Con esta conferencia Barcelona se convertía en la capital mundial de la minería acogiendo a los ejecutivos de más alto nivel de las principales empresas mundiales del sector industrial más depredador del planeta. Los principales ejecutivos de más de 70 empresas mineras, entre las que destacan empresas como Rio Tinto, BHP Billiton, Xtrata, Goldcorp, Barrick Gold, Vale o Newmont, las más grande del mundo, se reunían en Barcelona, en un ambiente discreto, para disfrutar de agradables vistas al mar, de los lujos del Hotel Arts, y de todo lo que les ofrece la marca Barcelona, mientras iban exponiendo sus resultados y captaban el interés de capitales inversores.

La prospección y extracción de minerales está protagonizando un nuevo ciclo de acumulación de capital. La demanda creciente de los países emergentes y las inversiones especulativas, que tras la crisis financiera internacional que ellas mismas contribuyeron a causar buscan cobijo, es su motor principal. El incremento de precios de los mercados de las materias básicas está haciendo que la minería sea un sector en auge que se está extendiendo a regiones cada vez más remotas y más sensibles cultural y ambientalmente.

Muchos gobiernos locales ven la minería como una fuente principal de crecimiento económico, y ofrecen su complicidad para que se desarrolle sin un mínimo respeto por el medio ambiente o los legítimos derechos de las poblaciones locales afectadas por los proyectos mineros. Complicidad cuando legitiman prácticas que malogran el medioambiente y complicidad cuando criminalizan las protestas legítimas de las personas y pueblos que ven transgredidos su derecho a un ambiente sano, y defienden su territorio, sus recursos naturales y su derecho a vivir.

La industria minera no duda en aprovecharse de legislaciones débiles y de la impunidad de que disfruta en muchos estados para rentabilizar al máximo sus proyectos. Llevando, al mismo tiempo, una política activa para obstaculizar la elaboración e implementación de estándares internacionales de aplicación obligatoria sobre buenas prácticas en las actividades extractivas o cualquier mejora legislativa posterior a sus inversiones.

La expansión de la minería en todo el mundo, y en especial en los países más empobrecidos, está acompañada por una oleada de violaciones de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos que ocupan los territorios codiciados, y por el reiterado incumplimiento del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, tal y como reconoce el convenio 169 de la OIT. Está provocando la implantación de leyes de excepción para criminalizar la resistencia antiminera y una nueva militarización, pública y privada, para proteger las inversiones mineras, mientras se extiende la violencia de las fuerzas del estado o de las organizadas por las compañías mineras contra los oponentes a la minería, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La minería, pues, está generando una fuerte oleada de conflictividad social en respuesta a sus actividades y a las permisividades de los gobiernos. Toda América latina, de norte a sur, está atravesada por resistencias y luchas contra las actividades mineras depredadoras, contra el expolio de sus recursos naturales. Una mirada a la excelente página de OCMAL , Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (www.conflictosmineros.net) nos puede dar idea de la amplitud del problema pero también de las resistencias.

Las resistencias se organizan en defensa del territorio, contra proyectos mineros concretos, pero también en campañas más generales por la reducción de riesgos medioambientales, por la prohibición de la minería a cielo abierto y el uso en la minería de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, y por el derecho a la consulta previa en cumplimiento del convenio 169 de la OIT en los territorios indígenas y por el respeto a la decisión de las comunidades afectadas y de los gobiernos locales.

Desde nuestro país nosotros también tenemos nuestra responsabilidad: responsabilidad en denunciar a estas empresas transnacionales, en solidarizarnos con los pueblos que resisten y defienden su territorio, pero también en cuestionar un modelo de consumo y de uso irracional de unos recursos, los minerales, que no son infinitos.

La Unión Europea: un proyecto inacabado

Escrito por Miquel González

Miércoles, 13 de Octubre de 2010

La concepción de la Unión Europea, ahora que muchos dudan de su viabilidad futura, es muy profunda y conviene recordarla. Antes de materializarse, la idea de unir Europa fue mantenida por filósofos y visionarios como Víctor Hugo, el cual imaginó unos pacíficos "Estados Unidos de Europa" inspirados en ideales humanistas. El sueño obviamente se vio obstaculizado como consecuencia de las crueles guerras sufridas durante la primera mitad del siglo XX.

A pesar de ello, después de la Segunda Guerra Mundial la idea de unificar Europa resurgió con fuerza. Los que se habían opuesto al totalitarismo durante la guerra estaban decididos a poner fin al odio y la rivalidad entre las naciones de Europa y crear condiciones para una paz duradera. Entre 1945 y 1950, una serie de políticos, entre ellos Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi y Winston Churchill emprendieron la tarea de persuadir a sus pueblos de la necesidad de entrar en una nueva era de estabilidad, mediante el impulso de los intereses comunes, el Estado de Derecho y la igualdad de todos los países.

Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exteriores, recogió una idea inicialmente concebida por Jean Monnet y, el 9 de mayo de 1950, propuso la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). La intención era situar bajo una misma autoridad la producción de carbón y acero de países que habían sido enemigos. Las materias primas que se habían utilizado para hacer la guerra ahora servirían un propósito mucho más justo y constructivo: la reconciliación y la paz.

Hoy, la situación es complicada para los países integrados en la actual Unión Europea. Y por ello es necesario y útil recordar el espíritu de este proyecto: la estabilidad y la paz en Europa. Sólo desde esta perspectiva podemos entender que la Unión Europea no debería ser una suma de países, sino un conjunto. Es este punto tan vital el que los líderes europeos parecen haber olvidado.

Se ha contemplado la posibilidad de abandonar Grecia ya que como sólo representa un 2% del PIB de la zona euro es prescindible. Los alemanes parecen no querer ayudar al pueblo griego porque, según ellos, la situación que viven es fruto de las su propia negligencia.

Y si bien es cierto que los políticos griegos han abusado de la financiación barata e incluso han escondido que lo estaban haciendo, también es cierto que los alemanes, entre otros, también han superado los umbrales de déficit público máximo marcados por los tratados europeos.

En conclusión, el proyecto europeo está aún lejos de ser alcanzado tal y como se diseñó inicialmente y eso es porque se ha olvidado su fin.

Para lograr una Europa estable debemos caminar hacia una Europa unida políticamente y solidaria con los territorios más desfavorecidos o afectados. Sólo así caminaremos hacia la deseada paz y estabilidad, tan apreciada por los padres intelectuales de la actual Unión Europea.

Reunión anual del ENAAT en Amsterdam

Escrito por Francesc Benítez

Martes, 07 de Septiembre de 2010

El pasado 28, 29 y 30 de mayo tuvo lugar en Amsterdam el encuentro anual de la European Network Against Arms Trade (Red Europea Contra el Comercio de Armas) de la que forma parte el Centre desde su fundación.

La reunión contó con la presencia de representantes de las respectivas campañas contra el comercio de armas de Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Francia, Suecia, Noruega, Finlandia y Reino Unido; así como de otras organizaciones y movimientos sociales por la paz invitadas por los anfitriones y habituales en estos encuentros.

El encuentro tuvo su espacio habitual para la puesta en común del avance de las campañas en sus tres frentes: la investigación, la sensibilización y el lobby a la administración pública y a las empresas que forman parte del entramado industrial militar. Así, se compartió la información y las metodologías más innovadoras y efectivas por parte de cada organización.

Como hecho completamente novedoso, la primera tarde de las jornadas consistió en la presentación de cinco de las más exitosas campañas públicas en que participan los miembros de la red usando materiales audiovisuales mientras el evento se retransmitía en directo por Internet en un blog habilitado a tal efecto. Las campañas así presentadas fueron: Tagwar (observatorio de compañías que obtienen beneficios de las guerras por parte de la organización belga Wredesactie); Corruption uncovered (batalla legal contra la compañía BAe Systems por sus reiterados casos de corrupción por parte de la organización inglesa Campaign Against Arms Trade); Critical shareholders (grupo alemán de accionistas críticos con las actividades militares de las compañías EADS, Daimler y Heckler&Koch); Nothing to hide? (metodologías para obtener información de comercio de armas por parte de la organización holandesa anfitriona Campagne tegen Wapenhandel) y Banca Desarmada (campaña contra las inversiones de la banca en la industria de guerra). Toda esta información puede ser consultada en el enlace <http://www.stopwapenhandel.org/enaat/meeting2010.html>

Así mismo, el encuentro incluyó cuatro sesiones monográficas sobre temas más específicos. Se trató el tema de la Privatización de la Guerra según las tendencias actuales observadas como la proliferación de las Corporaciones Militares Privadas y su control por parte de las administraciones públicas; la militarización de la Unión Europea y su relación con el Tratado de Lisboa; la campaña de la Internacional de Resistentes a la Guerra –organización invitada habitual en el encuentro del ENAAT-, y por último se organizó un taller participativo sobre todas las dimensiones del comercio y colaboración en defensa con Israel, y de cómo organizar una campaña común a nivel europeo sobre este tema.

En definitiva, tanto el evento preparado por los anfitriones como la disposición participativa de todos los asistentes puso de manifiesto una vez más la importancia del trabajo en red de los movimientos sociales y de las organizaciones que trabajan por la paz de cara a compartir las metodologías y las campañas más eficaces para llegar al ciudadano y para habilitar grupos de presión que incidan en las grietas del mastodóntico complejo-militar-industrial en todos sus frentes.

Banca española y armas ilegales

Escrito por Miquel Gonzalez

Martes, 22 de Junio de 2010

La actual globalización económica ha traído consigo el concepto de consumo responsable. La idea subyacente es que la globalización ha causado un gran impacto sobre las poblaciones y el medioambiente en el mundo. Los estados, impotentes ante su progresiva pérdida de poder, se han mostrado más proclives a favorecer la expansión de sus empresas nacionales que a controlar su impacto en el exterior. El consumidor, por lo tanto, ha pasado a ser el protagonista a la hora de exigir un comportamiento ético a las empresas.

Como consumidores colaboramos a través de nuestras opciones de consumo con multitud de proyectos y empresas. Una forma sutil de colaboracionismo que con frecuencia olvidamos es la que se establece entre nuestros depósitos y los diferentes proyectos que nuestra entidad financia con ellos. Y para hablar de este tema me fijaré en cuatro compañías que producen armas muy controvertidas: Lockheed Martin, L-3 Communications, Textron y EADS. Las tres primeras venden misiles con cargas de racimo y son estadounidenses y la última produce misiles que albergan cargas nucleares y es europea. Este armamento, de ser utilizado en un conflicto armado como medida de ataque, sería considerado ilegal según el derecho internacional humanitario por ser armas que no distinguen entre civiles y combatientes y por infringir un sufrimiento innecesario. ¿Qué relaciones tienen las entidades financieras españolas y por ende nuestros depósitos e inversiones con estas cuatro compañías?

A día de hoy, parece ser que no hay entidades financieras españolas que financien a través de créditos a las tres empresas norteamericanas. Eso sí, muchas de ellas ofrecen un índice financiero llamado S&P 500 que incluye a 500 empresas norteamericanas, entre ellas las tres citadas. Este producto financiero funciona de tal forma que cuando el cliente invierte en él está comprando en la práctica acciones de 500 compañías estadounidenses y las está, por lo tanto, financiando.

Bancaja, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caja Madrid y La Caixa son las entidades españolas que ofrecen este producto financiero. Además de esto, Tecnobit, empresa militar participada en un 33% por Caja Navarra, un 29% por Caja Castilla la Mancha y un 6% por Caja Burgos, suministra componentes a Lockheed Martin

Por otra parte, el consorcio aeronáutico europeo EADS, al ser un gran conglomerado europeo y tener presencia en España, es financiado directamente por entidades españolas. Entre estas entidades se encuentran Banco Santander, Bankinter y BBVA.

Además, existen empresas españolas con producción militar que son proveedores de EADS y además están participadas por entidades financieras españolas. Se trata por un lado de Aernnova, participada en un 23% por Caja Castilla la Mancha, y por otro Alestis, participada en un 15% por Cajasol y un 14% por Unicaja.

En conclusión, a través de nuestros depósitos e inversiones financieras podemos estar financiando más o menos directamente a compañías que no comparten nuestros valores. Es importante tener esto en cuenta porque si deseamos que las empresas tengan un comportamiento ético en todos los ámbitos es necesario que apliquemos primero la misma regla a nuestras opciones de consumo.

La responsabilidad de los intelectuales

Escrito por José M. Castillo

Lunes, 15 de Febrero de 2010

Cuando cada año se conceden los premios Nobel, no sólo se premia el trabajo de investigación de personas eminentes en determinados ámbitos del saber, sino que además e inevitablemente también se presenta un modelo de ciencia, de conocimientos y de avances tecnológicos que se consideran los más importantes de cada año.

Nadie va a poner en duda que los 770 premios Nobel, que la Real Academia Sueca de las Ciencias (y otras conocidas instituciones de alto prestigio) han concedido desde 1901 hasta 2007, representan la enorme aportación que la ciencia, la tecnología, la literatura, al igual que las ciencias económicas y sociales, han hecho en favor de la humanidad.

Los asombrosos avances que, en los últimos cien años, se han realizado en medicina, en las más diversas tecnologías, en el progreso de las letras y en el esfuerzo por mejorar las condiciones de paz entre los pueblos, todo eso, en gran medida está reflejado en la impresionante lista de hombres y mujeres que han obtenido el premio Nobel. Si hoy vivimos mejor que las gentes de hace un siglo, se lo debemos a quienes han obtenido el galardón del Nobel y a tantos otros hombres y mujeres que con su paciente y callado trabajo han hecho posible el bienestar y otras ventajas de las que hoy podemos disfrutar.

Todo esto es verdad. Y nunca lo elogiaremos bastante, para fomentar la pasión por el estudio, el trabajo intelectual y la investigación científica. De todo esto depende el futuro de la humanidad. Pero en esto, como en todo, tendríamos que ser más lúcidos de lo que hemos sido hasta ahora. Porque, si es verdad que los premios Nobel de cada año representan, en gran medida, los avances de la ciencia y el saber que han hecho posible el progreso y el bienestar, no es menos cierto que la ciencia y los saberes, que se han premiado en los Nobel, nos han acarreado demasiados sufrimientos y enormes desgracias, hasta abocarnos a un mundo amenazado de destrucción y de posible exterminio.

Sin duda alguna, la ciencia y la tecnología, que hoy tenemos, merecen un premio. Pero, si somos honestos y sinceros, hay que reconocer que merecen también un juicio severo y, en asuntos muy determinantes, un justificado castigo.

No debe ser mera casualidad el hecho de que, de los 770 premios Nobel que se habían ciudadanos de Estados Unidos (276), Reino Unido (96), Alemania (76), Francia (50), Rusia (22), Japón (11).

Es decir, los países que más premios Nobel han acumulado han sido precisamente los países que más guerras, más violencia y más muerte han causado o permitido en el último siglo. De la misma manera que son los países que más armamentos bélicos han inventado, han fabricado y han vendido, para hacer posibles, no sólo sus propias guerras, sino también las guerras de los demás.

Y ya, puestos a hablar de este patético asunto, no olvidemos la lista de los Nobel de economía que, desde 1969, se vienen concediendo. De los 61 premios que se han dado en esta especialidad, el 65 % han sido para economistas de Estados Unidos y el 15 % para los del Reino Unido.

Descaradamente se ha privilegiado la economía neoclásica, especialmente la Escuela de Chicago, es decir el modelo económico que nos ha metido en el espantoso desequilibrio económico mundial en que vivimos.

El modelo económico que ha entrado en crisis y que, premiando con laimpunidad e incluso con enormes cantidades de dinero a los causantes del desastre, ahora todos queremos reconstruir para seguir viviendo, disfrutando y padeciendo, del modelo de “economía canalla” que nos han impuesto los más autorizados Nobel de economía de los últimos cuarenta años. Y a todo esto, hay que sumar el silencio y la complicidad de tantos hombres de ciencia y de tantos intelectuales que trabajan, más para satisfacer los intereses económicos de las multinacionales, que las necesidades de la gente, sobre todo si se trata de las pobres gentes de los países pobres. Por poner un ejemplo, como es bien sabido, los turbios manejos de determinadas empresas químicas y farmacéuticas constituyen auténticos crímenes que claman al cielo.

El problema que todo esto nos plantea es más grave de lo que mucha gentese imagina. Porque estos hechos nos vienen a decir que, en este momento, la ciencia no es neutral. Decididamente, la ciencia ha tomado partido, en favor de quien la costea.

Es decir, la ciencia se ha puesto de parte de los intereses de los Estados más poderosos y de las empresas multinacionales que, como sabemos, no tienen como finalidad aliviar el sufrimiento de la gente, sino acumular riqueza y poder.

Llegando más al fondo de las cosas, todo esto nos lleva a pensar que, en el estado actual de la sociedad tecnocrática, no es posible separar la “naturaleza” de la ciencia de los “fines” concretos para los que se utiliza la ciencia. Decir que una cosa es la ciencia “en sí”, y otra cosa es la “utilización” que se hace de la ciencia, es el intento desesperado que hacen no pocos científicos (bien pagados por las empresas para las que trabajan) para tranquilizar sus conciencias.

Al decir esto, me parece acertado recordar lo que J. Habermas argumentó contra K. R. Popper, en la conocida “disputa del positivismo en la sociología alemana”: cuando las esferas del “ser” (lo que es la ciencia) y del “deber ser” (para qué se utiliza la ciencia) quedan separadas, se produce el divorcio entre el “conocimiento” y los “valores”. Una ciencia, así entendida, se presta a las manipulaciones más peligrosas y nos puede conducir a los horrores del totalitarismo, ya sea político, ya sea ideológico. + (PE)

"El camino de la violencia es el fracaso de la política"

Escrito por Carlos Castro

Lunes, 14 de Diciembre de 2009

Entrevista a Pedro Ortega, publicada en La Directa n. 164 del 9 de diciembre de 2009

Un informe reciente del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs ponía en evidencia las argucias que emplea el gobierno español para esconder el gasto militar real del Estado. Pere Ortega, activista e investigador del centro, sostiene que aunque este armamento son la máxima expresión de la violencia, la meta del pacifismo se adentra, también, dentro de las sociedades sin conflictos armados.

Dando un vistazo a la historia de la humanidad y el mapa actual de conflictos, la paz mundial parece una utopía.

Es una utopía, pero la abolición de la esclavitud también lo era. La paz es equiparable a las grandes utopías que han movido la humanidad en el pasado y en el presente. Pero no sólo debemos entender la paz como la ausencia de guerra. Para conseguir una paz integral, necesitamos cumplir otros requisitos, como un pleno desarrollo de los Derechos Humanos, lograr una democracia más participativa y ampliada-sin los reductos no democráticos que aún existen-y un cierto desarrollo económico. Tampoco tendremos paz sin erradicar la violencia estructural, la que crea las desigualdades-tanto políticas, como sociales y económicas-y sin justicia social: es decir, igualdad de derechos.

Este concepto integral de paz implica un cambio estructural del sistema.

En cierto modo. Se asocia la revolución a la violencia armada, pero Martin Luther King y Gandhi también fueron unos revolucionarios. Aun así, me gusta más la palabra transformación porque, a veces, las revoluciones cambian radicalmente el statu quo, pero luego se mantendrán a través de la fuerza. Entonces, nos encontramos con personas vencidas, no convencidas. En cambio, las transformaciones que se dan por la fuerza de las ideas son lentas, pero cuajan en la sociedad. El camino de la violencia es el fracaso de la política.

Históricamente, los movimientos sociales han buscado más salidas a través de la vía pacífica que de la violenta-recordemos las huelgas en las fábricas o las manifestaciones callejeras. Además, disponemos de otra herramienta, la desobediencia.

¿Como se puede parar la red de intereses que hay detrás de las guerras?

Es muy difícil, pero no imposible. Detrás tenemos un enorme poder, que es lo que llamamos complejo militar industrial. Un poder fáctico dentro de los estados, que estos son incapaces de afrontar. El Estado es el primer y único cliente de la industria militar, pero estos intereses sólo responden a un determinado grupo de personas. Así pues, el trabajo consiste en convencer a los estados para reducir un gasto que va en detrimento del desarrollo humano y social de la población. Las armas sólo sirven para protegernos ante una inseguridad, pero las inseguridades que tiene la población española son militares ¿Entonces, ¿por qué el Estado destina 52 millones de euros diarios a armamento? Es pura inercia del pasado.

¿Como movilizar a la población?

En España, la población está en contra del militarismo por una cuestión histórica, una dictadura militar que duró 40 años. El problema, ahora, es que los medios convencionales se hacen poco eco del gasto militar real. Si la ciudadanía conociera todos los recursos que se destinan a las fuerzas armadas y supiera que el Estado vende armas a países que cometen violaciones masivas de los Derechos Humanos ... Por otra parte, los estados ya se preocupan de que no es publiciten demasiado estas cuestiones. Así, las intervenciones que se hacen en el exterior se venden bajo el epígrafe de operaciones de paz o misiones de reconstrucción, pero en realidad esconden una guerra abierta. Es el caso de Afganistán, un país que vive una guerra ilegítima, ilegal e inhumana desde hace ocho años y donde el 95% de los recursos destinados a reconstruir el país van a parar a mantener la guerra.

Mientras tanto, los tratados contra el uso de determinadas armas resultan ser letra muerta.

No del todo, son pequeños avances que demuestran que el desarme es posible. Haber conseguido que 155 países firmaran el tratado que prohíbe la fabricación, exportación y almacenamiento de minas antipersona es una victoria. Claro que todavía faltan 45 más para firmar, entre ellos los primeros fabricantes mundiales-como siempre, EEUU, Rusia e Israel. Lo mismo ha ocurrido con las bombas de racimo.

Además, el año próximo se presenta la renovación del tratado de no proliferación de armas nucleares.

El tratado ha demostrado ser un fracaso. Las grandes potencias no se han desarmado, sólo han reducido el stock de armas obsoletas y han continuado investigando fabricando nuevos tipos. Además, desde que se empezó a aplicar, tres países nuevos, India, el Pakistán e Israel han desarrollado armas nucleares y se suman a los EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Ahora, el tema de Irán se trata con una doble moral, pero el mejor camino para convencerles de que no desarrollen el arma nuclear-si su objetivo es éste-es el desarme del resto. De otra manera, la carrera armamentista no se detendrá y cuanto más estados dispongan de armas nucleares, habrá más riesgo que las usen. Por lo tanto, el objetivo del nuevo tratado debería ser la eliminación de este tipo de armamento, el paradigma de la inutilidad de las armas, el arma genocida por excelencia.

¿Qué papel ha jugado la OTAN en esta carrera armamentista?

Es el factor principal del militarismo en el mundo, el brazo armado de EEUU. En un principio, sirvió para someter Europa y, una vez acabada la guerra fría, el resto del mundo. EEUU están presentes en 140 países con bases militares y 350.000 soldados, nunca cederán el control de la OTAN. Los aliados sólo son sus peones. Pertenecer a la Alianza Atlántica quiere decir que todos los socios deben disponer de un armamento compatible con el de la primera potencia mundial, con los esfuerzos y el gasto que ello implica. La dependencia de los Estados Unidos es total.

¿Y qué pasa con la ONU?

La ONU es una esperanza y, al mismo tiempo, un fracaso. Se considera un embrión de gobierno mundial, pero la asamblea que forman todos los Estados no es democrática. El Consejo de Seguridad es prisionero de las cinco potencias mundiales que tienen derecho de veto, que usan en función de intereses particulares. Sin embargo, las grandes potencias son deudoras de la ONU, no pagan su contribución y, de esta manera, pueden mantenerla estrangulada. Por lo tanto, si no conseguimos reformar esta ONU difícilmente acabaremos con la guerra. Aun así, la ONU ha obtenido pequeñas victorias, como el caso de las minas antipersona. Las agencias también hacen un buen trabajo, que el Consejo de Seguridad obvia. Por ejemplo, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dice que, si el gasto militar mundial se redujera sólo un 3% anual (unos 1,5 billones de dólares, el 2,5% del PIB mundial), al cabo de diez años habríamos acabado con el hambre en el mundo.

Las falsas medidas contra el cambio climático

Escrito por Teresa de Fortuny

Viernes, 04 de Diciembre de 2009

La cumbre de Copenhague sobre cambio climático nos empuja a hacer una fuerte crítica de la normativa actualmente en vigor, el Protocolo de Kioto, que de hecho es una tomadura de pelo.

Kioto no es más que el reflejo de la enorme capacidad que tienen los países ricos para adaptarse a cada nueva situación y poder seguir sacando provecho de los países pobres. Estos países ricos inventan nuevas ideas para conservar la posición dominante. Una coyuntura nueva viste de una forma nueva la violencia estructural a que someten los países del Sur.

Hablaremos de las disposiciones sobre las emisiones de carbono, que es el elemento clave para frenar el calentamiento global. El Protocolo de Kioto (vigente desde 2005) implantó el comercio de emisiones de carbono (o sea el comercio de permisos para contaminar): se empezó por asignar a cada país (y de ahí a cada empresa o industria) una cuota de emisiones. Una empresa que desee incrementar su producción y por tanto superar su cuota de emisiones de CO₂, puede comprar permisos de emisión a otras empresas o países que emitan menos de lo que están autorizados.

La empresa que no utiliza todos sus permisos, los puede vender libremente. La recesión económica ha hecho caer la producción de muchas empresas y eso les ha permitido vender sus permisos de emisión y aumentar sus beneficios. Esta situación abarata el precio de los permisos y así resulta que es más barato pagar para seguir contaminando que no reducir emisiones. Es obvio que este sistema no fomenta la reducción de las emisiones. Desde 2005 las emisiones no han hecho más que aumentar.

Otra vía para eludir la reducción de emisiones, es el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Consiste en que un país o empresa puede compensar sus emisiones si invierte en proyectos que reduzcan emisiones en países menos desarrollados.

El MDL admite y financia proyectos muy diversos, desde presas hidroeléctricas en plantaciones de palma. Financia proyectos muy criticables, desde los proyectos que no sólo no disminuyen, sino que incrementan las emisiones (como las tomas), pasando por proyectos como las plantaciones intensivas y las explotaciones porcinas que destruyen la biodiversidad y dañan el suelo y las aguas, hasta proyectos "no adicionales", es decir aquellos que ya se habían planificado antes del establecimiento del MDL. Además, se pretende incluir las grandes plantaciones de monocultivos de árboles, que tienen una capacidad de absorción de carbono que sólo es el 20% de la de los bosques autóctonos. Y que generan un grave problema social y económico, ya que acaparan la tierra y el agua que necesitan para subsistir las partes locales.

En resumen, se ha demostrado que el comercio de emisiones de carbono es totalmente ineficaz para reducir las emisiones y constituye una amenaza enorme para las comunidades campesinas e indígenas, sobre todo de los países del Sur. La mayoría de los proyectos que ha subvencionado el MDL han expulsado las poblaciones autóctonas de sus tierras.

Noa y la Diada

Escrito por Pere Ortega

Sábado, 10 de Octubre de 2009

Las protestas expresadas por un sector del público en la actuación de la cantante israelí Noa en el acto institucional de la Diada del 11 de septiembre de este año han generado un debate y un alud de declaraciones contrarias por parte de políticos, periodistas y creadores de opinión.

La cantante Noa ha hecho saber en varias ocasiones su incondicional apoyo a las políticas que aplica el estado de Israel en los territorios ocupados palestinos. Su discurso, disfrazado de pacifista, ha sido siempre transparente respecto al conflicto palestino. Por ejemplo, a raíz de la operación "Plomo Fundido" del Ejército israelí en Gaza el 8 de enero de 2009, Noa envió una "Carta abierta a los palestinos" donde decía: "Sólo puedo desear para vosotros que Israel haga el trabajo que todos sabemos que hay que hacer, y por fin os libere de este cáncer, de este virus, de ese monstruo llamado fanatismo, que hoy se llama Hamas".

En unas declaraciones posteriores (22/02/09) afirmó que acusó a Israel del asesinato de palestinos en Gaza era "propaganda", añadiendo que todos los muertos eran terroristas, identificándose con lo que había hecho el ejército israelí, y diciendo "que Hamás sea erradicado de Gaza y de todo ... ¿Qué se pensaban los palestinos cuando eligieron a Hamás?".

Los palestinos y la opinión pública saben muy bien quienes fueron las víctimas de aquellos ataques del ejército israelí. En Gaza murieron 1.400 personas, de los cuales 800 eran civiles y entre ellos 400 niños, más 300 policías y 300 milicianos.

Se destruyeron equipamientos civiles, entre los que muchos de los sufragados con ayuda al desarrollo catalán. Durante los ataques se bombardeó una mezquita llena de feligreses, hospitales y escuelas de la ONU; se utilizaron armas químicas como las bombas de fósforo blanco y otras desconocidas hasta ahora, y el juez de la ONU, Richard Galdstone, que investiga los ataques de Israel, calificó los ataques como "crímenes de guerra", contrarios a la Convención de Ginebra. (El Informe de Galdstone también acusa a Hamás de crímenes de guerra por los ataques a la población civil de Israel, donde murieron 3 civiles y 10 soldados).

Ante los crímenes cometidos en Gaza, hay que preguntarse: es adecuada la invitación del gobierno de la Generalitat al acto institucional de la Diada de una cantante que les ha justificado? Pues no. Fue un grave error invitar a una persona que no era de pleno consenso dentro de nuestra sociedad, ni tampoco dentro del propio gobierno, como lo evidenciaron algunos políticos manifestando su opinión contraria. Y sólo se puede entender como una reparación del Gobierno en el estado de Israel que había protestado vía diplomática para la participación de miembros del Gobierno catalán en la gran manifestación de rechazo a los ataques de Israel realizada en Barcelona en enero pasado.

El conflicto palestino es estremecedor y desde un punto de vista moral insoportable. Es evidente que la política del pasado de Al-Fathi y hoy de Hamás han sido un error que no ha ayudado a pacificar el conflicto. Pero la actitud de Israel, sólo inició sus primeros pasos como Estado, ha sido peor: un camino lleno de crímenes, de humillación y expolio de los palestinos, que les ha abocado a la resistencia, que en mi opinión no debería haber sido violenta. Aunque las propias Naciones Unidas reconocieron durante toda la etapa colonial el derecho a conquistar la autodeterminación a través de las armas.

Ahora fijémonos en Gaza, una franja de tierra desértica convertida en un enorme campo de refugiados palestinos de las guerras anteriores, donde malviven un millón y medio de personas, privadas de luz, medicamentos y comida por parte del ejército de Israel , que mantiene el territorio bloqueado como si fuera un enorme campo de concentración, o Cisjordania, ocupada por el ejército, dividida por un muro que serpentea por el territorio para separar a los palestinos de las colonias ilegales israelíes; territorio lleno de controles militares que impiden la libre circulación de personas, comercio y el desarrollo. Situación claramente de discriminación y apartheid de los palestinos.

Israel ha forjado su historia como Estado a través de un montón de mentiras. Así la historia oficial del estado de Israel está falseada. Israel nace en 1948 después de una limpieza étnica: la expulsión de 800.000 palestinos de sus tierras, 530 pueblos arrasados y miles de personas ejecutadas (se desconocen las cifras exactas). Y no fue suficiente, ya que después Israel ha ido conquistando por la fuerza de las armas Jerusalén y nuevos territorios palestinos. Hoy, 500.000 colonos también ocupan las mejores tierras de Cisjordania, y los palestinos siguen siendo expulsados de sus casas y tierras.

También es falso que los israelíes convirtieran un desierto en un jardín; Palestina siempre ha sido una tierra rica en regadíos y cultivos. Se obvia que los palestinos son los descendientes auténticos de los semitas que han vivido desde siempre en aquellas tierras, y en cambio se otorga la categoría de semitas sólo a los judíos, cuando los judíos residentes actuales provienen en un 98% de la diáspora. Así, el antisemitismo se asocia sólo con los judíos, pero nunca contra el practicado contra los palestinos.

Estas mentiras han sido posibles construirlas por la complicidad europea y occidental ante las barbaridades cometidas contra el pueblo judío a lo largo de siglos. Es la mala conciencia de los crímenes cometidos contra el pueblo judío, cuando los hicimos condenó a vivir en guetos, después la persecución y expulsión de muchos países, hasta llegar a la hecatombe y holocausto de más de seis millones de judíos perpetrada por el nazismo durante la II Guerra Mundial. Esta mala conciencia hace que, hoy, muchos callen ante los crímenes que el estado de Israel comete en Palestina, que se nieguen a aplicar sanciones económicas o políticas, se nieguen a poner fin a la ayuda militar y la venta de armas , o secundar la campaña internacional de boicot a productos israelíes. Pero, como mínimo, que nuestro Gobierno no nos engañe invitando a falsas pacifistas israelíes como Noa cuando hay auténticas que critican la ocupación militar de Palestina y los crímenes cometidos en sus territorios.

Conflictos y guerras

Tambores de guerra

Escrito por José Luis Gordillo

Miércoles, 02 de Mayo de 2012

Artículo publicado en La Directa

A lo largo del invierno, Netanyahu y Obama han proferido varias amenazas contra Irán que, de momento, ya han provocado un aumento del precio del petróleo, lo que está haciendo más difícil aún la situación económica de los países de la Unión Europea.

A lo largo del invierno, Netanyahu y Obama han proferido varias amenazas contra Irán que, de momento, ya han provocado un aumento del precio del petróleo, lo que está haciendo más difícil aún la situación económica de los países de la Unión Europea.

Nadie puede asegurar si estamos ante una escalada verbal que, mediante la conocida táctica del policía bueno y el policía malo, no tiene otra finalidad que la de forzar la imposición de más sanciones económicas al país de los ayatolás o, por el contrario, es un síntoma de que ya ha empezado la cuenta atrás para una campaña de bombardeos aéreos. Hay muchas razones para defender las dos posibilidades. A favor de la primera se puede aducir, por ejemplo, que tanta amenaza verbal oportunamente publicitada es contrafinalística-es decir, que va contra la finalidad que se afirma perseguir-porque elimina el factor sorpresa, imprescindible para el éxito de una operación militar como la que se está planteando. Los bombardeos contra los reactores nucleares de Irak y Siria, en 1981 y 2007 respectivamente, se prepararon con mucho secretismo. No podía ser de otra manera, porque si se hubieran anunciado lo único que habría conseguido hubiera sido reforzar su defensa o propiciar su desmantelamiento, traslado u ocultación.

A favor de la segunda se puede argumentar que toda escalada verbal amenazante es una apuesta muy arriesgada, pues o bien se consigue algo concreto con ella o bien se hacen añicos el prestigio y la credibilidad de quien la ha protagonizado. En el caso del programa nuclear iraní, EEUU e Israel están condenados a obtener algún avance tangible en los próximos meses, o todo el asunto se acabará convirtiendo en una prueba de su impotencia política y militar.

En cualquier caso, vale la pena centrarse más en los hechos que ya han ocurrido que en los que pueden convertirse, pues los primeros ya son, por sí solos, muy significativos de los tiempos que

nos han tocado vivir. En primer lugar, Obama y Netanyahu no han hecho ninguna referencia al Derecho Internacional para intentar justificar un posible ataque contra Irán. La única razón de peso que en realidad defienden -de forma más o menos implícita- es preservar a toda costa el monopolio nuclear israelí en la región de Oriente Medio. Es cierto que de vez en cuando hacen alguna alusión al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), pero siempre con la boca pequeña porque Israel no lo ha firmado ni ratificado y porque el propósito primigenio del TNP es lograr el desarme nuclear general, no favorecer el monopolio nuclear de los amigos de EEUU y entorpecer el rearme nuclear de sus enemigos. El TNP parte de la premisa de que todas las armas nucleares son malas, con independencia del tipo de régimen político que tenga el Estado que las posee o las quiera poseer. Y en cuanto a la región de Oriente Medio, vale la pena recordar que el objetivo de convertirla en una zona libre de armas nucleares fue propuesto por los vencedores de la Guerra del Golfo de 1991 en la Resolución 687 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En segundo lugar, ni Obama ni Netanyahu han molestado en mencionar la necesidad de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU para obtener, al menos, una resolución que autorice el uso multilateral de la fuerza, dado que su uso unilateral está expresamente prohibido por el apartado 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Los argumentos de Israel sobre las supuestas pretensiones de Irán de destruir el Estado sionista parecen anunciar una posible invocación del derecho a la legítima defensa, la única excepción a la prohibición referida admitida por el mismo texto legal. Pero en este caso habría que recordar que el artículo 51 afirma que la legítima defensa sólo es lícita ante un "ataque armado", no como reacción a unas declaraciones de un dirigente político, porque si fuera así los dirigentes iraníes ya habrían podido atacar a Israel o a Estados Unidos como respuesta a las declaraciones amenazadoras de Obama y Netanyahu. Los dirigentes israelíes y estadounidenses dan por supuesto que ellos están por encima de la ley internacional y que pueden hacer lo que les dé la gana. Por su parte, los dirigentes europeos hacen como siempre: callar y obedecer, aunque su obediencia contribuya a desencadenar el colapso social y económico de Europa.

Somalia

Escrito por Teresa de Fortuny

Miércoles, 02 de Mayo de 2012

Artículo publicado en La Directa

Hace meses que Somalia es noticia en los medios a causa de una hambruna provocada por la sequía y los conflictos bélicos internos. No son noticia, sin embargo, muchos otros aspectos de la situación en Somalia, que han contribuido también a la crisis que sufre el país. De ellos hablaremos a continuación.

La pesca extranjera en las costas de Somalia ha dejado sin trabajo a muchos pescadores somalíes y ha reducido drásticamente la fuente proteínica más importante en la alimentación de la población costera. Durante más de una década, cientos de barcos de varios estados (incluida España) han pescado de forma no declarada y no reglamentada, sin respetar las regulaciones de conservación de las especies ni las ambientales, con consecuencias nefastas sobre los recursos marinos. A veces las capturas superaban el 300% del límite permitido. Parece que los barcos de la UE extraían del país más de cinco veces el valor de su ayuda anual a Somalia. No sólo ha habido un expolio de recursos pesqueros, sino que se ha puesto en grave peligro el futuro de la pesca local.

Otro hecho relacionado también con la destrucción de recursos naturales es el uso de Somalia, desde 1991, como vertedero de residuos peligrosos (nucleares incluidos) por parte de empresas y gobiernos extranjeros, tanto en mar como en tierra y que ha provocado graves daños medioambientales.

Otro aspecto obviado en los medios es que la zona es un punto de gran interés geoestratégico y lo demuestran el número de operaciones militares en la región y la abundancia de países que participan en ellas. En los últimos tres años ha habido, como mínimo, ocho operaciones multinacionales y diecinueve unilaterales.

Se han implicado 37 países, las grandes potencias, los pequeños países vecinos y muchos otros. Las operaciones incluyen la lucha antipiratería y la formación de policías y militares para las fuerzas armadas y de seguridad del Gobierno Federal de Transición (GFT) de Somalia.

Es preciso hacer algunas aclaraciones sobre este GFT al que la comunidad internacional está secundando: No ha sido elegido por la población, sino instaurado desde el exterior. Está denunciado por violaciones de derechos humanos, como el reclutamiento de menores para sus milicias y el uso indiscriminado de la fuerza, con bombardeos sobre sitios densamente poblados. Además, en el GFT son frecuentes los "cambios de camisa".

Altos cargos del GFT son ex jefes de grupos armados que lo han combatido encarnizadamente. Alguno estaba vinculado a actividades de piratería, de importación de armas y de secuestro de extranjeros. Es del todo imprevisible la actuación futura de estos personajes a los que se está manteniendo en el poder.

La formación de policías y militares tiene efectos muy negativos. Amnistía Internacional afirma que no se incluye normativa sobre derechos humanos, que la selección del alumnado permite el acceso como alumnos a presuntos infractores de las normas de derechos humanos, que una parte de la formación corre a cargo de grupos acusados de violaciones de derechos humanos y que se entrenan policías para combatir grupos opositores armados. Hay que añadir el riesgo de que algunos de los efectivos adiestrados pasen después a la insurgencia.

Por otro lado, está entrando mucho armamento en el país a través del apoyo externo militar al GFT y provoca un incremento del armamentismo en el país. Dice la ONU que el 80% de este apoyo armamentístico y militar se ha desviado hacia los mercados de armas locales o hacia los grupos de la oposición y que las contribuciones al sector de la seguridad del GFT representan una fuente de inseguridad en Somalia y un obstáculo para la estabilización.

Además, Somalia se ha convertido en un área nueva de negocio para las empresas privadas de seguridad y defensa. Se ha añadido la seguridad marítima a la lista de sus servicios (equipos de seguridad a bordo, entrenamiento de armas de fuego para la tripulación, gestión de la negociación y del rescate en caso de secuestro ...). Una de estas empresas ha conseguido un contrato para entrenar una milicia privada de 2.000 hombres para combatir tanto la piratería como el grupo opositor armado al-Shabab. Es la empresa Saracen, tras la cual está el fundador de Blackwater. Este tipo de empresa se ha instalado en la zona y eso aumentará la militarización y la violencia.

Finalmente, cabe destacar que la ayuda internacional se concentra en la vertiente militar, lo que demuestra que se priorizan los intereses geoestratégicos extranjeros y no el beneficio de la población somalí.

Irán y las bombas nucleares

Escrito por Xavier Bohigas i Teresa de Fortuny

Martes, 10 de Abril de 2012

Artículo publicado en el Ara

Desde hace unos años, la comunidad internacional está presionando a Irán para que abandone su programa nuclear. Creen que el programa esconde la intención de fabricar una bomba nuclear.

Irán ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Como firmante del Tratado, se compromete a no fabricar ni adquirir armas nucleares. Además, tiene que admitir las salvaguardas que se estipulen con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Por otra parte, se le reconoce el derecho de investigar, producir y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos.

La desconfianza del programa nuclear iraní, fomentada por EEUU e Israel, ha provocado que el Consejo de Seguridad de la ONU haya aprobado, desde 2006, diversas resoluciones donde se pide prioritariamente que Irán suspenda el enriquecimiento de uranio. En alguna resolución se dictan sanciones financieras contra personas e instituciones. Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene como objetivo aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, reconocidas por el TNP. Respecto a las acusaciones, dice que no están probadas, que se fundamentan en suposiciones y pide documentos que las sostengan.

Parece claro que Irán es capaz de enriquecer uranio al 20% (para hacer funcionar reactores de investigación y aplicaciones médicas). Pero no está demostrado que, actualmente, pueda enriquecer uranio al 95% (necesario para hacer bombas).

Hay que diferenciar entre enriquecer uranio o construir una bomba. Hacer una bomba no representa demasiada dificultad técnica para un país desarrollado, según reconoce la misma OIEA. Alemania, Italia, España y muchos otros podrían fabricar una en menos de seis meses, si quisieran. Recordemos que hasta Corea del Norte y Paquistán han construido bombas nucleares, aunque son países con un bajo desarrollo tecnológico. La dificultad para disponer de una bomba es la obtención de la carga explosiva (uranio o plutonio), no su montaje.

Otros estados –Brasil, India, Argentina, Taiwán, Corea del Sur- han destinado muchos más esfuerzos que Irán en el desarrollo de la energía nuclear i, en ninguno de estos casos, la comunidad internacional ha mostrado signo alguno de preocupación. Y tampoco ha denunciado los cuatro estados que ya tienen armas nucleares y no han firmado el TNP (India, Paquistán, Israel y Corea del Norte). Eso hace sospechar que el auténtico problema no es el programa nuclear iraní.

Si Irán abandonara su programa nuclear, ¿desaparecería la presión sobre Irán? Parece claro que no. Irán, además de tener gran cantidad de recursos energéticos, es una potencia regional emergente que puede entrar en competencia con otra de la zona, como Arabia Saudita o Qatar que, recordémoslo, son aliados de EEUU. Por tanto, es muy posible que el programa nuclear iraní sirva de excusa para debilitar a Irán y así frenar su influencia creciente en la zona. No es casualidad que Arabia haya hecho enormes inversiones militares en los últimos años.

El “problema nuclear de Irán” hace reaparecer el grave problema de las armas nucleares. Hay nueve estados que poseen arsenales nucleares, cinco han firmado el TNP (EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia), y cuatro no lo han hecho (mencionados más arriba). Actualmente, se evalúa el arsenal nuclear mundial en más de 22.000 armas, de las que EEUU y Rusia poseen más del 95%.

Las armas nucleares suponen una amenaza directa para la población mundial. El arsenal nuclear mundial es suficiente para provocar 100.000 Hiroshimas. La explosión de mil bombas nucleares haría inhabitable el planeta. La explosión de una sola bomba nuclear produciría un desastre ecológico de mayores consecuencias que el provocado por el accidente de Fukushima. Las bombas existentes son un auténtico peligro real.

La única manera de evitar el peligro nuclear es la eliminación de todas las armas nucleares actualmente existentes. La prohibición de armas nucleares no es un objetivo utópico, es una necesidad. En las periódicas revisiones del TNP, se recuerda que los estados nucleares deben iniciar un proceso para la reducción de sus arsenales, pero nunca se ha llegado a la elaboración de un calendario.

Es preocupante que en cualquier estado quiera fabricarse una bomba nuclear, pero el auténtico peligro real, desde nuestro punto vista, es que los estados ya nuclearmente armados no decidan reducir sus arsenales.

La acusación contra el programa de armas nucleares de Irán no es nada clara

Escrito por Robert Kelley

Lunes, 02 de Abril de 2012

El conflicto entre Irán y Occidente continúa calentándose justamente cuando los iraníes anuncian a principios de este mes que han comenzado a enriquecer uranio en una segunda gran instalación, Fordo, ubicada en un complejo bien defendido fuera de la ciudad de Qom.

Ya que hay mucho en juego, vale la pena hacer otra ojeada a la causa principal de la tensión: el presunto programa de armamento nuclear de Irán. Que este es un programa activo, es un hecho ampliamente reconocido en EEUU. De hecho, la evidencia, descrita en un informe publicado en noviembre de 2011 por el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, es incompleta. Además, la forma en que han presentado los datos, produce una enfermiza sensación de déjà vu.

En 2003, como miembro del Equipo de Acción en Irak de la OIEA, aprendí de primera mano de qué manera la ocultación de hechos puede desembocar en un derramamiento de sangre. Habiendo conocido los detalles en ese momento, aunque no me fue permitido hablar, siento una cierta responsabilidad compartida por la guerra que mató a más de 4.000 estadounidenses y más de 100.000 iraquíes. Hoy, como ciudadano particular, espero ayudar a asegurar que los hechos sean claros antes de que EEUU no dé pasos adelante que puedan conducir, de forma intencionada o no, a una nueva conflagración, esta vez en Irán.

Está aceptado que Irán tuvo en un cierto momento un programa de armamento nuclear. La enorme inversión del país en un complejo subterráneo secreto de enriquecimiento de uranio en la ciudad de Natanz es básicamente la prueba de intenciones clandestinas. El reactor de producción de plutonio militar en Arak es aún otro indicador.

Sin embargo, en la Evaluación de la Inteligencia Nacional de 2007, las agencias de EEUU concluían "con un alto grado de confianza" que Irán había detenido su programa de armas nucleares a finales de 2003, bajo la presión internacional. Es poco frecuente que los oficiales de inteligencia determinen que tienen evidencias suficientes para decir que un programa ha terminado, por tanto, presumiblemente, la información era muy buena. Igualmente, hasta ese año (2007), el OIEA había informado sistemáticamente que no tenía ninguna información que sugiriera que Irán tuviera un programa de armamento nuclear con posterioridad a 2004.

La cuestión, por tanto, no es si hay evidencia de que Irán ha tenido un programa de este tipo, sino si hay evidencia de que lo haya reiniciado después de que lo cerrara en 2003. El informe de Amano es extenso en el primer aspecto y muy corto en el segundo. En el documento de 24 páginas (de distribución restringida, pero fácilmente disponible online) todos los apartados, excepto tres, que se ofrecen como prueba de un posible programa de armas nucleares, no tienen fecha o se refieren a eventos anteriores 2004. La mayor parte de un anexo de 14 páginas se destina a retomar lo que ya se sabía: que en un cierto momento el programa nuclear de Irán tenía dimensiones militares.

Los tres "indicios"

¿Cuál de los tres apartados con fecha reciente demuestra que el programa de armamento nuclear de Irán puede haber sido reactivado?

Dos de ellos se refieren a supuestos estudios de modelización de una ojiva nuclear diseñada en 2008 y 2009 y a una supuesta "investigación experimental" sobre reducción y optimización de un paquete altamente explosivo relacionado con armas nucleares. Son atribuidos a "dos estados miembros", por lo tanto, la fuente es imposible de evaluar. Además, se cuestiona su validez debido a la manipulación que hace el informe del tercer apartado.

Esta tercera evidencia, según el informe, nos dice que Irán está embarcado en un programa de cuatro años, comenzado hacia el 2006, para validar el diseño de un dispositivo para producir un rayo de neutrones que pueda iniciar una reacción de fisión en cadena. Aunque no está clara la fuente de la que se fía del informe, lo que sí es cierto es que este proyecto ya focalizó tiempo atrás lo que pareció una campaña de desinformación.

En 2009, el OIEA recibía un documento de dos páginas, que pretendía provenir de Irán y que describía el mismo supuesto proyecto. Mohamed ElBaradei, que era entonces el director general del organismo, rechazó la información porque no había habido una cadena de custodia del

documento, no había fuentes seguras ni ninguna señal en el documento, fecha de publicación o cualquier otra cosa que pudiera establecer su autenticidad. Es más, el documento contenía errores estilísticos, que sugerían que el autor no era un hablante nativo persa. Parecía que hubiera sido escrito usando un procesador de textos árabe, más que persa. Después de que ElBaradei tirara el documento a la papelera, fue publicado por el diario británico The Times.

Este episodio tuvo similitudes sospechosas con un caso previo, que se provó de una forma definitiva que era un engaño. En 1995 el OIEA recibía algunos documentos del Sunday Times, un diario asociado al Times, que pretendían demostrar que Irak había reanudado su programa de armas nucleares, a pesar de todas las evidencias en contra. El OIEA determinó rápidamente que los documentos eran elaboradas falsificaciones. Había errores en el formato de las correcciones de los documentos, la clasificación y las fechas y muchos errores de lenguaje y de estilo indicaban que el idioma propio del autor era diferente del árabe o el persa. Las inspecciones posteriores de 1995 en Irak confirmaron incontrovertiblemente que no había habido reanudación del programa nuclear iraquí.

Ahora lamento que ElBaradei no hablara con más vehemencia, antes que EEUU comenzara la guerra en Irak, sobre la falsificación de evidencias: los documentos de 1995, las falsificaciones adicionales suministradas a la OIEA en 2003 y otras. Un buen hombre, que ha sido un abogado internacional con años de experiencia tratando con medias verdades y evasivas, pero que quedó atrapado entre decir la historia completa e insultar abiertamente a EEUU, que suministra el 25% de los fondos de la OIEA.

ElBaradei calificó documentos, suministrados a la OIEA, sobre los intentos de Irak de adquirir uranio de África como "no auténticos". Una descripción mejor habría sido "descaradas falsificaciones de aficionado". Él aportó la evidencia de que los tubos de aluminio que EEUU decía que eran para las centrifugadoras nucleares, eran realmente para cohetes, pero no hizo público los detalles del apoyo de ingeniería. La verdad se perdió en el escandaloso detalle del Secretario de Estado Colin Powell sobre las supuestas armas de destrucción masiva, que era erróneo en prácticamente todos los sentidos.

El sucesor de ElBaradei ha fallado de forma similar al dejar de señalar en su informe las anteriores dudas sobre que Irán continúe desarrollando un dispositivo de producción de neutrones. Si Amano ha encontrado razones nuevas para examinar los aspectos muy cuestionables de esta historia, los debe presentar. Dadas las dudas anteriores sobre el episodio, su informe al respecto debe ser irreprochable.

Cuando se dedica a controlar cuidadosamente las potenciales desviaciones de los materiales nucleares (la misión principal del OIEA), el organismo ha hecho su trabajo con precisión. Necesita ser igualmente riguroso cuando profundiza en denuncias sobre actividades de armas de Irán.

Debo ser claro: Irán merece un examen estricto. Afirma que ha abandonado sus ambiciones de armamento nuclear, aunque repetidamente actúa como si tuviera algo que ocultar. Soy escéptico; sospecho que los iraníes pueden tener un programa de armamentismo en curso. La incertidumbre debe resolverse.

Asimismo, no podemos ser otra vez rehenes de falsificaciones y del giro de los datos para empeorar el asunto. Si Irán está desarrollando armas nucleares, vamos a probarlo mediante el análisis de información sólida y actual, no de datos desacreditados y reciclados. Si debe haber una guerra con Irán, que no se tengan que repetir, más tarde, los artículos y libros angustiados de funcionarios que guardaron para sí sus dudas. Vamos a poner ahora todos los hechos sobre la mesa.

Robert Kelley, ingeniero nuclear, ha sido un miembro senior de investigación del SIPRI desde 2010. Fue director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), donde trabajó nueve años. Más de treinta años en el laboratorio de armas nucleares de la Universidad de California han hecho un experto en armamento.

Un año de revueltas en Siria: un año más de represión al estilo Al Asad

Escrito por Valentina Saini

Lunes, 05 de Marzo de 2012

Este artículo ofrece datos analíticos que nos ayudan a entender algunas de relaciones de fuerzas que están en juego en Siria.

Lo que está ocurriendo en Siria es devastador y criminal. Por eso el último veto de Rusia y China a la resolución más suave que se haya presentado hasta ahora (06/02/12) en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria ha desencadenado tanta indignación. Rusia y China se niegan a aceptar una resolución de condena al gobierno sirio. De la misma manera en que EEUU y Reino Unido vetaron, en el verano de 2006, una resolución que pedía el alto al fuego durante la guerra entre Israel e Hezbollah en el Líbano. Lo que se ha de tener claro, entre tanta reprobación por Rusia y China, es que aunque se aprobara una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, Bashar Al Asad ciertamente no la respetaría. Las visitas diplomáticas a Damasco tampoco servirán de nada. Aun en el hipotético caso (muy poco probable) de que se consiga convencer a Bashar Al Asad a emprender unas reformas políticas, aquella parte de la población siria que está pagando el precio más alto de esta situación jamás aceptaría que Al Assad (ni nadie del mismo régimen) siguiera en el poder. Hace ya meses que el conflicto de Siria ha pasado el punto de no retorno.

Las protestas contra el régimen de Bashar Al Asad empezaron claramente inspiradas por las mismas razones que las de Túnez y Egipto. Parte de la población se echó a la calle para pedir la caída del régimen, la instauración de una democracia, mejores condiciones de vida, libertad y dignidad. Pero mientras hace once meses, cuando empezaron, se trataba de demostraciones pacíficas, ahora es evidente que el conflicto de Siria es internacionalizado, en el sentido de que tanto el gobierno como la oposición reciben apoyo militar de otros gobiernos. Y no es sorprendente, porque Siria es un bocado demasiado apetitoso. Estados Unidos, Israel, Unión Europea, Turquía y Arabia Saudí podrían aislar a Irán, que lleva años intentando afirmarse como potencia regional. Si Bashar Al Asad dejara el poder, Irán lo tendría indudablemente más difícil para seguir armando, por ejemplo, al partido libanés de Hezbollah con misiles que pueden alcanzar Israel. Por otra parte, Siria es uno de los mayores importadores de armas rusas.

Y Rusia tiene en el puerto sirio de Tartus su única base naval en el Mediterráneo. Un punto importante, sobre todo considerando la infraestructura del escudo anti-misiles que EEUU está instalando en el Mediterráneo (incluso en Rota, Cádiz).

Hay muchos actores (internos y externos) involucrados en este conflicto. La pacificación y la estabilización de este país no serán en absoluto ni rápidas ni sencillas. La población siria está dividida entre una mayoría de musulmanes (suníes, alauíes, kurdos y otros) y una minoría de cristianos principalmente. Las prácticas represivas e ilegales del régimen de los Assad han llevado el país a una condición de pobreza generalizada y divisiones sociales muy profundas. Una parte de la población (mayoritariamente los alauíes y cristianos) vivía relativamente bien, sacando todo el provecho que podía de la estabilidad que los Assad han mantenido y, sobre todo, sin interesarse por la política. Es decir, sin criticar al régimen.

El control de los servicios de inteligencia sobre la población está tan arraigado que los sirios tienen mucho cuidado antes de hablar de política, puesto que hasta el vecino puede ser una espía del régimen. Así que la población no representa un frente compacto contra Bashar Al Asad.

De hecho ni siquiera la oposición es homogénea: sabemos que hay dos grupos principales de oposición, el Consejo Nacional Sirio (CNS) y el Ejército Libre Sirio (ELS). Además, también están los así llamados “comités locales de coordinación”, los consejos revolucionarios y otros grupos. Cada uno de ellos con su propia idea de cómo habría que seguir luchando contra el régimen. Por no hablar de la complejidad y extensión de las fuerzas armadas y de los cuerpos de inteligencia, cuya gestión en un sistema post-Al Asad no será nada fácil. No cabe duda de que el país tardará años en recuperarse.

Y mientras vemos los tremendos vídeos que personas como nosotros hacen llegar al mundo para denunciar lo que está pasando, hemos de saber y asumir, una vez más, que todos nuestros gobierno son cómplices directos de estos crímenes, así como de aquellos con los que el régimen sirio se ha manchado en estos largos años. No nos despertamos un día de marzo de 2011 en el que un señor, de golpe, se había convertido en un dictador sanguinario.

Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la represión, la tortura y los asesinatos por parte del régimen de los Assad (que comenzó con Hafez Al Asad en 1971) no son nada nuevo. Pero Al Asad nunca movió un dedo contra Israel, pese a tanta retórica anti-imperialista y anti-sionista.

Ni siquiera hizo nada cuando el territorio sirio (y precisamente un supuesto reactor nuclear) fue bombardeado por aviones militares israelíes en 2007. Así que en el caso de Siria, como en muchos otros, para la “comunidad internacional” ha valido siempre lo de “mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer”.

Mucho antes de llegar a la indignación por los vetos que bloquean el sistema de Naciones Unidas, es el entramado de intereses que gobierna el mundo que nos lleva una y otra vez a ser testigos de situaciones como la de Siria.

Mientras se sigan vendiendo armas a países cuyos gobiernos son conocidos por no tener ningún reparo en recurrir a cualquier medida para quedarse en el poder; mientras la impunidad siga siendo, por lo general, el destino de aquellos líderes que violan los derechos humanos de su pueblo (o los de otros); mientras se sigan apoyando a dictadores porque son el mal menor (para los “líderes” de la “comunidad internacional”, claro), es inevitable que acabemos llegando a este punto, una y otra vez, no sólo en Siria, sino en muchos otros países del mundo.

La presencia extranjera en Somalia

Escrito por Teresa de Fortuny, Xavier Bohigas, Alejandro Pozo

Lunes, 05 de Marzo de 2012

Este artículo recoge algunos de los datos más significativos de la presencia militar española en Somalia en relación a la piratería.

En un artículo del número 42 de esta publicación (Materiales de trabajo) hablábamos de las operaciones militares españolas en el Cuerno de África. Recuperamos el tema para abordar otros aspectos de la situación en aquella región y, más especialmente, en Somalia.¹

En primer lugar, la zona es un punto de gran interés geoestratégico. Tenemos la prueba en el número de operaciones militares en la región y en la abundancia de países (u organismos multinacionales) que participan en ellas. En los últimos tres años ha habido, como mínimo, ocho operaciones multinacionales y diecinueve unilaterales. Se han implicado 37 países. No únicamente los poderosos (EEUU, China, Rusia, Japón, la UE, la OTAN). También están presentes todos los países de la zona: Uganda, Kenia, Burundi, Yibuti, Eritrea o Etiopía. Y muchos otros como Australia, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, por citar algunos. Las operaciones militares incluyen desde funciones de control e influencia hasta tareas de vigilancia y patrulla antipiratería, pasando por la formación y entrenamiento de policías y militares que, teóricamente, deben constituir las fuerzas armadas y de seguridad del Gobierno Federal de Transición (GFT) de Somalia.

En segundo lugar, es preciso hacer algunas aclaraciones sobre este gobierno somalí a quien la comunidad internacional está favoreciendo. No ha sido elegido por la población, sino que ha sido instaurado desde el exterior. Existen muchas denuncias contra el GFT por violaciones de los derechos humanos. Se le acusa de reclutar menores de edad para sus milicias y de uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, incluso de bombardeos sobre lugares con una alta densidad de población civil. AMISOM, la fuerza militar de la Unión Africana, financiada por EEUU y la UE y desplegada en Mogadiscio, ha sido objeto también de acusaciones similares. Además, el GFT se caracteriza por los frecuentes "cambios de camisa".

Jefes militares de grupos opuestos al GFT y que lo han combatido encarnizadamente han pasado después a ocupar cargos de alto rango (es el caso de un ministro de Defensa y del actual presidente del GFT). Alguno de ellos estaba vinculado a actividades de piratería, de importación de armas y de secuestro de extranjeros para obtener rescate.

Es del todo imprevisible la actuación futura de estos personajes a los que hoy se ayuda para que se mantengan en el poder. Cabe destacar que el Gobierno español ha hecho caso omiso de las peticiones de diversas ONG que le pedían que se pronunciara sobre las denuncias contra el GFT.

Este entrenamiento de policías y militares puede tener efectos muy negativos. Un informe de 2010 de Amnistía Internacional concluye que en este entrenamiento no se incorpora normativa sobre derechos humanos, que el método de selección del alumnado posibilita el acceso como alumnos a presuntos infractores de las normas de derechos humanos, que una parte de la formación corre a cargo de grupos acusados de violaciones de los derechos humanos, que no se hace una diferenciación entre funciones militares y policiales (se entrenan policías para combatir grupos opositores armados) y que se están transfiriendo armas al GFT sin garantías de que no serán utilizadas en abusos contra los derechos humanos.

Y más aún, hay que añadir el peligro real que algunos de los efectivos adiestrados pasen después a la insurgencia. La misma ex ministra de Defensa, Carme Chacón, lo reconocía en abril de 2010 en una intervención en el Congreso.

Por otra parte (y pese al embargo de armas a Somalia decretado por la ONU en 1992 y violado abierta y sistemáticamente desde entonces, sin que se haya adoptado ninguna medida digna de mención), está entrando mucho armamento en el país a través del apoyo externo militar oficial al GFT y, por tanto, hay un incremento del armamentismo.

Según la ONU, el 80% de este apoyo armamentístico y militar se ha desviado hacia fines privados, hacia los mercados de armas locales o hacia los grupos de la oposición. Y afirma también la ONU que las contribuciones al sector de la seguridad del GFT representan una fuente neta de inseguridad en Somalia y un obstáculo para la tarea de estabilización.

Paralelamente, Somalia se ha convertido en una nueva área de negocio para las empresas privadas de seguridad y defensa. Muchas ya están añadiendo la seguridad marítima a la lista de sus servicios.

En sus webs ofrecen equipos de guardas de seguridad a bordo, entrenamiento de armas de fuego para la tripulación, gestión de la negociación y del rescate en caso de secuestro (apoyo 24 horas) e informan de los beneficios de contratar seguridad privada en el momento de negociar favorablemente la prima de seguro de los buques. Incluso una de estas empresas ha conseguido un contrato de entrenamiento de una milicia privada de 2.000 hombres para combatir tanto la piratería como el grupo opositor armado al-Shabab.

Este es el caso de la empresa Saracen, con sede en Sudáfrica, detrás de la cual está Erik Prince, el fundador de Blackwater. Evidentemente, el hecho de que este tipo de empresa se haya instalado en la zona no hará más que aumentar la militarización y la violencia.

El peligro que la piratería en la zona representa para la flota pesquera europea fue uno de los argumentos esgrimidos a la hora de impulsar la operación militar Atalanta de la UE.

Nunca se habló, sin embargo, de los perjuicios que la pesca extranjera en las costas de Somalia ha ocasionado en la pesca local: ha dejado sin trabajo muchos pescadores somalíes y ha reducido drásticamente la fuente proteínica más importante en la alimentación de la población costera.

Según la ONU, durante más de una década, cientos de barcos de varios estados (ya hablamos de España en el artículo anterior) han pescado de forma continuada en las aguas de Somalia de una manera no declarada y no reglamentada. Esto ha tenido unas consecuencias de largo alcance con un efecto desastroso sobre la gestión sostenible de los recursos marinos de Somalia. Fuentes locales informaron a la FAO que, en algunos lugares, las capturas de ciertas especies podían superar el 300% de los niveles permitidos.

No se compensó nunca a los pescadores locales y no se respetaron las regulaciones de conservación de las especies ni las ambientales. Además, se cree que sólo los barcos de la UE extraían del país más de cinco veces el valor de su ayuda anual a Somalia. No sólo ha habido un expolio de recursos pesqueros, sino que se ha puesto en grave peligro el futuro de la pesca artesanal local.

Aun se da otra circunstancia relacionada también con la destrucción de recursos naturales: desde 1991 Somalia ha servido de vertedero de residuos peligrosos (incluso nucleares) para empresas y gobiernos extranjeros, tanto en el litoral como en tierra. Esta práctica ha provocado unos daños medioambientales y de pérdida de recursos marinos que un país sin estado efectivo como Somalia, no ha podido ni evitar ni paliar.

Para terminar, queremos señalar que la ayuda internacional se ha centrado en la vertiente militar. Del presupuesto de la Conferencia Internacional de Donantes de Somalia, más de tres cuartas partes (164 millones de euros) corresponden a gasto militar y una cuarta parte a ayuda humanitaria (48 millones de euros).

Al margen de estas cifras, sólo el coste de la operación Atalanta se estima en 450 millones de euros anuales, a los cuales hay que añadir las contribuciones de las otras siete misiones militares multilaterales en curso y de todas las operaciones unilaterales, el coste de la mayoría de las cuales es desconocido. Es decir, si Somalia importa, es básicamente desde el punto de vista político-militar. Al menos, esta es la conclusión que cabe extraer de los esfuerzos económicos demostrados.

Y ello pese a que Somalia arrastra desde hace años una de las peores crisis humanitarias del mundo. No interesa tanto la población somalí como los beneficios extranjeros en Somalia, y esto es aplicable también al caso español. Podemos concluir que la intervención militar extranjera en su conjunto es perjudicial para la población de Somalia. Aunque, seguramente, muchos de los que intervienen militarmente ahí estarán satisfechos.

Libia, un negocio prometedor para las Compañías Militares Privadas

Escrito por Francesc Benítez

Martes, 17 de Enero de 2012

Artículo publicado en La Directa

El pasado 9 de diciembre, el portal de información United Press International difundía un artículo donde se informaba de los movimientos de acercamiento a Libia que están realizando algunas Compañías de Seguridad Privadas (o Compañías Militares Privadas) como Blue Mountain Group, Olive Group, AKE, Garda Security Group, Control Risks Group i Gallice Security¹.

Las empresas que están forzando la presencia de estos actores de la seguridad privada en la nueva Libia son mayoritariamente compañías petrolíferas internacionales que piden que se garantice la seguridad en el terreno antes de enviar nuevamente al personal especializado en la extracción y el tratamiento del crudo para recuperar los niveles de producción anteriores a la guerra.

Ante la imposibilidad de poner rápidamente en marcha un ejército; con un grupo de milicias aún fuertemente armadas dispersas por el territorio que todavía pueden desafiar el liderazgo provisional del Consejo Nacional de Transición (CNT), y con un poderoso lobby de empresas petrolíferas denunciando la parálisis de la extracción, parece claro que el CNT ha cambiado su posición inicial en este tema y ahora está facilitando el desarrollo de estas compañías mediante la emisión de certificados de no objeción.

En junio de 2010, se publicaba en La Directa un artículo que describía la proliferación de este nuevo actor que suponen las compañías militares privadas en escenarios inestables o posbélicos donde los gobiernos locales no han podido alcanzar el poder real en todo su territorio.

Como denunciaba Tomàs Gisbert, se debe tener en cuenta que los intereses de estas empresas distan mucho de facilitar la estabilidad futura y la cohesión social de los territorios donde operan ya que, en general, sus objetivos principales se concretan en mantener vigentes los contratos multimillonarios el máximo de tiempo que les sea posible, y eso sin considerar el vacío legal existente y cuestionado ampliamente en cuanto a quien tiene la responsabilidad sobre las acciones y delitos que puedan cometer estas compañías. Nuevamente se pone de manifiesto que, fuera de aplaudir la intervención militar de la OTAN, la ONU -y por extensión la comunidad internacional- se muestran incapaces de poner en marcha iniciativas civiles creativas y no violentas de cohesión a la hora de construir sistemas democráticos reales en territorios que han sufrido un conflicto armado sangriento como es el caso de Libia, que acaba siendo víctima de los intereses a corto plazo de las compañías que habían tenido el control de los recursos cuando estaba el dictador, y que lo quieren seguir manteniendo a cualquier precio después de su caída independientemente de la moralidad de los medios utilizados para hacerlo caer.

Desplazados por la tierra: no habrá paz sin justicia

Escrito por Tomàs Gisbert

Lunes, 05 de Diciembre de 2011

Entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se han realizado las IX Jornadas de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia con el título ¿De quién es la tierra? La tierra es un elemento central del conflicto social y armado de Colombia.

Hablar de la tierra es hablar de la disputa por el territorio entre actores armados legales e ilegales, de los 4,5 millones de colombianos y colombianas desplazados -colectivos campesinos, afrocolombianos e indígenas-, y de más de 8 millones de hectáreas de tierra usurpadas en los últimos 30 años, casi el 12% de la superficie agropecuaria total del país.

El caso de la comunidad Las Pavas es ilustrativo de los mecanismos del conflicto¹ y se ha convertido en un caso emblemático de la lucha de los desplazados por su tierra. Grupos paramilitares, vinculados al narcotráfico, los expulsan de sus tierras en dos ocasiones, 2003 y 2006, la comunidad lucha legalmente por la propiedad de su tierra a la vez que retornan a ella. En 2009 dos empresas dedicadas al cultivo de la palma de aceite se hacen, sin que el litigio pendiente esté resuelto, con los títulos de propiedad y hacen que la policía actúe de forma irregular en su favor y desaloje a la comunidad.

La Corte Constitucional, el pasado mes de mayo, les da la razón, y justo cuando Misael Payares, líder de la comunidad, viene a Barcelona a las Jornadas de la Taula, la fiscalía abre un proceso contra la comunidad basándose en el único testigo de un miembro de la comunidad que declara que la condición de desplazados de aquellas tierras es falsa.

Estos hechos evidencian lo que Marco Romero de CODHES² -quien también ha participado en las jornadas- denunciaba: la enorme asimetría entre los medios legales de que disponen las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas frente a los enormes recursos legales de los latifundistas y los poderosos a la hora de disputar las tierras.

Una justicia, una fiscalía y un aparato policial, junto con el aparato militar, los más fuertes de toda América, después de Estados Unidos, que ha sido incapaz, por decirlo suavemente, de averiguar el despojo de más de 8 millones de hectáreas, ni de impedir ni resolver una parte mínimamente significativa de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de los y las líderes campesinas y de personas defensoras de derechos humanos que se siguen produciendo.

Sólo en el primer año del gobierno de Juan Manuel Santos han sido asesinados 22 personas líderes de comunidades desplazadas o reclamantes de tierras.

Hechos como este cuestionan seriamente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del gobierno del nuevo presidente Juan Manuel Santos. A pesar de que la ley ha supuesto un avance en la medida en que reconoce el problema del acceso a la tierra y la desigualdad como los ejes centrales del conflicto social y armado colombiano, será preciso ver si se acaba aplicando de manera efectiva.

La usurpación de tierras se ha basado en un sistema, que en los últimos 10 años se puede decir que se ha industrializado. Si ya fue un escándalo la infiltración paramilitar en varias instituciones estatales como el DAS -los servicios de inteligencia de Uribe-, o el mismo congreso colombiano, también están saliendo pruebas de cómo el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCODER) fue infiltrado por la estrategia paramilitar, tal y como ha reconocido el propio Ministerio de Agricultura de Colombia.

La usurpación ha contado con una vasta trama que disponía de una amplia red de funcionarios y un amplio abanico de métodos fraudulentos para saltarse las medidas de protección de tierras abandonadas y poder disfrutar de las generosas subvenciones otorgadas por el Gobierno. La corrupción se ha sumado a la violencia paramilitar que ha acelerado el desplazamiento y la usurpación de tierras.

Los proyectos de crecimiento económico sitúan la agroindustria -obviando una reforma agraria transformadora- y la minería en los ejes principales, hechos que no auguran nada bueno, sino una nueva etapa de lucha por la tierra que impondrá tensiones sobre los territorios y provocará una nueva ola de desplazamientos. El desplazamiento y la usurpación de tierras no son hechos sólo del pasado.

Una ley como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sin una política activa que garantice su aplicación es una ley de cara a la galería. 22 asesinatos de personas reclamantes de tierras el último año son la muestra.

Pero si algo saben las clases dominantes colombianas es hacer leyes, y además, que parezcan democráticas. Si un jurista analizase el sistema político colombiano mirando únicamente sus leyes podría pensar que Colombia es uno de los estados más democráticos del mundo, pero el estado de derecho no es únicamente tener bonitas leyes, es igualmente imprescindible la voluntad política y los recursos necesarios para aplicarlas eficazmente, sino no son más que un escarnio a la democracia y a una comunidad internacional que, desgraciadamente, mira hacia otro lado con tal de que sus multinacionales puedan entrar a hacer negocios, mientras, eso sí, recomienda con la boca pequeña que se respeten, un poquito más, los derechos humanos.

Sin sorpresas en Libia

Escrito por Maria de Lluc Bagur

Miércoles, 21 de Septiembre de 2011

(Artículo publicado en La Directa)

La primavera pasada resurgía un debate, tan arcaico como ineludible, sobre la necesidad de la intervención militar de la OTAN en Libia. Curiosamente, las masas de gente que ocho años atrás llenaron las calles de las principales ciudades europeas por el "No a la guerra" de Irak, en aquel momento quedaban silenciosas.

Seguramente el clima revolucionario que por aquellos días había invadido el Norte de África y que de alguna manera se esparcía por Europa había entusiasmado a las sociedades occidentales, hasta tal punto que era incuestionable la teoría que aseguraba que Gadafi era un dictador indeseable que tenía sometido a su pueblo. Así la responsabilidad de las potencias occidentales era la de ayudar a los libios a liberarse y a instaurar, por fin, una democracia "real", a través de una intervención militar.

Ahora, cuando el nombre de Libia sólo aparece en los medios de comunicación de masas para especular sobre el paradero del despótico dictador Gadafi, quizás es hora de echar la vista atrás e intentar analizar qué es lo que realmente ha traído de bueno esta intervención.

De momento no disponemos de datos exactos para cuantificar las consecuencias de la intervención, y seguramente nunca tendremos. No importa, estamos tan acostumbrados a contabilizar las víctimas por miles cuando hablamos de conflictos armados, que nuestras mentes han perdido la capacidad de entender lo que significa, propiamente, una vida humana. Haya los muertos que haya, lo que sí sabemos es que los niños o niñas libios (que con el dictador Gadafi tenían asegurada la escolarización) ahora tienen las escuelas totalmente derruidas, y que aquellos que corrían hace unos días por los pasillos del Elíseo de París tal vez no contemplan su reconstrucción como prioritaria, lo que dejará sin una escuela en condiciones a muchos niños y niñas durante un largo tiempo.

También podemos dar por seguro que la destrucción de los hospitales y centros de salud afectados por los bombardeos, no podrán dar el servicio que daban hace sólo unos meses, cuando todo el mundo tenía acceso.

Y eso por no hablar de los beneficios del petróleo local, que hasta ahora beneficiaban principalmente la economía libia, y que ahora servirá para pagar los favores rendidos por los aliados de la OTAN.

Pero tampoco hay que extenderse en ello: la destrucción de infraestructuras, los muertos, las epidemias, los conflictos sociales, el empobrecimiento de la población... son las consecuencias típicas de cualquier guerra, lo que pesaba en la balanza al lado contrario de las fechorías de Gadafi. Seguramente, son las consecuencias del "mal menor" a que se referían algunos analistas en el famoso debate de la primavera.

Sin embargo, seguimos llamando "intervención humanitaria" a lo que claramente es una ocupación militar. Otra consecuencia del "mal menor".

La memoria es un enemigo no declarado del capitalismo imperialista, de otra forma no se podría explicar que la Doctrina del Shock, en virtud de la cual en momentos de crisis los intereses de los poderes económicos se aprovechan para marcar la agenda política, sea infalible en nuestras sociedades y que Irak y Afganistán no nos hayan enseñado nada. Nos queda por ver cuán feliz será la población libia a partir de ahora.

Después de Gaddafi, ¿Al Assad?

Escrito por Valentina Saini

Lunes, 12 de Septiembre de 2011

En estos últimos días, el discurso del gobierno iraní acerca del régimen sirio de Bachar Al Assad, uno de sus mayores aliados, ha cambiado. Ahmadineyad ha empezado a recomendar al presidente sirio que detenga la represión de la oposición y que emprenda un diálogo para alcanzar una solución política del conflicto.

Pero, aunque en el hipotético caso de que Bachar Al Assad le escuchara, es difícil pensar que la población siria, que sigue saliendo a las calles de varias ciudades a pesar de los asesinatos, de las detenciones, las torturas y desapariciones, se conformaría ahora con dialogar con un presidente tan odiado, sobre todo si las perspectivas fueran de que éste siguiera gobernando. Más aun, algunos exponentes de la oposición siria empiezan a pedir la intervención de la comunidad internacional para proteger a la sociedad de la represión mientras que, hasta hace pocos días, rechazaba tajantemente cualquier intervención extranjera. Seguramente, el éxito de las fuerzas rebeldes libias, ayudadas por la OTAN, tiene su peso en este cambio de actitud.

En este sentido, Alain Juppé, ministro de exteriores francés, ha dado un paso adelante, acusando al régimen sirio de crímenes contra la humanidad. El ex primer ministro británico Tony Blair, en una entrevista al diario The Times, ha defendido un cambio de régimen en Siria e Irán, acusando al segundo de ser el culpable de fomentar y prolongar las tensiones y los combates en Irak y Afganistán. ¿Tenemos que interpretar estas declaraciones como otra iniciativa franco-británica para animar a la comunidad internacional a intervenir en Siria, como hicieron para Libia?

La verdad es que la situación es muy complicada, pero la Brookings Institutions, el think tank que ha estado asesorando al presidente Obama bastante de cerca desde antes de su elección, ya ha elaborado unas cuantas recomendaciones que, presumiblemente, el presidente norteamericano tendrá en consideración.

Tales recomendaciones son de dos tipos. Por un lado, se aconsejan acciones políticas con el objetivo de promover un cambio de régimen rápido, apoyando a un hipotético homólogo sirio del Consejo Nacional Libio, con la participación de las potencias vecinas, entre ellas Turquía y Arabia Saudita. Sin embargo, en este sentido, hay que tener en cuenta las crecientes tensiones en las relaciones entre Turquía e Israel, lo cual muy presumiblemente hará que Estados Unidos se aleje de la primera a favor de la segunda, sobre todo ahora que se acerca la votación sobre el Estado Palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La segunda serie de recomendaciones es de tipo militar: la Brookings Institution plantea cuatro posibles escenarios militares en Siria, declarándose a favor de una operación naval para implementar las sanciones, sobre todo de las exportaciones de petróleo y de productos de alta tecnologías, combinada con una campaña aérea, a través de la cual se bombardearían las estructuras del régimen sirio, como bancos, plantas de energía eléctrica e infraestructuras del partido Baaz.

Siempre según la Brookings Institutions, la alternativa a una intervención militar sería dejar que la situación siguiera estancada como está, y esto podría suponer que la oposición siria decidiera tomar las armas, sobre todo porque parece que en el ejército sirio estén aumentando las desertiones a favor de la población. En este caso, Siria caería en una guerra civil. Y una Siria enfrascada en una guerra civil interesa mucho menos que un cambio de régimen en este país, sobre todo a sus vecinos más directos, entre ellos Israel, ya muy ocupado (y preocupado) con el cambio de régimen de Egipto y su frontera con la región del Sinaí.

Por otro lado, justo en estos días, el presidente Obama está presentando su plan para la creación de puestos de trabajo e inversiones al sector empresarial por un total de 447 mil millones de dólares. Quizás, la producción de armas y los demás productos y servicios para una intervención militar directa o indirecta contra el régimen de Bachar Al Assad, según la administración norteamericana, supondría un respiro para varias empresas y, consecuentemente, para la economía del país.

En estos días se conmemora además el décimo aniversario del 11-S, tras el cual el ex-presidente norteamericano (que, por cierto, vive tranquilamente sin correr el menor riesgo de ser juzgado por sus crímenes de guerra) George W. Bush, elaboró la fórmula de los “estados canallas” culpables de apoyar organizaciones terroristas. Siria siempre ha sido uno de estos estados “parias”.

Tras haber conseguido eliminar a Osama Bin Laden, Obama podría considerar otro buen resultado derrocar uno de los últimos regímenes totalitarios no aliados de Estados Unidos que quedan en Oriente Medio.

Teniendo en cuenta por otro lado que la mayor parte del pastel libio se lo han quedado países europeos como Francia y Reino Unido, como premio por haber asumido la mayoría de la operación de la OTAN en Libia, y que se presenta una ocasión inmejorable de aislar ulteriormente a Irán, parece cada vez más plausible algún tipo de intervención militar en Siria. Una intervención sumamente peligrosa, porque Siria no se parece en nada a Libia y en mucho a Irak.

Aquel mismo Irak que los Estados Unidos tratarán de dejar totalmente muy pronto y cuya invasión (que tenía que ser una operación relámpago) ha supuesto y sigue suponiendo un enorme fracaso de la comunidad internacional. Un fracaso que Irak lleva ocho años pagando a un precio inmensamente caro.

100 días de guerra en Libia

Escrito por Pere Ortega

Jueves, 30 de Junio de 2011

Tres meses es un plazo suficiente para hacer un balance de cómo se ha desarrollado la intervención militar contra el régimen de Gadafi en Libia y si se han cumplido las expectativas previstas por los estados que impulsaron las resoluciones de Naciones Unidas.

Recordemos que las revueltas iniciales de la población libia fueron en demanda de libertad y democracia, el mismo tipo de reivindicaciones que han recorrido todos los países del norte de África y del Próximo Oriente, y que hasta el momento han hecho caer a las dictaduras de Túnez y Egipto, movilizaciones que perseveran con mayor o menor intensidad en todos los países de la región.

Pero en Libia, como después en Siria y a diferencia de Túnez y Egipto, las fuerzas armadas dispararon contra los manifestantes produciéndose un centenar de muertos. Pero en Libia se produjo un hecho diferencial importante, las protestas acabaron en lucha armada para derribar al régimen de Gadafi. La respuesta del dictador libio fue contundente, anunció que no tendría ninguna piedad con los insurgentes y los eliminaría.

Estos hechos motivaron una fuerte presión diplomática encabezada por el gobierno francés de Nicolás Sarkozy en demanda de una intervención militar para implementar unas resoluciones que impidieran una masacre de la población. Se apelaba al “derecho a proteger” a una población amenazada reconocido en Naciones Unidas. Francia, con el apoyo de Estados Unidos, logró sacar adelante dos resoluciones (1970 y 1973) en el Consejo de Seguridad, pero con cinco abstenciones significativas, las de Alemania, India, Brasil China y Rusia. Resoluciones en las que se arbitraban diversos mandatos para proteger a la población libia.

Se acusaba al gobierno de Gadafi de crímenes contra la humanidad y se instaba al Tribunal Penal Internacional a abrir investigaciones sobre posibles crímenes contra la humanidad; se instaba a un alto el fuego inmediato en Libia; se imponía una exclusión del espacio aéreo libio para impedir ataques de las fuerzas fieles a Gadafi contra civiles; se arbitraban diversas sanciones económicas consistentes en congelación de cuentas en el exterior; se decretaba un embargo de armas sobre Libia; se arbitraban ayudas por la crisis humanitaria que se estaba produciendo debido a los refugiados que huían de los enfrentamientos; se excluía la intervención terrestre; y por último se dejaba en manos de una coalición internacional la aplicación de la exclusión aérea.

La exclusión aérea se aplicó de inmediato mediante ataques a instalaciones aéreas militares libias por parte de Francia, Reino Unido y EEUU. La coalición internacional se dejó bajo el mando de la OTAN y se amplió hasta 18 países con la presencia significativa de Qatar y el apoyo de la Liga Árabe.

Transcurridos estos primeros 100 días de intervención militar en Libia el balance del conflicto es, cuanto menos, desastroso. Las resoluciones instaban a proteger a la población. Pero la intervención de la OTAN no ha impedido una guerra civil que en el tiempo transcurrido ha producido 15.000 muertos.

Los ataques aéreos, 5.500 según la propia OTAN, en un primer momento destinados a cerrar el espacio aéreo libio, han sobrepasado el mandato de la ONU, apoyan a las fuerzas rebeldes y atacan a las fuerzas de Gadafi bombardeando infraestructuras e instalaciones civiles y con efectos colaterales indeseables (muerte de civiles).

Es decir, la coalición internacional, nunca ha jugado un papel neutral, lo que se evidencia con el incumplimiento del embargo de armas. Desde el primer momento los rebeldes recibieron armamento desde la frontera con Egipto sin que la coalición lo impidiera. Más adelante algunos de los países miembros de la coalición enviaron armas y asesores militares y políticos (Francia y EEUU) como ayuda a los rebeldes. Lo cual infringe la resolución de no intervención terrestre, esto se corroboró con el envío por parte de Francia de helicópteros de ataque terrestre.

Otro de los motivos de la intervención fue la supuesta catástrofe humanitaria. Pues en Libia nunca se ha llegado a producir. Los residentes extranjeros han podido salir repatriados por sus propios países de origen sin incidentes. Ni ha habido oleadas de refugiados a que atender como atestiguan las ONG sobre el terreno, o la propia ACNUR, que los cifró en un máximo de 9.000.

El resultado final no puede ser más negativo. Quebranto de las resoluciones de Naciones Unidas, debido al apoyo explícito a los rebeldes que luchan por acceder al poder, entre los que se encuentran algunos líderes de dudosa legitimidad (militares y ex ministros de anteriores gobiernos de Gadafi). Hoy en Libia hay una guerra civil que se puede perpetuar, pues son diversos los clanes internos que han dado su apoyo a uno u otro bando.

Esto ha obligado a la coalición internacional ha prolongar indefinidamente la intervención militar. Mientras, EEUU da muestras de cansancio y anuncia su retirada de la coalición internacional para que el peso de la misión lo asuman los aliados europeos.

Una vez más, se ha empezado una intervención militar dónde los objetivos iniciales se han modificado y ahora no se sabe cómo salir del conflicto. Una vez más, el mal producido por la guerra es muy superior del que se deseaba impedir.

Atalanta y la pesca del atún

Escrito por Teresa Fortuny

Martes, 21 de Junio de 2011

Bien sabido es que España es uno de los países que lideran la operación naval Atalanta de la UE, que pretende combatir la piratería en las costas de Somalia. España es uno de los primeros países en aportación económica y de efectivos. Pero no es tan sabido que España también lidera otra operación militar de la UE, vinculada a la anterior.

Es la operación EUTM-Somalia, de entrenamiento de soldados para las milicias del Gobierno Federal de Transición de Somalia (GFT), que, supuestamente, debe contribuir a una mayor seguridad en ese país. España participa con la mayor aportación en dinero y efectivos y dirige la operación. Para conseguir que el Congreso de Diputados aprobara la participación en estas dos operaciones militares, el gobierno español argumentaba dos razones.

La primera, específicamente española, es la necesidad de hacer más segura la zona marítima del Cuerno de África y disminuir así el riesgo a que están sometidos los buques atuneros españoles. Este argumento es curioso porque, mayoritariamente, los barcos de guerra de Atalanta se concentran en el golfo de Adén y la zona donde faena la flota pesquera atunera abarca desde el vértice del Cuerno de África hasta las costas de Tanzania. De hecho, Atalanta se aprobó en diciembre de 2008 y hasta junio de 2010 no se aprobó una ampliación de su zona de actuación que incluía el área de trabajo de los atuneros españoles y franceses.

Y esta ampliación geográfica no entró en vigor hasta el otoño de 2010. Durante los años 2009 y 2010 hubo sucesivas intervenciones en el Congreso de Diputados español en que se pedía que la UE incluyera explícitamente dentro de las funciones de Atalanta la protección a los pesqueros que faenan en el Índico. La segunda razón ("más que fundamental", dijo Carme Chacón) es la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a Somalia. También sorprende este argumento ya que la UE prioriza el aspecto militar frente a otras vías o formas de ayuda.

Las cifras son suficientemente elocuentes: la operación Atalanta cuesta anualmente, sólo en España, 75 millones de euros. La UE se gastará en seis años (periodo 2008-2013) en ayuda al desarrollo en Somalia, 215,3 millones de euros. La UE antepone la actuación militar a un plan global de recuperación económica, civil y social en Somalia.

Es evidente que hay interés (o intereses) en controlar la zona del Cuerno de África. La operación Atalanta no actúa ahí sola. Están presentes otras fuerzas navales, de EEUU y aliados, de la OTAN, de China, Rusia, etc. Es evidente también que su efecto disuasorio es poco importante. El número de incidentes de piratería de los años 2009 y 2010 (cuando todas las fuerzas navales eran ya operativas) es mayor que el de los años anteriores.

Además se constata que las fuerzas navales citadas han intervenido, en la frustración de ataques, en una minoría de casos. En la gran mayoría de incidentes, la causa de frustración del ataque ha sido la actuación y las maniobras de la tripulación del barco atacado. Maniobras tan simples como aumento de la velocidad, lanzamiento de bidones vacíos y vigas que no se usan, utilización de mangueras contra incendios, utilización de la bocina, bengalas, ataques con palos encendidos de un extremo, etc.

Hablemos ahora un poco de ese sector pesquero que se trata de proteger. España tiene la mayor flota atunera de la UE. Le corresponde el 60% de las capturas (a Francia el 40%). También es el primer productor de conservas de atún de la UE y el segundo del mundo, detrás de Tailandia. La UE gasta 150 millones de euros anuales¹ para que sus barcos puedan acceder a caladeros de otras aguas territoriales, sobre todo africanas. En el caso del atún, habitualmente suscribe acuerdos de pesca que regulan el número de embarcaciones y no el volumen de capturas.

En este sentido, el océano Índico es clave para la flota atunera. No hay caladeros alternativos para las especies que interesan a la industria transformadora. Armadores y conserveros españoles coinciden en considerar las enormes dificultades que significaría dejar el Índico, a pesar del peligro de la piratería (los acuerdos pesqueros de la UE en el Atlántico obligan a pagar por tonelada capturada y esto lo hace menos rentable, en cuanto al atún, que el océano Índico). Pues bien, Somalia es el país con la costa más larga de toda África y con una de las zonas más ricas en productos pesqueros.

No ha habido nunca acuerdos regulados de pesca con Somalia. Respecto a la flota con bandera española², sabemos que en julio de 2006 el gobierno español prohibió la pesca dentro de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva de Somalia, señal que, como mínimo hasta ese momento, se pescaba en ella. Los barcos pesqueros faenaban gracias a la compra de licencias a toda persona que se las vendiera.

Licencias que tanto vendían señores de la guerra como personas vinculadas al GFT. La legalidad de una licencia expedida por un jefe militar local es, cuando menos, cuestionable. La flota atunera española dispone de una tecnología avanzadísima y su capacidad de captura (o sea, de vaciar los caladeros) es enorme.

Su grado de implicación en el fenómeno de la pesca ilegal queda reflejado en un informe financiado por el Ministerio de Defensa noruego, donde el autor se pregunta por qué los partícipes de Atalanta permiten que países como España lideren la operación, cuando existe un sentimiento muy extendido entre los somalíes que los pescadores españoles están pescando ilegalmente en aguas somalíes y cuando España también ha sido acusada extraoficialmente por oficiales de Atalanta, de proteger unilateralmente pescadores ilegales mediante el envío de buques de la operación Atalanta³.

Según el Grupo de Expertos sobre Somalia de la ONU que investigaba las violaciones del embargo de armas, la "gestión" de la pesca ha generado grandes cantidades de dinero que han ido a parar a los jefes de las facciones y, por tanto, en cierto grado, al pago y abastecimiento de sus milicias privadas⁴.

Es decir que la gestión y, por tanto, la misma actividad de la pesca han alimentado la desestabilización y la ingobernabilidad del país. Precisamente esa inestabilidad y la falta de un gobierno reconocido ampliamente por los somalíes, han sido la excusa para que países que han incidido negativamente en la situación del país, estén hoy presentes en la zona con la función de garantizar la seguridad.

España y las guerras por el petróleo: ¿Es el caso de Libia?

Escrito por Alejandro Pozo

Martes, 21 de Junio de 2011

En los últimos años, se han popularizado las expresiones "guerra por petróleo" o "guerras por los recursos". Sin embargo, los recursos naturales no suelen estar tan relacionados con las causas de los conflictos armados como se cree, sino que más bien jugarían un papel determinante en la duración y la intensidad de las guerras, ya que influyen directamente en la financiación y la perpetuación de la violencia, entre otros.

No obstante, existen determinadas excepciones, sobre todo el petróleo. Podemos reconocer una "causa" si nos preguntamos hasta qué punto existiría conflicto armado sin ella, o hasta qué punto la realidad sería muy diferente. Efectivamente, en buena parte de los conflictos armados en todo el mundo (Sudán, Angola, Colombia, etc.), los hidrocarburos han desempeñado un papel importante, pero no serían su causa, sino más bien sus catalizadores. Existen, sin embargo, otros escenarios que serían excepciones, y donde el petróleo podría ser no la única, pero sí una causa relevante que explicaría la guerra. Irak, la guerra de Bush, Blair y Aznar es un buen ejemplo. El Delta del Níger es otro. ¿Y Libia?

¿Combate España a Gadafi por el petróleo? Afirmar esto podría resultar pretencioso, pero sin duda el petróleo es una causa importante que explicaría el porqué de su participación en una operación militar de la OTAN que, en contra de lo que dicta la resolución de la ONU, incluye objetivos no autorizados (y, por tanto, contrarios a derecho) como derrocar a Gadafi y combatir sus fuerzas, incluso utilizando grupos mercenarios privados y helicópteros.

Pero existen otras razones. Las principales motivaciones de los países que combaten a Gadafi están, con mucha probabilidad, estrechamente relacionadas con cinco puntos:

- 1) sus intereses energéticos (desde este punto de vista, sí sería una "guerra por el petróleo";
- 2) las presiones internas (escándalos en el Estado francés por complicidades con los antiguos regímenes en Túnez y Egipto, tensiones partidistas o cuestiones electorales, con ciertas dosis de egolatría);
- 3) la voluntad de influir en las protestas en los países árabes, unos procesos en los que adoptan la estrategia del oportunismo y la prudencia en la protección de los propios intereses;
- 4) las oportunidades y las influencias en una eventual Libia post Gadafi (quien ganaba poco antes, puede aumentar sus beneficios si cae el dictador);
- 5) para ganar peso, prestigio militar y favor internacional y/o regional (y el que otorgan los estados más poderosos a quienes les siguen).

Para EEUU, Libia era un país situado en el punto de mira desde hace años, es decir, la intervención militar para derrocar a Gadafi ya sería un objetivo anterior a las revueltas y éstas solo habrían supuesto una oportunidad para llevarla a cabo. Al menos, así lo reconoció el ex general estadounidense y ex comandante supremo de la OTAN, Wesley Clark. Los intereses españoles, por otro lado, estarían centrados en el primer punto (petróleo) y el quinto (que también afectaría a otros lugares como, por ejemplo, Afganistán), pero también influirían el tercer punto y el cuarto (también relacionado con el petróleo).

El petróleo y el gas tienen un papel destacado en la política y la economía libia. De hecho, los hidrocarburos representan el 71% del Producto Interior Bruto del país. EEUU también tenía intereses en la Libia de Gadafi, si bien de un volumen inferior al que Washington deseaba. Algunas de las compañías que operaban en el país eran ExxonMobil, Oxy, Marathon, ConocoPhillips y Morgan Stanley. Si bien el 5% de las exportaciones de Libia estaban destinadas a EEUU, el porcentaje sobre el total de necesidades estadounidenses era inferior al 1%. Los beneficios europeos han sido más fuertes. Destacaba la presencia de las petroleras OMV (Austria), Total (Francia), Eni (Italia), Royal Dutch Shell (Reino Unido / Holanda), RWE y Wintershall (Alemania), Statoil (Noruega) y Repsol YPF (España / Argentina). Estas compañías gozaban de autorización para operar en Libia.

No todos estos países estaban satisfechos (notoriamente, los más beligerantes contra Gadafi), pero en general las relaciones entre los mandatarios de las potencias mundiales y el régimen de Gadafi han sido más que cordiales, incluso, como en el caso italiano, de alianza. De hecho, 180 empresas italianas trabajaban en Libia hace dos meses, y quizá por ello Berlusconi todavía no ha congelado todas las cuentas y detenido todos los numerosos intereses del régimen libio en el país que gobierna, como obligan las resoluciones de la ONU y la Unión Europea (UE).

Los intereses petroleros españoles se concentran en la empresa privada Repsol YPF. Esta compañía gozaba, antes de la crisis libia, de derechos mineros sobre 10 bloques, 9 de ellos onshore y uno en la cuenca offshore de Sirte. Los principales intereses son de exploración: 8 de los 10 bloques, con una superficie de 20.718 km², mientras que los dos bloques restantes, de producción, tienen una superficie de 1.566km², según se menciona en el propio sitio web de la empresa. Repsol está presente en Libia desde los años 70 (Gadafi accedió al poder en 1969) y las relaciones con el dictador eran, según afirmó un portavoz de Repsol en 2009, "excelentes": "Tenemos una excelente relación con Libia, como muestra el hecho de que hemos extendido nuestro contrato en el país hasta 2032".

Sin embargo, el portal argentino La Nación advirtió en enero de 2009 que, como reacción a una conferencia de Gadafi en la Universidad de Georgetown (Washington, EEUU) en la que sugería que se podrían producir nacionalizaciones debido a la fuerte caída del precio del petróleo, un portavoz de Repsol dijo que "no creemos que haya una posibilidad real de nacionalización de las petroleras en Libia". Cabe añadir que Repsol ha realizado fuertes inversiones recientes en Libia y tenía expectativas de ampliar su producción en zonas descubiertas en 2006, en las que se esperaba que las instalaciones estuvieran preparadas para 2012 y 2013. En cualquier caso, cabe destacar la dependencia de España del petróleo libio. ¿Habría sido casual la coincidencia en el tiempo de la limitación de velocidad en las autopistas a 110 Km/h y la operación militar en Libia?

¿Y por qué involucrarse en un conflicto armado contra el mismo Gadafi que se ha mostrado generoso con determinados intereses españoles? Probablemente, para apoyar a quien se creía que controlaría Libia. De hecho, la operación militar fue posterior a los encuentros con el Consejo Nacional Libio (CNL), y los grupos rebeldes han sido muy claros al decir que considerarán la participación extranjera a la intervención militar a la hora de realizar concesiones futuras de exploración, explotación y exportación de hidrocarburos.

Los países intervinientes, con la connivencia de la UE y la ONU, entre otros, han demostrado numerosos esfuerzos para que Libia continúe exportando petróleo, incluyendo, entre estos esfuerzos, combates en las áreas productoras, iniciativas para que la Arabian Gulf Company (AGOCO) evitara las sanciones de la ONU y la UE, o el reconocimiento del CNL para facilitar las exportaciones.

Para los países miembros de la OTAN que bombardean, lo más importante no es la Libia de la posguerra, la población civil o los rebeldes. Lo que cuenta es que las concesiones de explotación de hidrocarburos y otras ganancias de tipo político compensen la inversión realizada. Al fin y al cabo, la guerra, en el depredador modelo capitalista actual, es una manera práctica de hacer negocios y relaciones internacionales.

Importaciones de petróleo libio

Importador	Importaciones desde Libia (en bpd*)	% de exportaciones de Libia	% de consumo total local
Italia	365.742	29%	24%
Francia	177.797	14%	10%
China	160.676	13%	2%
Alemania	138.067	11%	6%
España	129.227	10%	9%
EEUU	60.553	5%	<1%
Reino Unido	50.815	4%	3%
Austria	32.867	3%	12%
Portugal	28.840	2%	11%
Holanda	26.426	2%	2%
Irlanda	21.814	2%	13%
Suiza	21.576	2%	8%
Serbia	6.801	1%	8%

Fuente: Stratfor.

*bpd: barriles por día.

Neocolonialismo con la bendición de la ONU

Escrito por José Luís Gordillo

Miércoles, 27 de Abril de 2011

(Artículo publicado en La Directa)

Los partidarios de buena fe de los bombardeos de la OTAN en Libia sostienen que, a diferencia de la invasión de Iraq, la ONU en este caso ha autorizado diversas medidas políticas, económicas y militares que son, en lo esencial, legítimas y necesarias para alcanzar una paz justa en dicho país. A la vista del contenido de las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad, cabe preguntarse si esas personas saben lo que dicen cuando califican como legítimas las medidas adoptadas.

La Resolución 1970 decreta un embargo de armas a toda Libia que debe administrar un Comité de Sanciones directamente dependiente del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, de las grandes potencias. Como se explicó en una nota anterior ("Libia: ¿y tú qué propones?" en mientrastanto.e nº 90), el embargo se impone a toda Libia y, en consecuencia, debería afectar por igual a los dos bandos de la guerra civil en curso; pero la misma resolución otorga a dicho comité la potestad de autorizar la entrada de armas si así lo considera oportuno.

Debido a que la intervención occidental se produjo en el momento de mayor debilidad de la oposición a Gadafi, la posibilidad de que ésta llegue algún día a Trípoli depende ahora de las armas, asesoramiento y entrenamiento militar proporcionados, supervisados y/o controlados por las potencias occidentales. Por una simple cuestión de poder (quien tiene más poder impone su voluntad), eso les convierte en una fuerza subordinada a los proyectos de los países de la OTAN. El futuro político-militar les espera a los rebeldes libios será similar, por tanto, al de la guerrilla kurda en Iraq, el ELK en Kosovo o la Alianza del Norte en Afganistán.

Tal vez los rebeldes consigan derrocar a Gadafi con la ayuda de la OTAN, pero lo que ya está fuera de su alcance es hacer efectivo el principio de la libre determinación del pueblo libio. En la Resolución 1970 se decreta la congelación de los activos ubicados en el extranjero propiedad de Gadafi, su familia y algunos altos cargos de su régimen; pero en la Resolución 1973 dicha congelación se extiende a todos los bienes controlados por las autoridades libias libremente designadas como tales por el Comité de Sanciones.

Los activos en cuestión no son poca cosa. Estamos hablando de acciones, fondos de inversión y otros recursos económicos valorados en unos 75.000 millones de dólares. Esos recursos son necesarios, directa o indirectamente, para poder explotar el petróleo y el gas de Libia. Si Gadafi es derrocado, se estará ante una situación de vacío de poder que hará imposible que la población de Libia se beneficie de los susodichos recursos.

Lo que cabe esperar en ese caso es la imposición de un protectorado transitorio, controlado por la OTAN, hasta que en Libia haya un gobierno reconocido como legítimo por las grandes potencias. Para alcanzar ese objetivo, las nuevas autoridades libias deberán plegarse a sus exigencias políticas y económicas.

Si Libia se parte en dos, como parece probable, la situación todavía será más complicada porque ¿cuál de las dos nuevas entidades políticas deberá heredar los bienes congelados?

En cualquier caso, en este supuesto también se impondrá un protectorado que puede durar décadas, hasta que algún Tribunal Internacional resuelva el inmenso lío jurídico provocado por la partición del país. Mientras tanto, las empresas petroleras y los gobiernos occidentales harán, desharán y mangonearán a su antojo. En el siglo XIX, a un país que padecía una intervención extranjera de estas características se le llamaba colonia.

¿Otra "guerra humanitaria"?

Escrito por Jordi Calvo Rufanges i Alejandro Pozo Marín

Jueves, 14 de Abril de 2011

(Artículo publicado en La Directa)

El 17 de marzo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1973 que autorizó la intervención militar extranjera en Libia. Horas después se iniciaban tres intervenciones militares unilaterales: "Harmattan" (Francia), "Odyssey Down" (EEUU) y "Ellamy" (Reino Unido). La falta de una única línea de mando condujo a un proceso que desembocó en la participación de varios países bajo la coordinación de la OTAN, incluyendo una participación (sólo) simbólica árabe.

También se añadió la España de Zapatero, el mismo que retiró las tropas de Irak, acusando la ocupación de estar motivada por intereses energéticos.

Es cierto que hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autoriza "todas las medidas necesarias" a Libia, para proteger la población civil y permite el establecimiento de una zona de exclusión aérea. También es cierto que el redactado del texto de esta resolución es deliberadamente ambiguo para permitir diferentes interpretaciones.

Pero los límites están claros: son los que fueron negociados con los países que finalmente se abstuvieron en la votación del Consejo para que no se posicionaran en contra, con la particularidad de que tanto China como Rusia tienen poder de veto. De ser vetada, la intervención no hubiera sido legitimada por la resolución y sería abiertamente ilegal. Pero es cuestionable que, sin resolución, no hubiera intervención militar.

Estos límites han sido largamente traspasados por los Estados que están interviniendo. Así, la resolución no autorizaba el derribo de Gadafi, combatir junto a los rebeldes o el suministro de armas. Por el contrario, el propio Consejo de Seguridad impuso a la resolución 1970 un embargo de armas a Libia, que incluye también a los rebeldes.

Sin embargo, es bien conocido que están recibiendo armamento ligero y pesado a través de Egipto. Es cínico que decenas de barcos (y un submarino español) y aviones estén patrullando el Mediterráneo para imponer el embargo mientras que hacen la vista gorda (o directamente participan) en lo que pasa en la frontera con Egipto, que tiene un ejército muy bien relacionado con EEUU. Algunos de los países beligerantes no han tenido tapujos en recomendar el suministro de armas a los rebeldes.

Por otro lado es muy hipócrita que los mismos dirigentes que hace dos meses abrazaban Gadafi y incrementaban generosamente su cuenta de ahorros, sus arsenales y su poder, ahora nos digan que es el mismo diablo.

El presidente estadounidense George Bush le felicitó en 2008 "por su contribución a la paz en el mundo", y tanto Aznar, Zapatero como Juan Carlos de Borbón han visitado y mostrado sus mejores maneras al dictador. Cabe preguntarse si alguien de los que hoy le bombardean rendirá cuentas por sus relaciones y negocios con Gadafi. Recordemos que su régimen fue tristemente conocido antes y después de su acercamiento a Occidente, y están bien documentadas sus continuas injerencias en otros países armando y financiando a grupos rebeldes y regímenes totalitarios que han masacrado a la población civil.

Los medios de comunicación de masas están jugando un papel determinante en esta guerra. Algunos, como El País, parece que hacen más campaña pro intervención que periodismo. Resulta como mínimo curioso que la primera noticia sobre víctimas civiles de los ataques de la OTAN fuera la denuncia de El Vaticano de la destrucción de un edificio en Trípoli en el que murieron 40 civiles y que "algunas bombas cayeron en hospitales ". Sobre la investigación anunciada por la OTAN, no se sabe nada ni se sabrá.

¿Por qué Libia?

Como sabemos, Libia no es el único lugar del mundo donde se están cometiendo o se han cometido recientemente abusos contra la población civil y donde hay represoras dictaduras enquistadas desde hace décadas. Sin embargo, en estos otros países no se ha producido ninguna intervención militar por parte de los países miembros de la OTAN. La lista es tan evidente como larga. Entonces, ¿por qué la intervención extranjera?

Las principales motivaciones de los países participantes están estrechamente relacionadas con:

1) sus intereses energéticos.

2) presiones internas (escándalos en Francia y Reino Unido por complicidades con los anteriores regímenes en Túnez y Egipto, tensiones partidistas o cuestiones electorales, con ciertas dosis de egolatría).

3) influir en las protestas de Oriente Medio, unos procesos en los que adoptan la estrategia del oportunismo y la prudencia en la protección de los propios intereses.

4) oportunidades e influencias en una eventual Libia post-Gadafi (quien ganaba poco antes, puede aumentar sus beneficios si se derriba el dictador).

5) ganar peso, prestigio militar y favor internacional y/o regional.

¿Cuáles son los intereses de cada país?

Estos intereses pueden ser muy plurales, pero los hidrocarburos tienen un papel destacado. De hecho, los hidrocarburos representan el 71% del Producto Interior Bruto de Libia. Para EEUU, Libia era un país en el punto de mira desde hace unos años. Es decir, la intervención militar para derrocar a Gadafi ya sería un objetivo anterior a las revueltas y éstas sólo hubieran supuesto una oportunidad para llevarla a cabo. Al menos, esta intención de intervenir militarmente en Libia fue denunciada por Wesley Clark, ex general estadounidense y ex Comandante Supremo de la OTAN. Sin embargo, los EEUU también tenían intereses en la Libia de Gadafi, si bien de un volumen inferior al que Washington deseaba. Algunas de las compañías que operaban en el país eran ExxonMobil, Oxy, Marathon, ConocoPhillips y Morgan Stanley. Si bien el 5% de las exportaciones de Libia estaban destinadas a EEUU, el porcentaje sobre el total de necesidades era inferior al 1%.

Los intereses europeos eran más fuertes. Destacaba la presencia de las petroleras OMV (Austria), Total (Francia), Eni (Italia), Royal Dutch Shell (Reino Unido / Holanda), RWE y Wintershall (Alemania), Statoil (Noruega) y Repsol (España).

Pero ningún país tiene tantos intereses en Libia como la Italia de Berlusconi, lo que no nos coge por sorpresa. Así, 180 empresas italianas trabajaban en Libia hace dos meses, y la dependencia energética italiana de Libia es del 24% en petróleo y del 10% en gas. Libia (y Gadafi) también tienen muchos intereses en Italia (7,5% de Unicredit, la principal banca italiana, y el 67,5% de la Banca Ubae; el 1% de la petrolera Eni y el 100% de Tamoil Italia, otra petrolera, el 40% de la constructora libc, el 2% de Fiat Auto, el 2% de Finmeccanica, la mayor empresa armamentística italiana, y el 7,5% del equipo de fútbol Juventus, entre muchas otras participaciones. Probablemente por eso Italia todavía no ha congelado todas las cuentas libias, a pesar de las resoluciones obligatorias de la ONU y la UE.

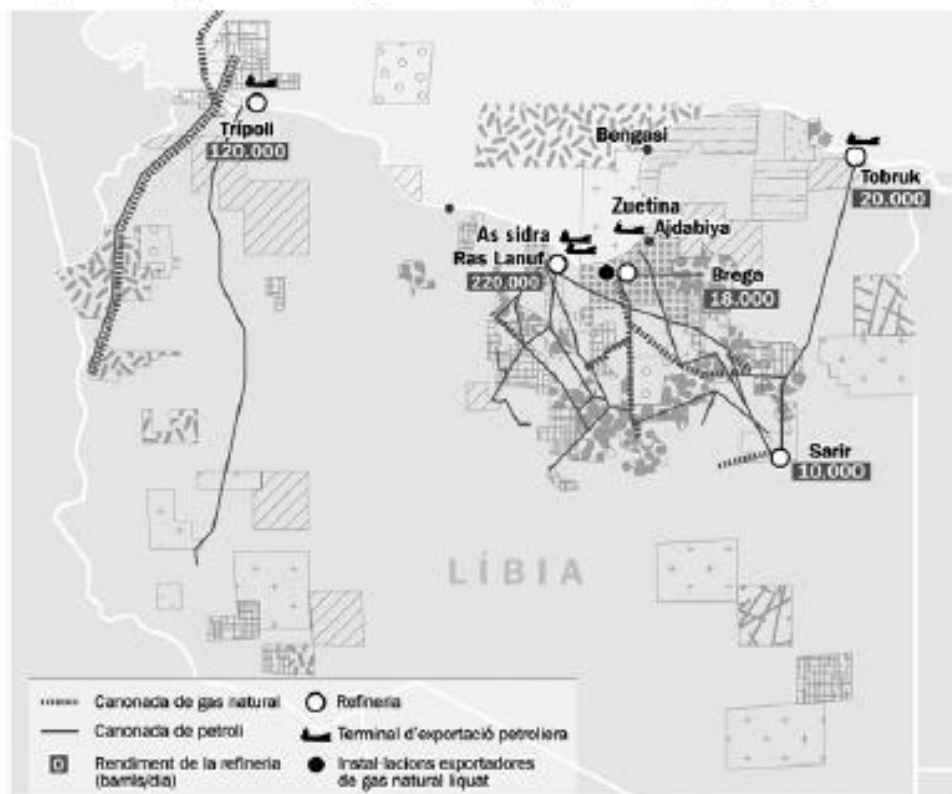
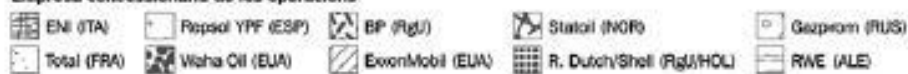
La petrolera italiana Eni extraía antes de las revueltas más del doble de petróleo que cualquier otra compañía extranjera en Libia. Las relaciones entre Berlusconi y Gadafi llegaron al punto de que el primero pidiera perdón al segundo por la ocupación colonial y prometió indemnizar a Libia (es decir, Gadafi) con 5.000 millones de dólares en 20 años. Evidentemente, Gadafi limitaría, en contraprestación, la llegada de inmigrantes africanos a Italia a través de Libia.

Finalmente, no hay que olvidar que Rusia (Tatneft, Gazprom y ferrocarril Sirte-Bengasi), China (50 proyectos de 20 compañías) y Turquía (puertos, tratamiento de aguas residuales y un enorme proyecto de agua) también tienen intereses con el régimen libio. Los rusos, a pesar de que pierden negocios energéticos y de comercio de armas, ven con buenos ojos una subida del precio del petróleo a causa del conflicto (Moscú es la única potencia energéticamente autosuficiente). China, tenía más de 300.000 nacionales trabajando en Libia, ahora parados, lo que le ha supuesto cuantiosas pérdidas.

Los rebeldes han sido claros al decir que considerarán la participación en la intervención militar extranjera a la hora de hacer concesiones futuras de explotación y exportación de hidrocarburos. Tampoco es casualidad que los combates entre rebeldes y OTAN y fuerzas pro Gadafi se hayan centrado en la principal refinería del país (Ras Lanuf) y la tercera después de Trípoli (Lidia). A pesar de la guerra, los rebeldes han comenzado a exportar a los aliados. La Arabian Gulf Company (AGOCA), basada en Bengasi, estuvo hábil al desmarcarse de la compañía matriz NOC (National Oil Company), sancionada por la ONU y la UE. El reconocimiento del Consejo Nacional Libio como interlocutor por parte de varios países ha facilitado las cosas. A pesar de las sanciones contra el sector energético libio, el portavoz de Exteriores de la UE ya ha confirmado que la UE no pondrá ningún tipo de impedimento a estas exportaciones.

■ Producció petrolera i presència d'empreses estrangeres a Líbia

Empresa concessionària de les operacions



RMC-Spetr 2011

JAN / LA DIRECTA

IMPORTACIONS DE PETROLI LÍBIA

Importador	Importacions des de Líbia (en barrils per dia)	% d'exportacions de Líbia	% de consum total local
Itàlia	365.742	29%	24%
França	177.797	14%	10%
Xina	160.676	13%	2%
Alemanya	138.067	11%	4%
Estat espanyol	129.227	10%	9%
EUA	60.553	5%	<1%
Regne Unit	50.815	4%	3%
Àustria	32.867	3%	12%
Portugal	28.840	2%	11%
Holanda	26.426	2%	2%
Irlanda	21.814	2%	13%
Suïssa	21.576	2%	8%
Sèrbia	6.801	1%	8%

rmc: www.stoilor.com

Considerando la hipocresía demostrada y las razones e intereses mencionados, desconfianza es lo mínimo que podemos sentir y mostrar hacia los Sarkozy, Cameron, Zapatero, Obama y el resto de aliados que han dado apoyo moral, material y humano a la guerra. Son multitud las personas que han estado de acuerdo con la intervención pidiendo justicia, pero una parte se ha basado en una información parcial, controlada y tendenciosa por parte de los medios de comunicación mayoritarios. Estos no han puesto sobre la mesa cuestiones, entre otras, como si no habrá represión contra lo que es apercibido como pro Gadafi (ya se ha producido), qué pasará con el grupo Gaddafa, cuál es la probabilidad de una nueva guerra civil en la Libia post Gadafi o quiénes son los rebeldes.

¿A quién está ayudando la OTAN? ¿Quiénes son los rebeldes?

Entre los rebeldes, parece que hay de todo, incluyendo muchas personas que merecen solidaridad internacional. Pero es como mínimo sospechoso que el Consejo Nacional Libio (CNL) esconda el nombre de 23 de sus miembros (de un total de 31). Quizá porque no serían bien recibidos por Occidente, o al menos por la opinión pública, que ha idealizado los rebeldes como si fueran el Che Guevara. Entre los nombres conocidos del CNL figuran varios ex ministros de Gadafi, alguno de los cuales hace dos meses estaban a su lado.

Destacan Mustafá Abdul Jalil y el General Yunis al-Obaid, quienes eran ministros de Justicia y del Interior de Gadafi cuando estallaron las revueltas (Yunis también fue responsable de las fuerzas especiales y compañero de armas del dictador); Omar El- Hariri, también militar, participó en el golpe de Estado que llevó a Gadafi al poder en 1969, o Mahmud Jibril, antiguo estratega de Gadafi. Quizás por estos perfiles los rebeldes libios han optado por la revolución armada, en lugar de lo que hicieron sus vecinos de Túnez o Egipto. Hay, dentro del CNL, notables diferencias entre los llamados "liberales" (encabezados por los abogados que hicieron las primeras protestas) y los conservadores (liderados por Abdul Jalil), que no tendrían mayores problemas en negociar con Gadafi.

Además, no debemos olvidar que los rebeldes no son una coalición de entidades de la sociedad civil (muy debilitada y desestructurada a la Libia de Gadafi), y es muy probable que sus miembros tengan intereses no compatibles.

En Libia hay 140 grupos "tribales", de los que al menos 30 tienen peso político. Las divergencias entre ellos son como el cielo y la tierra en asuntos, entre otros, como el papel de la monarquía y del Islam político (ambos con mayor acogida en la parte este del país, controlada por los rebeldes).

El derecho sucesorio de la monarquía se disputan el nieto y el hijo del sobrino del rey derrocado por Gadafi (también existen importantes grupos contrarios a la monarquía), mientras que la opción del Islam político es incuestionable en ciudades al este del país como Darnah (52 de los 112 libios que lucharon en la guerra de Irak provenían de esta ciudad, más que de ninguna otra ciudad árabe, haciendo de Libia el mayor contribuyente por persona).

Para los países miembros de la OTAN que bombardean, lo que más importa no es la Libia de la posguerra, la población civil o los rebeldes (y si estos rebeldes no son demasiado rebeldes, mejor). Lo que cuenta es que las concesiones de explotación de hidrocarburos y otras ganancias de tipo político compensen la inversión realizada. Al fin y al cabo, la guerra, en el depredador modelo capitalista actual, es una buena manera de hacer negocios y relaciones internacionales.

El intervencionismo humanitario

Escrito por Manifiesto

Viernes, 08 de Abril de 2011

Existen muchas razones, políticas, sociales, racionales y emocionales para apoyar una intervención en Libia, pero también las hay para rechazar tal actuación, especialmente por la necesidad de cuestionar el modelo en que se basa la intervención.

Los abajo firmantes, por las razones que más abajo explicitamos, nos mostramos solidarios con el pueblo libio en su proceso de democratización y, por esto, con el derrocamiento del coronel Gadafi, defendemos que las intervenciones internacionales sean de tipo político y no militar, y estén insertas en procesos que garanticen una paz real y duradera. Por estas razones, nos parece oportuno introducir en el debate que se está produciendo algunas preguntas y precisiones.

Antes de dar nuestro apoyo a la utilización de la fuerza militar en cualquier conflicto que puede derivar en guerra, la primera pregunta que nos deberíamos formular es: ¿qué complicidades existen desde la comunidad internacional o desde nuestro propio Estado? ¿Se encuentran estas entre las causas que han motivado el conflicto? Es decir, se trata de preguntarnos si existen intereses económicos o políticos por parte de nuestros propios Estados respecto del país que se pretende atacar.

La segunda pregunta no es de menor enjundia, pues también apunta a una cuestión decisiva para un comportamiento ético en política. ¿Se ha prestado ayuda militar o vendido armas por parte de los Estados intervinientes a ese gobierno despótico al que ahora se pretende derrocar?

Resulta evidente que, en el caso de Libia, hace apenas unas semanas, numerosos países occidentales firmaban convenios comerciales, establecían negocios conjuntos, prestaban ayuda financiera, instalaban industrias de extracción de hidrocarburos y, además, le vendían armas.

Todo ello a sabiendas de que se beneficiaba a Gadafi y a su círculo más íntimo y no a la población libia, y a pesar del historial criminal del dictador, quien no mostró mejores maneras con el pueblo libio tras su acercamiento a Occidente, ni dejó de proporcionar armas y apoyos de todo tipo a grupos rebeldes y regímenes totalitarios y colaborar y financiar ataques contra población civil en numerosos países. Pese a ello, el dictador Gadafi se convirtió en un firme aliado y fue recibido con honores por buena parte de los países y dirigentes que hoy le demonizan.

Pero hay más preguntas, también importantes: ¿se habían agotado todos los medios políticos al alcance de la comunidad internacional para resolver el conflicto?, ¿No existen dudas razonables de que la medida militar adoptada tiene muchas probabilidades de provocar una mayor escalada de violencia y un mayor sufrimiento?

Además, resulta de una enorme hipocresía esgrimir el derecho a proteger a la población de Libia mediante el uso de la fuerza, mientras existen un sinnúmero de escenarios en el mundo donde no se hace absolutamente nada.

Pues en la mayoría de países árabes donde existen duras dictaduras y algunas están masacrando a su pueblo, como en Yemen o Siria; o se pasa por alto el envío de tropas de Arabia Saudí a Bahrein para reprimir las revueltas de su población; o el angustioso caso de Palestina, que no hace falta detallar por ser demasiado conocido; por no mencionar la parálisis de la comunidad internacional en los casos de Chechenia, Guinea Ecuatorial, R.D. del Congo, Zimbabue y tantos otros. Y, en definitiva, ¿dónde se encuentra la responsabilidad de proteger cuando conocemos que, cada día, decenas de miles de personas mueren como consecuencia de la desnutrición o enfermedades fácilmente curables? ¿Son estas últimas maneras de morir menos dramáticas? ¿Es la responsabilidad de las autoridades menor? ¿Nos importa acaso más quién mata que quién muere?

Pero, además, antes de optar por la vía militar, existían medidas políticas de presión para frenar el conflicto, aislar al gobierno de Libia y expulsar a Gadafi del poder, si es que de eso se trata. Como arbitrar la congelación inmediata de todas las cuentas bancarias e intereses en empresas de Gadafi y su gobierno en el exterior (todavía no ha sido el caso en Italia y en otros lugares, a pesar de la obligatoriedad de las sanciones).

Embargos económicos que debían paralizar todas las transacciones comerciales, incluidas las armas y los hidrocarburos; así como el reconocimiento de los rebeldes; y especialmente, presionar para convocar una conferencia regional en que participaran, además de gobierno y rebeldes, otros muchos actores representativos libios y los países árabes de la región, que posibilitara la resolución del conflicto. Conferencia que debería tener como objetivo terminar con la dictadura y facilitar una transición política.

Una vez expuestos los argumentos que deberían hacernos reflexionar sobre las bondades de una intervención militar por causas humanitarias liderada por muchos de quienes formaron parte del problema, queremos dar nuestro apoyo a los escasos pacifistas y gentes que han levantado su voz frente al obscuro espectáculo de guerra desplegado en Libia. Así como denunciar el coro farisaico y la impostura intelectual de quienes se dedican a menospreciar, reírse o insultar a los que critican esta nueva guerra.

El valor moral de la no violencia es muy superior al pragmatismo de la violencia como forma de solucionar los conflictos, como han mostrado los valientes luchadores contra la tiranía de Egipto o Túnez.

Firmantes:

Alejandro Pozo.

Alfons Banda, presidente de la Fundació per la Pau de Barcelona

Anna Bastida, profesora de didáctica y educación para la paz de la Universidad de Barcelona

Anna Monjo, directora de la editorial Icaria

Antoni Pigrau, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universitat Rovira i Virgili

Arcadi Oliveres, presidente de Justícia i Pau de Barcelona y profesor de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona

Carles Riera, profesor de sociología de la Universidad de Barcelona

Carlos Taibo, profesor de ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid

Carlos Arturo Velandia Jagua, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la UAB

Carmen Magallón, directora del Seminario Internacional por la Paz de Zaragoza

Eduardo Melero, profesor de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid

Elena Grau, miembro del colectivo de mujeres de En pie de Paz

Enric Prat, historiador y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fernando Armendáriz, Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Pamplona

Francesc Tubau, portavoz de la Plataforma Aturem la Guerra

Francisco A. Muñoz, profesor de filosofía del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada

Francisco Fernández Buey, profesor de filosofía política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Gabriela Serra, activista del movimiento por la paz

Jaume Botey, profesor de historia contemporánea de la Univesidad Autónoma de Barcelona

Javier Aisa, Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Pamplona

Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau

Jordi Calvo Rufanges.

José Luís Gordillo, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona y miembro de la Plataforma Aturem la Guerra

José María Tortosa, profesor de sociología de la Universidad de Alicante

Manuel Dios, presidente del Seminario Galego de Educación para la Paz

María Oianguren, directora del Centro de Investigación por la Paz Paz Gernika Gogoratuz

Neus Sotomayor, directora de la Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès

Pepe Beunza, primer objetor de conciencia de España

Pere Ortega.

Rafael Grasa, presidente del Institut Català Internacional per la Pau y profesor de relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona

Teresa de Fortuny, miembro de la Plataforma Aturem la Guerra

Tica Font, directora del Institut Català Internacional per la Pau

Tomás Gisbert.

Vicent Martínez Guzmán, president de la Càtedra Unesco de Filosofia para la Paz de la Universidad de Castellón

Xavier Badia, profesor de Instituto

Xavier Bohigas, profesor de física de la Universidad Politécnica de Catalunya

Revoluciones violentas o no violentas, esa es la cuestión

Escrito por Pere Ortega

Jueves, 07 de Abril de 2011

(Artículo publicado en Público)

Ante el alud de críticas y descalificaciones vertidas contra los pocos que nos hemos opuesto a la intervención militar en Libia, es oportuno abordar un argumento despreciado en el debate, el de la noviolencia. Y aportar algunos datos para desmentir las bondades del derecho a proteger planteadas por el coro de partidarios de las guerras justas.

En general, se ha hecho referencia al fracaso de la Comunidad Internacional en los conflictos yugoslavos o en el de Ruanda. Hoy, pasados unos años, podríamos hacer el balance y preguntarnos qué arreglaron aquellas intervenciones militares. Recordemos que, si bien los bombardeos de la OTAN en Bosnia (1994) liberaron Sarajevo, no acabaron con las matanzas. Un ejemplo, el más dramático de toda la contienda, el asesinato de 8.000 bosnios en Srebrenica fue perpetrado frente a las fuerzas de los cascos azules de la ONU, quienes no hicieron absolutamente nada para proteger aquella población.

Otro ejemplo. Más tarde, para proteger a los kosovares, la OTAN bombardeó Serbia (1999). Aquellos ataques, desprestigiaron y tiraron por el suelo la resistencia activa noviolenta preconizada por el líder kosovar Ibrahim Rugova y ayudaron a instalar en el poder al jefe de la UCK, Ashim Thaci. Una guerrilla que recibía ayuda de EEUU y además se financiaba (ya se sabía entonces) de la prostitución, el tráfico de drogas y de órganos (esto lo sabemos hoy). Una vez instalado el nuevo gobierno albano kosovar, prosiguieron las hostilidades y las represalias. Pero esta vez contra la minoría serbia, 200.000 kosovares serbios fueron expulsados de sus hogares y, los pocos que se quedaron refugiados al norte de río Ibar, hoy piden la autodeterminación y la anexión de su territorio a Serbia.

Es decir, ni las bombas ni la intervención de la OTAN acabaron con las matanzas ni la limpieza étnica, ni tampoco con el régimen criminal de Milosevic. Y si este cayó en el año 2000, fue gracias a las revueltas populares no violentas que dieron al traste con aquel sátrapa que luego sería entregado al Tribunal Penal Internacional.

Respecto al genocidio de Ruanda en 1994, también puesto como ejemplo de inacción internacional, se debe recordar que, en la región de los Grandes Lagos, las atrocidades entre hutus y tutsis se remontan a decenios anteriores. Entonces, la responsabilidad de la Comunidad Internacional es por no haber arbitrado medidas de mediación que impidieran el genocidio. No por la tardía intervención militar.

Pues la Operación Turquesa para frenar el genocidio acabó apoyando a la guerrilla tutsi. Quienes, además de ayudar a expulsar a un millón de hutus hacia la R.D. Congo, una vez instalada en el poder, lanzó acciones de represalias contra los supuestos responsables del genocidio, produciendo nuevas matanzas. Hoy, Paul Kagame, el presidente tutsi del gobierno ruandés tiene abiertos procesos en Francia y España acusado de crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, tampoco parece que la intervención militar en Ruanda fuera muy eficaz ni favoreciera la protección de la población civil de una y otra parte de los contendientes.

Pero aún hay más. Los defensores del derecho a proteger con intervenciones militares humanitarias, no dicen nada de las causas de violencia estructural que originan muchos de los conflictos actuales en el mundo. Si los organismos internacionales que regulan las políticas económicas y comerciales transnacionales (OCDE, BM, FMI, UE), son señalados por múltiples analistas como una de las causas que originan conflictos. Medidas que en general van dirigidas a eliminar la protección de las economías locales para favorecer el comercio internacional y que siempre van acompañadas de exigencias de ajustes para que se reduzca la protección social. Medidas que acaban desestructurando el tejido social, generan paro, marginación, y en algunos casos haya quien se convierta en delincuente o se enrole en grupos armados como medio de subsistencia.

Entonces, ¿cómo se puede clamar por intervenciones militares a causa de violaciones de los derechos humanos, cuándo entre las causas que originan los conflictos hay una responsabilidad directa de quienes gobiernan esos organismos internacionales? Intervenciones denominadas con un término paz liberal (M. Duffield, 2001), que designa de manera apropiada las intervenciones militares de la Comunidad Internacional.

Ahora volvamos a Libia. Los rebeldes tomaron el camino de las armas abandonando el camino que dio el triunfo a las revoluciones no violentas de Túnez y Egipto.

Y eso no es una cuestión baladí a la que hay que añadir un hecho diferencial al resto de revoluciones, la cuestión tribal. En la región de Bengasi, los rebeldes que empuñaron las armas son de un clan opositor del de Gadafi que gobierna en Trípoli. ¿Qué ocurrirá si el clan de Bengasi vence gracias a la ayuda exterior y los rebeldes penetran en Trípoli? ¿Se repetirán las tristes experiencias vividas de las matanzas de las guerras de la exYugoslavia y Ruanda?

Y, por último, la cuestión a mi juicio más importante. Los rebeldes deberían haber reflexionado sobre el alcance de tomar las armas. Pues esa decisión tiene una enorme trascendencia moral. Empuñar las armas para conseguir una reivindicación política es apostar por un final violento.

Lo que abre una espiral de difícil control y de final incierto, con quizás nuevas matanzas y más represalias. Pues empuñar las armas para conseguir una reivindicación política es querer derrotar al contrario por la fuerza. Es apostar por un final violento y que sean las armas las que decidan el destino político de Libia.

La violencia armada de tantos grupos que decían luchar por la emancipación se han demostrado un error de proporciones colosales. Recordemos que aquellos grupos que alcanzaron el poder mediante la fuerza de las armas, solo con las armas pudieron mantener sus revoluciones, en detrimento de la libertad y la democracia. En el caso de Libia se vuelven a repetir los mismos errores del pasado.

Libia, una guerra muy sexi

Escrito por Jordi Calvo

Lunes, 28 de Marzo de 2011

(Artículo publicado en Público)

Las guerras son la manifestación de la violencia más perversa, por la preparación que necesitan y por los intereses que esconden o muestran abiertamente. Pero lo más perverso es que la participación en una guerra como la de Libia es una meditada decisión de nuestros líderes políticos que evalúan, como no puede ser de otra manera en las relaciones internacionales actuales, el beneficio que la guerra les puede reportar.

Las guerras son la manifestación de la violencia más perversa, por la preparación que necesitan y por los intereses que esconden o muestran abiertamente. Pero lo más perverso es que la participación en una guerra como la de Libia es una meditada decisión de nuestros líderes políticos que evalúan, como no puede ser de otra manera en las relaciones internacionales actuales, el beneficio que la guerra les puede reportar.

Estos beneficios, personales, económicos, políticos, o del tipo que sean, son lo que hacen que una guerra sea sexy. La de Libia tiene muchos ingredientes que a Sarkozy, Zapatero, Cameron... les parecen sexys. En este caso, los beneficios personales pueden ser tanto o más sexys como los que vio Aznar en la guerra de Irak.

Una afirmación del ego del líder político que se embarca en una guerra y además la gana (porque esta guerra, si quieren, la ganan, al menos como ganaron la de Irak), la notoriedad personal, pasar a los libros de Historia como un héroe (o villano, según quien los escriba) y, por supuesto, los réditos electorales que a corto plazo se pueden obtener, son algunos de los argumentos que pasarán por la cabeza de los responsables políticos de esta intervención militar.

Para los responsables de las potencias occidentales de la participación en la guerra de Libia y para otros poderes no tan visibles con intereses visibles o no, ir a la guerra de Libia es muy sexy, porque es una excelente inversión, que además pagamos los contribuyentes con dinero y vidas humanas.

En primer lugar, la guerra es interesante para el complejo militar-industrial, porque así gastamos armas, hacemos girar a la economía armamentística y, sobre todo, legitimamos el enorme gasto militar, que en estos tiempos de crisis está siendo seriamente cuestionado por la ciudadanía. Son evidentes también los grandes recursos de petróleo y gas libios, y es sobradamente conocido que hay empresas de los países occidentales directamente implicadas que ven peligrar sus concesiones de un hipotético futuro Gobierno de Gadafi.

Esta guerra es también sexy porque hay desde un inicio una resolución de Naciones Unidas, el apoyo inicial de la Liga Árabe y porque está de moda apoyar o decir que se apoya a las recientes revueltas populares, con el pretexto de la lucha por la libertad y la democracia. Juntando estos objetivos políticos con los intereses económicos, podríamos deducir que establecer un Gobierno totalmente controlado en Libia e incluso bases militares, entre los nuevos Túnez y Egipto, puede ser realmente interesante para Occidente.

Porque conviene asegurar que los procesos de cambio en estos países sigan la senda que más interesa, es decir, que no se conviertan en revoluciones socialistas o islamistas que hagan pagar más por el petróleo o el gas o no abracen gustosos el American o european way of life.

La guerra en Libia también es sexy porque Gadafi es un terrible dictador muy sexy para nuestros gobernantes, a quien dan ganas de sacar del poder de la forma que sea. Emocionalmente, y con las imágenes y mensajes que en todos los medios de comunicación oficiales aparecen del dictador, dan ganas de lanzarle un Tomahawk o varios cientos, como ya se ha hecho.

Pero si este señor es hoy tan terrible, ¿por qué tan sólo hace unas semanas era un gran amigo de Occidente? ¿Por qué se le han vendido las armas con las que está atacando ahora a los rebeldes? Si las intenciones de la comunidad internacional (occidental) son las de liberar a los pueblos oprimidos del mundo o proteger a las poblaciones que son víctimas recurrentes de la violencia armada, ¿por qué no se plantean intervenciones en Bahrein, Yemen, Myanmar, Zimbabue, Bielorrusia, Chechenia, Tíbet, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y un largo etcétera? Quizá porque estos lugares no son, por diversas razones, tan sexys como la Libia actual.

En fin, las operaciones militares en Libia no responden a las buenas intenciones que nos dicen. Y si así fuera, el resultado de muerte y destrucción que dejarán los cientos o miles de bombardeos y la probable intervención militar terrestre de los ejércitos occidentales dentro de unos meses será una manera más de colaborar en el despropósito de buscar una solución violenta a una situación violenta generada con total consciencia anteriormente.

Si los países occidentales quisieran promover con seriedad una bien intencionada liberación de los pueblos oprimidos de todo el mundo, no venderían armas a dictaduras infames, no tendrían intercambios comerciales y financieros con regímenes opresores, no tendrían relaciones políticas amigables con corruptos dictadores, ni serían tan incoherentes como para predicar la libertad y los derechos humanos y embarcarse en guerras imperialistas en lugares con gran interés geoestratégico y económico. En el caso de Libia, la reivindicación del no a la guerra se vuelve más necesaria que nunca.

Libia: El IPB condena los ataques militares e insta a realizar negociaciones políticas para proteger a la población civil

Escrito por IPB

Lunes, 28 de Marzo de 2011

21 de marzo 2011. Una nueva era histórica abrió sus puertas hace tres meses con los levantamientos populares en Túnez y Egipto, los primeros de la "primavera árabe".

Estas rebeliones trajeron esperanza a millones de personas y una energía juvenil a sociedades que han sufrido décadas de represión, injusticia, desigualdad, sobre todo de género, y dificultades económicas crecientes. La revuelta de Libia se inspiró en aquellas victorias mayormente no violentas, pero como el mundo ha visto con consternación, se ha militarizado rápidamente. Libia está ahora envuelta en una guerra civil a gran escala.

NO MÁS INTERVENCIONES ARMADAS

La fatídica decisión de las potencias occidentales de presionar al Consejo de Seguridad de la ONU para que aprobase una resolución que autoriza los ataques militares y una zona de exclusión aérea ha transformado la situación en una reminiscencia de la crisis de Irak de 2003. Si bien el IPB apoya el objetivo de proteger a la población civil, en Bengasi y en otros lugares, por contra condena los nuevos ataques armados por parte de potencias occidentales sobre otro país musulmán. ¿Estas potencias no han aprendido nada de sus desastrosos fracasos en los últimos 10 años? Es evidente que no se han agotado los métodos no militares. ¿Se han impuesto y ejecutado todas las sanciones económicas? ¿Se han realizado interferencias electrónicas? ¿Se han cancelado todas las ventas de petróleo y de gas?, ¿Se sabrá alguna vez la verdad?

¿CUÁNDO APRENDEREMOS?

La fascinación de los medios occidentales con las minucias de la batalla tiende a oscurecer la memoria histórica, sin la cual cualquier evaluación clara es imposible. ¿Nos hemos olvidado de quien vendió armas y cerró acuerdos energéticos con el coronel Gadafi? Las expresiones "zona de exclusión aérea" y "ataques aéreos" ¿No evocan recuerdos dolorosos sobre las desastrosas ocupaciones de Irak y Afganistán?

ENFOQUES ALTERNATIVOS

No hay ausencia de vías alternativas de acción. Para IPB, la tarea más urgente y la manera más eficaz para llevar a cabo el mandato de Naciones Unidas sobre la “responsabilidad de proteger” a la población civil, es comenzar de inmediato negociaciones serias con el régimen de Gadafi i los rebeldes. Este enfoque debe basarse, en primer lugar, en un alto el fuego real y multilateral, y posteriormente en la búsqueda de una solución política cimentada en la democracia participativa. La ONU ya tiene un representante especial en Trípoli. Cínico o no, Gadafi ha hecho un gesto de alto el fuego que podría ser utilizado como punto de partida.

Los estados occidentales, especialmente EE.UU. y las antiguas potencias coloniales, deben mantenerse al margen. El Secretario General de las Naciones Unidas y un grupo de personalidades con prestigio en el mundo musulmán deberían ser invitados a participar en cualquiera de las conversaciones que se puedan iniciar. La suspensión de los ataques aéreos podría ser utilizada como una medida de confianza. A medio plazo, debe considerarse la posibilidad de una misión de mantenimiento de la paz autorizada por la ONU, preferentemente no compuesta por fuerzas militares occidentales, y con un mandato clásico de mantenimiento de la paz (no imposición de la paz). ¿Por qué la inversión en mediación, diplomacia, construcción de confianza y esfuerzos similares es siempre una mínima parte del dinero gastado en la intervención armada?

DESBLOQUEO DE LA CREATIVIDAD

Los pueblos árabes han demostrado que tienen el coraje de romper con las costumbres del pasado y han demostrado una disciplina y dignidad admirables para enfrentarse a sus opresores. El mundo occidental debe responder ahora encontrando el valor para romper con sus propias costumbres del pasado, y aplicar la enorme creatividad de sus propias sociedades en la búsqueda de nuevas formas de resolver conflictos. El éxito en Libia -o incluso en otras partes de la región- ofrecería una valiosa inspiración para los pueblos de otras regiones que también padecen graves conflictos.

CAMBIO DE RUMBO

Todavía no es demasiado tarde para aquellos que lideran esta última jugada militar para salir del atolladero que se avecina. Instamos al mundo a movilizarse contra la guerra y la intervención extranjera, y en favor de soluciones negociadas.

Lo que se haga en los próximos días y semanas determinará las posibilidades de una solución a largo plazo. Bombardear desde el exterior tan sólo es amenazar con una mayor conflagración de consecuencias impredecibles.

ASPECTOS MÁS AMPLIOS

Hay todo un conjunto de consideraciones más amplias por explorar e importantes lecciones que deben ser asimiladas. En particular, que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad no pueden seguir haciendo de policía del mundo como si estuviéramos todavía en 1945, y que es el momento oportuno para realizar una protesta mundial contra el gasto enorme dedicado al sistema militar (1.5 billones de dólares al año) y, en particular, al comercio internacional de armas, con su correspondiente corrupción y dobles raseros.

El International Peace Bureau es claro en sus prioridades. Tenemos que desarmar a fin de desarrollar. Las necesidades básicas de la población deben ser atendidas como prioridad absoluta, no como un subproducto de la "seguridad nacional". Hacemos un llamamiento a los países e industrias productores de armas para iniciar con urgencia la conversión de la investigación y producción militar para fines civiles.

El mundo nunca alcanzará los Objetivos de Desarrollo del Milenio si no abandona la forma militar dominante de pensar y actuar. Hemos aprendido en los últimos años que la democracia no puede imponerse y que los cambios de régimen son asunto sólo de la propia población.

Ahora es el momento oportuno para ayudar a la gente de Oriente Medio/África del Norte a construir sociedades basadas en la visión de una cultura de paz, como se anhela en todo el mundo. Este programa fue acordado por la ONU en la preparación del Año Internacional para una Cultura de Paz en 2000 y durante la siguiente Década sobre una Cultura de Paz y la Noviolencia, que acaba de llegar a su fin, y que ahora debe ser renovada enérgicamente.

El International Peace Bureau trabaja con el objetivo de un Mundo Sin Guerra. Somos Premio Nobel de la Paz (1910) y, con el paso de los años, 13 de nuestros delegados han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz.

Nuestras 320 organizaciones en 70 países y miembros a nivel individual forman una red mundial que reúne conocimiento y activismo en una causa común. Nuestro programa principal se centra en el Desarme Sostenible para el Desarrollo Sostenible. Esperamos tu participación.

"La liberación" de Libia. Una vieja historia

Escrito por Valentina Saini

Miércoles, 23 de Febrero de 2011

Publicado en Directa (no disponible en castellano)

La oposición a Muammar el Qaddafi, en Libia, está perdiendo terreno contra las fuerzas del dictador estos días. Desde Trípoli, no llegan señales de querer una negociación con el Consejo Nacional Provisional de Transición Libio.

El Secretario General de la OTAN, Rasmussen, es muy cauto, y reitera que la OTAN no está buscando pretextos para actuar, sobre todo sin un mandato de las Naciones Unidas, pero que está preparada para cualquier eventualidad en Libia. Los Estados Unidos no pierden ocasión para afirmar estar preparados para tomar medidas militares y que, pase lo que pase, el final de la historia debe ser la caída del régimen de Qaddafi.

Y La Liga Árabe ha pedido a Naciones Unidas tomar los pasos necesarios para aprobarla, para proteger a los civiles de los bombardeos. Pero, ¿cuántas décadas lleva el dictador libio manteniendo el poder a través de la represión de cualquier tipo de oposición, el uso generalizado de la tortura, y la negación de toda libertad civil y política a la población libia? ¿Cuántas décadas llevan sufriendo los libios?

Parece increíble, pero una vez más nos encontramos ante un discurso político y mediático centrado en el sufrimiento de un pueblo, el libio, oprimido por un dictador enloquecido, y de la OTAN como salvador de este pueblo. Sin embargo, Libia no es el único país árabe en el que las protestas contra el régimen estén siendo reprimidas.

En Yemen y Bahrein, la policía está disparando contra los manifestantes. Pero ni Yemen ni Bahrein tienen las mayores reservas de petróleo del continente africano, y las novenas del mundo. Libia sí. Tampoco va mal en gas natural, es el cuarto país de África.

No hace mucho que sentimos un discurso similar sobre los talibanes o Saddam Hussein y, a pesar de que se nos aseguró que las intervenciones armadas indudablemente liberarían y mejorarían las condiciones de vida de la población de Afganistán e Irak, sabemos que las consecuencias de estas operaciones militares han sido, y siguen estando catastróficas.

Lo de la "liberación" de un país por medio de una intervención militar y extranjera es una vieja historia, ya conocemos el final de varios episodios de esta historia. Los Balcanes, Kosovo, Somalia .. Nunca son finales felices, y sabemos que no tienen nada que ver con la liberación de la población.

Las sociedades de los países árabes que se han rebelado y siguen haciéndolo, contra unos regímenes dictatoriales, necesitan apoyo, tienen meses muy difíciles por delante, en los que deberán mantener alta la vigilancia para que sus esfuerzos se traduzcan en democracias verdaderos, lo que han estado pidiendo. Y nosotros desde aquí, podemos hacer oír nuestra voz en contra de intervenciones militares de cualquier tipo en Libia, como en otros países, ya favor de la constitución de otro orden internacional, uno en el que no se recurra a la violencia, pero en el que se persiga a los gobiernos que hacen cualquier cosa para defender sus intereses. Sean del hemisferio que sean.

Lo que a España le cuesta la guerra

Escrito por Jordi Calvo

Martes, 15 de Febrero de 2011

(Artículo publicado en Diagonal)

En 2010, se han desplegado 9.557 militares en operaciones en el exterior. La mayoría lo hicieron en misiones de la OTAN (4.312), seguidos de quienes lo hicieron en las de la ONU (3.191), de la UE (1.575) y 450 en misiones unilaterales españolas. Según la ministra Carme Chacón, actualmente hay 2.880 militares que se reparten principalmente en tres misiones: 1.447 están en la guerra de Afganistán, en la misión de la ISAF en el marco de la OTAN bajo el mando de EEUU, que no es una misión de cascos azules de NNUU como a menudo nos intenta vender el Gobierno español; 1.074 están en Líbano, en la FINUL (ésta sí que es de cascos azules); y 257 en la Operación Atalanta de la UE para proteger a los barcos pesqueros que faenan en las aguas somalíes y proximidades (con lo que conseguimos un atún que le sale algo caro al bolsillo de los españoles). Aunque cabe decir, que según otras estimaciones, los militares españoles que actualmente hay en el exterior son todavía más, alcanzando los 3.184.

El coste global de todas las misiones en el exterior en 2010 ha sido de 787,9 millones de euros. Solo en 2010 la participación en la guerra de Afganistán ha supuesto un desembolso de 464 millones de euros; y en total, desde 2002 el coste únicamente de esta misión supera los 2.040 millones de euros. Por su parte, los militares del Líbano nos han costado hasta la fecha 791 millones de euros, de los que 173 corresponden a 2010.

Además, durante el pasado año la Operación Atalanta ha costado 82,3 millones de euros. Desgraciadamente no nos informa la ministra del coste global de todas las operaciones militares en el exterior, pero podemos calcular que desde 2002, cuando fueron enviados los primeros militares españoles a Afganistán, se han gastado 5,113 millones de euros.

Pero el coste de la participación en las operaciones militares en el exterior es mucho más alto que estos miles de millones de euros. Desde 1988 han perdido la vida 159 militares en estas operaciones, quizá por eso el gobierno acaba de crear la Unidad de Apoyo a Militares Heridos y Familiares de Fallecidos en Acto de Servicio, una unidad que no tendría razón de ser de no existir cierta ansia de prestigio internacional a través de la presencia militar en el exterior en los sucesivos gobiernos españoles de los últimos años.

En la guerra de Afganistán han muerto hasta ahora 94 personas de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil (82 por accidente y 12 por acción violenta).

La justificación de estas misiones militares es que existen amenazas a nuestra seguridad, que para la ministra de Defensa son el terrorismo, el crimen organizado, los Estados fallidos, la proliferación de armas de destrucción masiva, pero también la crisis económica, la desigualdad y los efectos del calentamiento global. Es más que evidente que para combatir el terrorismo y el crimen organizado se necesita más de labores policiales que militares, o que para los Estados fallidos las relaciones diplomáticas y la cooperación internacional son las medidas más efectivas.

Finalmente, ¿qué decir de que la crisis económica, la desigualdad o el calentamiento global tengan que ser gestionados militarmente o enviando a nuestro ejército? Como vemos, las justificaciones que da la ministra van de lo absurdo a lo insuficiente, y no explican en ningún caso que nos hayamos gastado en los últimos años del bolsillo de todos los contribuyentes, más de 2.000 millones de euros directamente en hacer la guerra de Afganistán y al menos otros 3.000 en cuestionables operaciones militares en el exterior.

Se trata tan solo de una cuestión de prioridades y las de la España democrática no son las de trabajar por la paz, sino más bien todo lo contrario, porque la paz no se construye a través de la guerra. Todo ello, no lo olvidemos, a costa de ya 159 muertes de españoles, y muchas más que vendrán.

Obama y la extensión de la guerra secreta

Escrito por Tomàs Gisbert

Lunes, 15 de Noviembre de 2010

El pasado mes de marzo la administración Obama publicaba la Reseña Quadrienal de la Defensa 2010 (Quadriennial Defense Review, QDR en adelante) (1). Este documento ha de guiar los planes militares de Estados Unidos y las demandas presupuestarias que los acompañan en los próximos cuatro años.

La QDR profundiza las líneas trazadas por la Estrategia Nacional de Defensa de 2008 (NSS 2008) (2) promulgada al final del mandato de George Bush. Aunque pueda resultar sorprendente, no es extraño puesto que ambos documentos han sido elaborados bajo la dirección del secretario de Defensa, Robert Gates, que ya desempeñaba este cargo con Bush.

La política que llevó a las guerras de Irak y Afganistán estuvo fuertemente marcada por la arrogancia producto de una hegemonía militar total y sin precedentes, que se sostiene en un gasto militar que supera con creces el 40% del total mundial, y por la confianza que le confieren los cambios revolucionarios en la tecnología militar de los últimos años, y que vino a denominarse como la Revolución en los Asuntos Militares.

Esa política puso todo su énfasis en la preparación para la guerra convencional, en la preparación para grandes guerras con grandes despliegues de fuerzas. Pero la cruda realidad de los fracasos en las intervenciones militares en Irak y Afganistán provocó la necesidad de un cambio en las doctrinas militares. Donald Rumsfeld, principal exponente de esa política, fue sustituido de su puesto de Secretario de Defensa por Robert Gates a finales de 2006. El nuevo manual de contrainsurgencia norteamericano de esas mismas fechas ya dió un giro a los manuales vigentes en las dos últimas décadas, abogando por una estrategia militar menos condicionada por la tecnología militar y que prestara una mayor atención a las dimensiones políticas, sociales y culturales de los conflictos, giro que se consolidó con la Estrategia Nacional de Defensa de 2008. La actual QDR prosigue el cambio dando una mayor atención a la preparación para las guerras de baja intensidad y la lucha contrainsurgente.

Es significativo que la QDR define a Estados Unidos como un país en guerra. En guerra en Irak y en Afganistán , pero también apunta a un nuevo tipo de guerra, una guerra que no es convencional y que no se libra en un territorio o en un estado concreto. En palabras de la propia QDR, “Estados Unidos y sus aliados y asociados siguen participando en una guerra más amplia, que es una lucha política, militar y moral multifacética contra Al Qaeda y sus partidarios en todo el mundo”.

Este tipo de guerra necesita unas capacidades militares diferentes a las necesarias para librar guerras convencionales. Así la actual administración pone el acento en la preparación para la lucha contrainsurgente, en el desarrollo de fuerzas especiales que puedan combatir en conflictos de pequeña escala, o de baja intensidad, en localizaciones diferentes, en diversos continentes al mismo tiempo. Para ello va a ser necesaria una nueva generación de armas específicas para la lucha contrainsurgente como helicópteros, armas pequeñas, vehículos resistentes a las minas o aviones no tripulados con capacidad de ataque.

Las guerras de baja intensidad van a complementar las grandes guerras. La QDR establece el objetivo de tener capacidad militar para ganar dos guerras convencionales simultáneas, así como para hacer frente a un amplio abanico de misiones de pequeña escala a lo largo del ancho mundo. Este ambicioso objetivo confirma que Estados Unidos va a proseguir las guerras de Irak y Afganistán, al tiempo que ya se está preparando para librar una serie interminable de campañas de contrainsurgencia en rincones remotos del mundo.

Asimismo, también confirma que el gasto militar no sólo no va a disminuir, sino que, por el contrario, va a continuar con la obscena escalada ininterrumpida iniciada a mediados de los años 90. Como recalca el documento “Los intereses de los Estados Unidos y su función en el mundo requieren la existencia de unas fuerzas armadas con aptitudes sin parangón y una nación dispuesta a emplearlas en defensa de nuestros intereses y el bien común”(las cursivas son nuestras).

El aumento de las capacidades militares va acompañado de una especial atención a la ayuda militar y a la formación de las fuerzas militares y policiales de países clave del Tercer Mundo en la lucha contra Al Qaeda y otras insurgencias que atenten contra los intereses norteamericanos. Esta política no es nueva, el propio documento destaca que se viene realizando desde el fin de la segunda guerra mundial, pero fue a partir de los años 60 cuando cobró mayor intensidad.

En aquel momento, Robert MacNamara, secretario de defensa del presidente Kennedy, inició el despliegue de miles de asesores en contrainsurgencia a lo largo del sudeste asiático, África y América Latina, que propagaron la nefasta Doctrina de Seguridad Nacional adiestrando a los militares que poco después encabezarían las sangrientas dictaduras de los años 70 y 80. Valga como ejemplo de esta política la Escuela de las Américas (SOA), ubicada en Fort Benning, Georgia, y denominada desde 2001 como “Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad”.

En sus 59 años ha entrenado a más de 60.000 militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, formación de francotiradores, comando y guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio. Puede seguirse el rastro de sangre y sufrimiento en todos los países a los que sus graduados han regresado. Miles de latinoamericanos han sido torturados, violados, asesinados o desaparecidos por personas formadas en la Escuela de las Américas(3).

Ciencias sociales para la guerra

La diversificación de conflictos y escenarios, y la necesidad de poder entender las complejidades sociales y culturales de los entornos en que se hace la guerra, ha llevado a un renovado interés del departamento de defensa por las ciencias sociales y su utilización militar.

Así la QDR establece entre sus objetivos “fortalecer las capacidades lingüísticas, culturales y de conocimientos regionales” de los países en que se actúa. En esta dirección el departamento de Defensa en 2008 impulsó la Iniciativa Minerva que busca involucrar a las universidades para utilizar las ciencias sociales, como la antropología o la sociología, con fines militares. Las áreas de estudio que la iniciativa propone son: Irak; organizaciones terroristas e ideologías; religión y cambios culturales en el mundo musulmán; implicaciones en la seguridad nacional de la energía y el cambio climático; nuevas teorías de la disuasión; China (4). Ello trae al recuerdo el proyecto Camelot, un esfuerzo militar en la era de la guerra de Vietnam para garantizar la asistencia académica con fines de contrainsurgencia en el Tercer Mundo.

No sobra decir que ello entra, ya de por sí, en flagrante contradicción con los principios éticos que los investigadores sociales están obligados a respetar. Principios que podrían resumirse en que la investigación social no puede ser empleada para causar daño a la población estudiada.

La política de la QDR ya se está llevando a cabo. Tal como dice el mismo documento “las fuerzas de los Estados Unidos están trabajando en el cuerno de África, el Sahel, Colombia, entre otros para proporcionar capacitación, equipo y asesoramiento a sus homólogos del país anfitrión sobre la mejor manera de expulsar y dismantelar las redes terroristas e insurgentes,...”

Pero el trabajo de las fuerzas norteamericanas no se limita a trabajos de asesoramiento o capacitación. Una guerra secreta de baja intensidad se está desarrollando desde los desiertos del norte de África, al Pakistan, Yemen o las repúblicas exsoviéticas. Estados Unidos ha aumentado las operaciones militares clandestinas y de inteligencia asesinando en Yemen, Somalia o Paquistán a supuestos militantes de Al Qaeda con misiles teledirigidos, cooperando en operaciones militares en Marruecos o Argelia,... La CIA está tomando mayor protagonismo, como una agencia de espionaje, pero también convirtiéndose en una organización paramilitar que planifica y realiza, tanto asesinatos selectivos como ataques a convoyes logísticos en las montañas de Pakistán con aviones teledirigidos no tripulados.

El Pentágono no le sigue a la zaga, cada vez más utiliza tropas especiales en misiones secretas en todo Oriente medio y otros lugares. Asimismo los operativos contraterroristas recurren con mayor frecuencia a la creación ad-hoc de operativos locales específicos o al concurso de contratistas militares privados, que llegan incluso a realizar trabajos de espionaje (5).

La estrategia de contrainsurgencia global de la actual política militar norteamericana no da margen para la esperanza en una paz duradera. No se desarrolla una política que busque encontrar soluciones legítimas para las justas aspiraciones de los grupos marginados por la globalización, como tampoco se combaten las condiciones que dan origen al extremismo violento.

Pero en cambio si podemos asegurar que la vulneración de la legalidad internacional, con una política de asesinatos selectivos, y una descarada ostentación de poderío armado no harán más que atizar el odio y la espiral de la violencia, combustibles imprescindibles de una guerra paranoica e interminable.

Acciones armadas encubiertas norteamericanas en los últimos meses

Pakistán. Bombardeos por aviones no tripulados. Algunos meses la CIA ha efectuado más de una docena de ataques con misiles.

Iran. Acciones encubiertas de la CIA para sabotear el programa nuclear iraní

Yemen. Desde de diciembre pasado numerosos bombardeos con misiles de crucero han matado a supuestos militantes de Al Qaeda, pero también a numerosos civiles, llegando a matar por error al Gobernador Jabir al-Shabani y a su guardia el 25 de mayo último.

Una orden clasificada de setiembre de 2009, firmada por el general David Petraeus en aquel momento comandante del **CENTCOM**, autorizó operaciones de inteligencia en más de 19 países, entre ellos Arabia Saudita o el Tayikistán.

Somalia. En setiembre de 2009 un comando norteamericano asesinó al líder del grupo local afiliado a Al Qaeda. Se estudian operaciones para golpear a la cúpula de Al-Shabab, organización de resistencia islámica.

Kenia. Alberga la mayor estación de la CIA en la región y preocupa que la somalí Al-Shabab pueda establecerse en ese país.

Sudan. Oficiales norteamericanos vigilan la actividad militante en prevención de que pudieran convertirse en una base de Al Qaeda.

Marruecos y Argelia. Equipos estadounidenses forman a las fuerzas antiterroristas locales desde 2005, y cooperan con los militares franceses en acciones antiterroristas en Malí y Mauritania.

La guerra contra el terror en Egipto: solo un pretexto más

Escrito por Valentina Saini

Lunes, 15 de Noviembre de 2010

Las violaciones de los derechos humanos en Egipto no son una novedad. Las organizaciones para la defensa de los derechos humanos llevan años denunciando los abusos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad del estado, y señalando que la práctica de la tortura, en Egipto, es endémica.

En 1992, Human Rights Watch publicó un informe en el que denunciaba la frecuencia de las detenciones en régimen de incomunicación, los malos tratos y la tortura a los que eran sometidos los detenidos durante los interrogatorios, así como las numerosas detenciones de larga duración sin juicio

(1). En 1993, la misma organización pedía al gobierno norteamericano que reclamara la responsabilidad del presidente Hosni Mubarak frente a estos abusos

(2). La censura (de los medios de comunicación, de la academia etc.), la represión de las manifestaciones de protesta y de casi cualquier forma de disidencia u oposición política no son más que la punta del iceberg. Egipto es un país en el que el estado de emergencia, que debería de ser aplicado exclusivamente por breves períodos de tiempo, lleva en vigor desde 1981. Esto conlleva fuertes restricciones de las libertades y los derechos de la ciudadanía. También conlleva, por ejemplo, que el presupuesto destinado a la seguridad nacional para el año 2006 fuera de 1.5 mil millones de dólares, mucho mayor que el destinado a la sanidad pública

(3). Egipto es, básicamente, un estado policial. Ser detenido por la policía o por los temidos mukhabarat (servicios de inteligencia) significa tener altas probabilidades de ser sometido a malos tratos y torturas. La Organización Egipcia para los Derechos Humanos (EOHR) ha registrado, en el período entre 1993 y 2008, 460 casos de tortura solo en las estaciones de policía (no son incluidos en estas cifras, los casos ocurridos en las cárceles), y 160 casos en los que la persona detenida ha muerto a causa de los malos tratos.

(4). Al Nadim Center señala que el número exacto de víctimas de malos tratos y torturas es mucho mayor del que las organizaciones de derechos humanos pueden registrar, por el hecho de que muchas víctimas, temiendo la represalia de la policía, no denuncian los hechos

(5).El empleo de la violencia y la tortura en Egipto no es restringido a algunos colectivos específicos, sino que los presuntos “islamistas son torturados así como los comunistas, los socialistas, los delincuentes, los pobres, los defensores de los derechos humanos, los pacifistas y los sospechosos”

(6). En varios casos, la tortura de una persona consiste en hacerle escuchar o asistir a la tortura de algún familiar. Tampoco faltan las desapariciones. No es infrecuente que una persona sea vista por última vez siendo detenida por la policía en un lugar público, y que luego no se vuelva a saber nada de ella.

En la inmensa mayoría de los casos, los perpetradores de estos abusos quedan en la impunidad más absoluta, y cuando son condenados, las condenas suelen afectar exclusivamente a los oficiales de menor grado y, en todo caso, suelen ser muy leves, hasta si la víctima ha muerto a causa de la tortura.

Además, a causa del estado de emergencia, numerosos civiles son juzgados por tribunales militares, sobre todo aquellas personas que han sido detenidas por oponerse al régimen o expresar sus ideas políticas. Es el caso de numerosos blogueros egipcios. Uno de ellos, Khaled Said, ha sido detenido por la policía en un cibercafé de Alejandría y ha muerto. Según la versión oficial por asfixia, pero numerosos testigos han visto como los policías le pegaban brutalmente. La culpa de Khaled ha sido colgar en su blog un video en el que un grupo de policías se repartían la droga que habían requisado a algunas personas

(7).En la “guerra contra el terrorismo”, llevada a cabo por un estado a mayoría musulmana, es muy importante la diferencia entre ser catalogado por la comunidad internacional, como “estado canalla” o “moderado”. Pertener a una u otra categoría determina si existe la posibilidad, aunque remota, de ser atacado por la OTAN, por ejemplo.

Egipto, aliado incondicional de Estados Unidos en la lucha antiterrorista y, hasta el 2009, segundo mayor receptor de la ayuda externa norteamericana después de Israel

(8) es, para la comunidad internacional y según estos criterios, el país moderado por excelencia. En lo que no es moderado Egipto, como hemos visto, es en las medidas que emplea para reprimir no solo los movimientos islamistas (tanto los potencialmente violentos como los legalistas) sino también cualquier forma de disidencia y de oposición a su poder. Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional, ya lo escribía en la introducción al Informe anual de Amnistía Internacional de 2002, relativo a los hechos ocurridos en el mundo entre enero y diciembre de 2001

(9). Egipto es uno de aquellos países que, desde el 11-S, utiliza el pretexto de la guerra contra el terrorismo para legitimar, frente a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, sus métodos represivos y la casi total impunidad de los violadores de derechos humanos. Sin embargo, no le hace falta justificarse frente a los países occidentales, que han dejado de insistir tanto para la instauración de una verdadera democracia en Egipto y en aquellos otros países en los que, si hubiera procesos electorales justos y libres, los partidos islamistas podrían llegar al poder, como ha ocurrido en las elecciones legislativas de 2006 en los Territorios Ocupados Palestinos, de las que Hamas salió victorioso.

Otra razón por la cual el gobierno egipcio no tiene por qué preocuparse de que Occidente le acuse seriamente de violar los derechos humanos de su pueblo y tome medidas concretas al respecto, es que es el país al que, como contaba el ex funcionario de la CIA Bob Baer, otro estado acude si quiere obtener toda la información posible de alguien y, luego, hacerle desaparecer para siempre

(10). De hecho, desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos en particular ha hecho de Egipto un punto de tránsito o de destino para interrogar o detener indefinidamente a muchos presuntos terroristas. El mismo Primer Ministro egipcio Ahmad Nazif, en 2005, admitía que desde el 2001, Estados Unidos había enviado a Egipto entre 67 y 70 detenidos

(11). Numerosas organizaciones para la defensa de los derechos humanos han denunciado esta práctica, y aunque el programa de las entregas extraordinarias haya en realidad empezado bajo el mandato del presidente Clinton, es en el marco de la guerra contra el terrorismo que Egipto, junto con otros países, se ha vuelto tristemente famoso como el destino de muchas de estas entregas y detenciones secretas.

Sin embargo, a pesar de que los abusos cometidos por el estado egipcio sean más visibles en los medios occidentales desde entonces, el presidente Hosni Mubarak no necesitaba el 11-S para empezar a tratar a su pueblo con mano dura. Ya llevaba suficientes años haciéndolo, como para ayudar a los aliados en la guerra contra el terror haciendo para ellos, junto con otros países musulmanes “moderados”, el trabajo más sucio.

El laberinto eterno del conflicto palestino

Escrito por Xavier Garí de Barbarà

Miércoles, 13 de Octubre de 2010

Después de Jimmy Carter, probablemente ningún Presidente de los Estados Unidos como Barack Obama puede cultivar mejores esperanzas para hacer avanzar el proceso de paz entre israelíes y palestinos. No obstante, la situación en que se encuentra la Administración Obama, el proceso electoral que sobreviene, las inquietudes internas dentro del Partido Demócrata y la creciente oposición republicana, no ayudan a fortalecer y concentrar el liderazgo de Obama en uno de sus objetivos clave en política exterior. Afganistán se encuentra en una situación delicada; Irak ha sido resuelto con una retirada falta de buenos augurios, y el conflicto palestino desespera y parece que no avanza al ritmo que se hace más que necesario, urgente.

El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es posiblemente el mejor posicionado para liderar unas conversaciones de paz desde Israel. Un líder laborista motivaría más oposición a pesar de que posiblemente tendría más capacidad para contribuir de manera seria y comprometida al tan esperado proceso de paz. Sin embargo, la situación en la que se encuentra el Gobierno israelí, fundamentada en pactos y coaliciones, no facilita caminar hacia opciones políticas que requieren flexibilidad en las conversaciones pero criterio claro en el Gobierno, además de capacidad para lograr compromisos serios y de fondo.

Sin embargo, tocan a su fin los 10 meses de moratoria en la construcción de los asentamientos colonos, y volvemos a la situación anterior sin haber aprovechado este tiempo para resolver uno de los polvorines del conflicto, que sigue encendiéndose día a día.

En tercer lugar, la situación palestina no ha hecho más que empeorar desde la muerte de Yasser Arafat, en diferentes frentes. A medida que han avanzado los asentamientos en territorio árabe ante la impotencia del Gobierno palestino y la incapacidad de comprometer más a la comunidad internacional, Cisjordania y Gaza han quedado cada vez más desunidas no sólo territorialmente, sino también política e ideológicamente, debilitando las opciones de liderazgo y gobierno del Primer Ministro palestino, Mahmud Abbas.

Si bien es evidente que sólo se puede caminar hacia la creación de un Estado Palestino, y este es un objetivo insoslayable que todas las partes saben perfectamente que deberán alcanzar tarde o temprano, la situación es tan complicada en todos los frentes que no se puede consensuar el camino adecuado para trepar los pasos firmes que permitan conducir hacia la solución del conflicto, de una vez por todas.

Después de décadas de enfrentamientos, terrorismo y intifadas, asentamientos y provocaciones de unos y otros, el conflicto está lejos de amortiguarse. Más aún, ni israelíes, ni palestinos ni norteamericanos encuentran la manera de salir de un lío tras otro que no hace más que bloquear el proceso de paz. En consecuencia, las conversaciones se convierten en un ensayo estéril de ineficacia que profundiza el drama de un conflicto altamente complejo, y lo encauzan en un laberinto que parece eterno.

Israel, ayer víctimas hoy verdugos

Escrito por Pere Ortega

Jueves, 22 de Julio de 2010

Publicado en Directa

El pueblo judío ha sido perseguido por razones religiosas y étnicas, sometido al exterminio por el fascismo, y hoy, paradójicamente, practica la exclusión y la limpieza étnica de los palestinos. De víctimas han pasado a verdugos.

El estado de Israel ha tenido la habilidad de ir falseando su historia. Así ha ido transmitiendo un discurso en el que han prevalecido las mentiras o las medias verdades, para crear una corriente de opinión favorable a las políticas que practica. Por ejemplo, pocos saben que Israel se fundó en 1948 tras expulsar de su territorio a 800.000 palestinos, una limpieza étnica que se saldó con un millar de muertos. De estos hechos nacen los campos de refugiados palestinos. Por ejemplo, la Gasa actual nace como un campo de refugiados, como lo son los campos de Siria, Jordania, Egipto y Líbano donde malviven cinco millones palestinos.

Una segunda cuestión importante es sobre la herencia semita de los judíos. Los judíos que viven hoy en Israel son, en su inmensa mayoría, hijos de la diáspora iniciada hace 2500 años y llegados desde todos los rincones del planeta. Por lo tanto atribuirles raíces semíticas, es un tanto arriesgado, lingüísticas sí, pero raciales de ninguna manera. En cambio, los palestinos de hoy, además de ser de lengua semítica, son descendientes directos de los semitas que no se fueron, y nunca se han movido de las tierras de Palestina y el único que sufrieron es la colonización árabe .

Israel se presenta como un país agredido. Y ciertamente lo ha sido, pero no se dice nunca que de víctimas han pasado a agresores de los palestinos de hoy. Así Israel ha ocupado territorios en Cisjordania donde ha situado en 300.000 colonos, derribando casas y expulsando a sus habitantes, expulsiones que hoy continúan en Jerusalén del este.

También se ha apropiado de las aguas subterráneas, o descuartiza el territorio mediante un muro para proteger sus colonias, impidiendo la comunicación entre las comunidades palestinas; en la franja de Gaza, donde viven un millón y seiscientas mil personas, mantiene un asedio ilegal por tierra, mar y aire, contrario al derecho internacional, donde se impide la entrada de comida y medicamentos.

Muchas de estas cuestiones son suficientes para afirmar que en Israel existe una segregación de los palestinos; que Israel actúa con impunidad sin que la Comunidad Internacional haga nada por evitarlo; ahora ha atacado en aguas internacionales barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza y han matado nueve ciudadanos europeos. Mientras Europa y la Comunidad Internacional callan, convirtiéndose en cómplices de los crímenes contra la humanidad que Israel comete en Palestina.

El pueblo judío ha sido perseguido por razones religiosas y étnicas, sometido al exterminio por el fascismo, y hoy, paradójicamente, practica la exclusión y la limpieza étnica de los palestinos. De víctimas han pasado a verdugos.

Atacar Irán

Escrito por Pere Ortega

Viernes, 21 de Mayo de 2010

Irán continúa sus programas nucleares. La OIEA dice que los programas iraníes de enriquecimiento de uranio no hacen sospechar que tenga proyectos de fabricar armas nucleares. En cambio EEUU, Israel y algunos países europeos hablan del peligro nuclear iraní, de imponer sanciones y en el pasado, incluso se han preparado acciones militares ¿Qué pasará?

El régimen de los ayatolás siempre ha demostrado interés en dominar el ciclo nuclear completo y no depender de ningún otro país en este proceso. Tiene una decena de instalaciones diseminadas por su territorio. En 1982 anunció la creación de una planta de tratamiento de uranio en la localidad de Isphán y en 1992 descubrió minas de uranio. Las inspecciones de la OIEA no han demostrado que existan pruebas de que Irán aspira a conseguir armas nucleares. Es decir, se pueden tener sospechas, pero pruebas ninguna. Hace un año en la central de Natanz existían 5000 centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio, capaces de enriquecer la cantidad de uranio suficiente para que, en un espacio corto de tiempo (uno año), Irán pudiera conseguir la bomba nuclear.

Intentar que Irán aporte pruebas que nieguen la posibilidad de conseguir armas nucleares en sus instalaciones es algo imposible cuando se trata de enriquecimiento de uranio. Una tecnología de doble uso, que en este caso, podría servir para traspasar tecnología civil para uso militar. Hecho que sólo la OIEA puede verificar y aportar pruebas de que no se lleva a cabo. Así, por mucha información que Irán aporte, EEUU continuará desconfiando y presionando sobre la culpabilidad de Irán. Y que sitúa a Irán en una situación similar al Irak de 2003 cuándo fue atacado bajo la falsa sospecha de tener armas de destrucción masiva.

Otra cuestión muy importante estriba en que no es suficiente la capacidad tecnológica de construir una bomba nuclear, pues ésta ha de ir acompañada de la capacidad tecnológica de poder arrojarla sobre un objetivo rival. Es decir, disponer de los misiles para lanzarla sobre otros países. Irán dispone de ellos. Tiene misiles Shahab 3 de alcance medio, entre 1300 y 1500 km con capacidad de llevar cargas de 1000 kg y alcanzar Israel. Y tiene en desarrollo los Shahab 5 de largo alcance (3750 km).

El periodista estadounidense Seymour Hersch, informó que el Pentágono había desarrollado misiones secretas en Irán en el verano de 2004 destinadas a preparar ataques contra Irán y la posibilidad de la utilización de bunker boosters. Un nuevo tipo de mini bombas nucleares desarrolladas por el Pentágono de inferior potencia para atacar bunkers o lugares escondidos bajo tierra.

La alarma mundial de una nueva guerra contra Irán se disparó en agosto de 2006, pues EEUU había conseguido poner a Irán en el punto de mira del Consejo de Seguridad de la ONU, para que éste justifique, tarde o temprano una acción militar contra Irán.

El nuevo presidente de EEUU, Barack Obama, no parece interesado en atacar, pero continúa presionando y pretende incrementar el cerco y las sanciones sobre Irán. Pero en cambio, las amenazas de Israel son más reales, como lo demuestran diversas medidas de fuerza realizadas en los últimos tiempos. La más llamativa, el ataque perpetrado contra Siria, el 6/9/2007, cuando bombardeó una instalación nuclear.

Aunque, un ataque contra Irán no puede ser una acción aislada como la perpetrada por Israel contra la planta nuclear iraquí de Osirak en junio de 1981. Atacar una instalación nuclear en Irán, tendría una respuesta militar inmediata del gobierno de los ayatolás, posiblemente contra territorio israelí o contra las bases militares de EEUU en la zona. Irán, además, podría cerrar el estrecho de Ormuz por dónde circulan 20 millones de barriles de petróleo al día, el 20% de la producción mundial. Un estrecho que sólo tiene 6 millas de ancho navegables. Esto iría seguido de un vertiginoso aumento del precio del petróleo con consecuencias catastróficas para la economía mundial.

La nuclearización de Irán ha agravado la ya de por sí tensa situación de Oriente Próximo y Medio, alertando a los países rivales de Irán en la región. La mayoría de ellos han empezado a elaborar planes para desarrollar plantas nucleares de producción de energía. Esto agrava la delicada situación de la región, por el riesgo que conlleva una posible proliferación de armamento nuclear. Turquía, Bahrén y Egipto anunciaron la construcción de su primera central nuclear; Jordania, Arabia Saudita, Yemen, Omán, EAU, Siria y Kuwait lo tienen en estudio.

Irán debería renunciar a la locura del armamento nuclear y evitar a la humanidad el peligro de convertirse en un nuevo agente con capacidad de conducirnos a un holocausto nuclear.

Pero no es menos cierto, que eso debería ir acompañado de obligar a Israel a deshacerse de ese tipo de armamento. Es hipócrita pedir a Irán que no desarrolle programas de armamento nuclear, mientras las potencias que lo poseen modernizan sus arsenales o no sancionan a Israel por poseerlas.

El problema de la política de dos medidas, o dicho de manera más contundente, de doble moral, ejercido por las potencias con armas nucleares, es pretender obligar al resto de países a renunciar a la bomba atómica, mientras ellos las monopolizan. Una política abocada al fracaso, pues la tecnología nuclear cada vez es más accesible en muchos nuevos países en desarrollo con ambiciones de convertirse en potencias. Países que pueden caer en la tentación de convertirse en potencias militares nucleares. No existe otro camino para evitar la proliferación que el desarme nuclear.

La democracia no ha arraigado en Haití

Escrito por Miquel González

Lunes, 15 de Febrero de 2010

Haití, el país más pobre de América Latina, se vio sumergido en el caos después de que el mayor terremoto vivido en 200 años afectara el territorio.

Se estima que el daño de la catástrofe ha sido equivalente a un 15% de su PIB. En otras palabras, de un día para otro, Haití ha retrocedido económicamente lo que había avanzado en más de una década. Este hecho ha puesto aún más tensión a una sociedad ya bastante castigada.

La comunidad internacional, ante la crisis humanitaria sufrida en el país, ha corrido atropelladamente en socorro de los habitantes. Durante las primeras semanas ha habido poca coordinación entre los donantes (ONGs e instituciones internacionales) y el gobierno. De hecho, el propio presidente René Préal se quejaba de que algunas ONG buscaban más la "foto" que no la oportunidad para cooperar. Lo mismo podría decirse de muchos gobiernos. Sin embargo, parece que esta situación está mejorando y ya se empiezan a hacer propuestas para el futuro de Haití. Ahora bien, antes de mirar hacia el futuro, hace falta mirar el pasado.

Durante el siglo XX en Haití han imperado los regímenes totalitarios, muy a menudo vinculados a la clase acomodada del país, y con muy pocos miramientos para las amplias capas de la ciudadanía. De hecho, no fue hasta 1990 que se hicieron las primeras elecciones libres después de varios intentos fallidos. El presidente elegido, Jean-Bertrand Aristide, sin embargo, duró pocos meses en el poder, fue derrocado con el apoyo de la élite haitiana porque, entre otras razones, intentó subir el salario mínimo a los trabajadores.

Cuatro años pasaron hasta que Aristide volviera al poder, en 1994, con el apoyo militar de Estados Unidos. Se desmanteló el ejército, protagonista de los frecuentes golpes de estado, y se firmó, bajo presión internacional, un acuerdo para liberalizar la economía del país. Este acuerdo lo firmaron Haití, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y tres países donantes: EE.UU., Canadá y Francia.

El acuerdo llevó Haití a privatizar parcialmente dos compañías estatales (de las nueve que se habían propuesto) bajo una fuerte oposición pública. Se liberalizaron sectores tan básicos para la economía del país como la agricultura. Este hecho dio pie a la importación de productos agrícolas extranjeros norteamericanos subvencionados, a unos precios más bajos. Esto hundió más en la pobreza la amplia mayoría de la población que vivía del campo.

Además, el programa se basó en mayores ayudas al sector del ensamblaje (y muy especialmente a las famosas maquilas). Un sector que sólo daba empleo a 60.000 personas mientras se despreciaba las 2 / 3 partes de la población ocupada en el sector primario. Las miserables condiciones de la agricultura y las ayudas al sector de la exportación hicieron desplazar una gran cantidad de haitianos de las zonas rurales a las urbanas, obligándoles a apilarse en unas ciudades que no podían soportar tanta gente.

Finalmente, Haití se vio forzado por los países donantes a mantener el salario mínimo de 1,9 \$ / día, un salario tan indigno como las condiciones sanitarias de los suburbios de Port-au-Prince. Y además, para acabarlo de rematar, el FMI pidió que se redujera el número de funcionarios, atacando uno de los pilares del desarrollo de una sociedad a largo plazo como son la sanidad y la educación.

Ahora que gobiernos, instituciones internacionales y donantes particulares están pensando en el camino de la recuperación de Haití, conviene no olvidar la historia que nos deja el pasado.

Haití fue la primera colonia latinoamericana en independizarse, pero no ha aprovechado este tiempo para desarrollarse. La clase política gobernante, más preocupada por sus propios intereses, ha abandonado la ciudadanía e incluso la ha reprimido y atemorizado cuando ha sido necesario. Las diferentes intervenciones internacionales tampoco han ayudado al país en general.

La democracia no ha arraigado en Haití y una de las principales razones es que la democracia en Haití no ha ido ligada a los derechos humanos. Y la democracia y el desarrollo, sin derechos humanos, pierden todo su sentido. Esta es una lección que deberá tenerse muy en cuenta si se quiere que Haití camine hacia la estabilidad, la prosperidad y la paz.

Una mala estrategia en Afganistán

Escrito por Marina Perejuan

Jueves, 07 de Enero de 2010

Publicado en Directa

Afganistán es uno de esos conflictos que todavía dura y que parecen irresoluble. Un conflicto no de baja intensidad, ni mucho menos, ahora que con el despliegue de efectivos adicionales aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 17 de febrero hará posible una escalada mayor de violencia.

El Ministerio Español de Asuntos Exteriores, por su parte, continúa valorando como el gobierno español puede apoyar la estrategia de ofensiva militar que está impulsando Barack Obama. Influencia y liderazgo se ve patente con las primeras conversaciones que ha tenido el ejército de EE. UU con la población del valle insurgente de Arghandab. En ellas se menciona el tema de seguridad, la explosión de minas por todo el territorio; que la ayuda de la OTAN no es aceptada por los talibanes, el por qué de las detenciones, la relación con Pakistán ...

La construcción de paz es incompatible con la actitud patológica de pensar que el culpable es siempre el otro y que es la otra parte quien ha de iniciar propuestas de cambio y de aproximación. La iniciativa debe ser bidireccional, tener capacidades propias y voluntad.

Otro factor imprescindible a la hora de llevar y continuar con el proceso de negociación, es aprovechar los cambios estructurales del entorno del conflicto, ya sean políticos, económicos o sociales. Construir la paz exige un planteamiento global del conflicto que permita concebir el panorama global para poder pasar a la actividad y acción concretas transformando el conflicto de forma constructiva. La reconciliación entre las partes, es imprescindible para ayudar a crear condiciones favorables para un cambio sostenible y proactivo.

La única alternativa a la intervención armada es la defensa noviolenta, detener el avance militar y evitar una ocupación armada. Medios como la desobediencia, la nocooperación, el boicot, la huelga general podrían ayudar a transformar una guerra de agresión en una lucha política. Pero, ¿y qué pasa con las responsabilidades democráticas? ¿Qué pasa con los ciudadanos de un estado implicado en una guerra de agresión?

La reparación es un deber para con las víctimas de una guerra de agresión pero cuando no es posible contar con un código moral de conductas según el ius in bello (el derecho en la guerra) y el ius ad bellum (el derecho a la guerra) y cuando el asesinato de civiles y la coerción con la que se ha de convivir es día a día, esto dificulta la defensa de la noviolencia.

La raíz real del conflicto es la negación de los elementos necesarios para el desarrollo de cualquier individuo o sociedad: seguridad, identidad propia, reconocimiento social de la identidad, y participación efectiva en el proceso de conseguir las anteriores. No se puede negociar con la privación de necesidades. En el caso de Afganistán se necesitan estructuras descentralizadas para satisfacer mejor las necesidades de identidad y políticas de los grupos, y promover así la participación local y la confianza.

La posibilidad, pues, que la OTAN no logre tomar el control de Marjah, feudo talibán del sur del país, a pesar de todo y alargar los combates e incrementar la militarización selectiva, podría hacernos pensar sobre qué es lo que supondría que la misión en Afganistán fracasara?

En una zona donde los intereses geoestratégicos de China y Rusia, y también Irán, van en ascenso supondría que la posición de poder internacional de Estados Unidos se debilite; afectaría gravemente a la imagen y "eficiencia" de la OTAN como instrumento de intervención militar; erosionaría más las relaciones transatlánticas y afectaría a la desestabilización de su país vecino, Pakistán.

El sueño que una guerra pueda acabar con otra guerra, no existe, y desgraciadamente para algunos, aunque es una opción. Algunas de las alternativas noviolentas que se pueden emplear pueden ser dejar de fortalecer a los señores de la guerra, crear nuevas sinergias de confianza, crear acuerdos de paz, y que los mediadores no tengan intereses económicos, militares y políticos, como el caso de EEUU y sus aliados; la operación Libertad duradera promovida por los militares de EEUU y la OTAN ha cometido crímenes de guerra y por eso deberían retirarse del país.

¿Quién amenaza a quien en Sudamérica?

Escrito por Gabriela Serra

Miércoles, 02 de Diciembre de 2009

La prensa "políticamente correcta" nos deleita periódicamente con sus objetivos valoraciones sobre las neurosis persecutorias que, al parecer, sufren algunos líderes sudamericanos. Y cuando digo líderes me refiero a legítimos presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, ... a quien-a pesar de sus manifiestas diferencias-la prensa bienpensante se empeña en ponerlos en el mismo saco del delirio populista.

Y si bien es cierto que las recientes proclamas belicistas del presidente Chávez hacen un menguado servicio a los que apostamos por los nuevos procesos democráticos que se viven en Sudamérica, no lo es menos que la razón le asiste cuando afirma sentir que, desde "el imperio norteamericano", se le amenaza. Veamos.

El Acuerdo entre los gobierno de Colombia y Estados Unidos para ampliar las bases estadounidenses en suelo colombiano respondía, según sus firmantes, a la necesidad de fortalecer los efectivos conjuntos de la lucha contra el narcotráfico lacra que, como es sabido, se cobra muchas vidas humanas-que es lo más importante-, financia guerrillas, crea reinos de taifas, aumenta la violencia urbana y rural, perjudica la salud de los que ingieren droga, corrompe guardianes del orden e impone la impunidad a sangre y fuego.

No sigo, aunque la lista podría ser mucho más larga. Este acuerdo ha provocado altas dosis de malestar y oposición por parte de los gobiernos del área. Ellos denuncian la pérdida de soberanía que significará aumentar la presencia estadounidense en la zona. Rafael Correa, ya durante su campaña electoral, prometió el desmantelamiento de la base estadounidense de Manta en la costa ecuatoriana del Pacífico en base a recuperar el legítimo control sobre la totalidad del territorio nacional. Y así lo hizo.

Curiosamente después vendría la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano persiguiendo guerrilleros de las FACR adentrados en este y la denuncia sobre la supuesta relación entre dicha guerrilla y el Presidente Correa.

Evito toda explicación o referencia a las diversas acusaciones, amenazas desautorizaciones hacia Hugo Chávez y también a las realizadas por él hacia el presidente Uribe y hacia los Estados Unidos para que francamente ya tenemos suficiente. Ahora bien, quien lea se preguntará a qué viene todo este revuelo, pues aquí va.

Resulta que en fecha mayo de 2009, el Departamento de la fuerza Armada de los Estados Unidos presentó al Congreso estadounidense la propuesta de un programa de construcción militar para su aprobación en el año fiscal del 2010. Se pedía autorización para utilizar \$ 46 millones en la construcción de la base aérea Palanquero en Colombia. Objetivo: mejorar la Estrategia Global de la Política de Defensa de EEUU, garantizando con la base en Palanquero la posibilidad de realizar operaciones en el espectro completo de toda América del Sur incluyendo, como no, misiones contra el narcotráfico.

Así, desde esta base, la Fuerza Armada estadounidense tiene garantizado el acceso a todo el continente, "con la excepción de la región de Cabo de Hornos", si el combustible está disponible, sin tener que proveerse se.

Y porque, en la época Obama se toman estas ingerents decisiones? Fácil, porque más allá de sellar un profundo compromiso con Colombia-su fiel socio regional-, el establecimiento de esta localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) (eufemístico apodo para una base militar) dará una oportunidad única para las operaciones en "una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenazas constante por las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales".

Es más, si el Congreso no financia estos recursos requeridos, "el Comando Sur estaría limitado a las otras cuatro Municipios de Cooperación en Seguridad, que están restringidas y sólo pueden dar apoyo a las misiones aéreas contra el narcotráfico, y dos localidades que, aunque que no están restringidas, están demasiado lejos para acomodarse a los requisitos de las misiones en el Área de responsabilidad del Comando Sur ".

Los 46 millones de dólares ya han sido aprobados por el Congreso. Pero que no se preocupen los legítimos presidentes sudamericanos: Obama ya es Premio Nobel de la Paz.

Los párrafos entre comillas forman parte del Documento del Departamento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos presentado al Congreso en mayo de 2009. Se puede encontrar en internet!

Ocho años de despropósitos en Afganistán

Escrito por Alejandro Pozo

Martes, 01 de Diciembre de 2009

El pasado 7 de octubre se cumplieron ocho años de la intervención militar en Afganistán. La ciudadanía española suele considerar su participación en aquel país como una misión legal (diferenciándola de forma expresa y efusiva de Irak), de la ONU, de carácter humanitario y como parte de un proceso de paz posbélico. Sin embargo, la intervención militar en Afganistán sería harina de otro costal. Sin duda, la cumpleaños Libertad duradera es una operación contraria al Derecho internacional, dado que no se adapta a las excepciones recogidas en la Carta de la ONU para legalizar la fuerza militar contra un estado.

Es cierto que España abandonó oficialmente esa operación en 2004, y que la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF, en sus siglas en inglés), en la que participa bajo control de la OTAN, está autorizada por el Consejo de Seguridad. Sin embargo, cabe advertir que ambas misiones coexisten en el terreno, colaboran constantemente y comparten información e incursiones; que los soldados de EEUU representan la práctica totalidad de Libertad duradera, pero también cerca de la mitad de ISAF; que en sus debates y discursos los medios, los políticos y los presupuestos militares estadounidenses no diferencian expresamente entre Libertad duradera e ISAF, al menos no en la lógica, en las motivaciones ni en la esencia de la intervención militar.

Y si no, respondan: ¿no dirige el famoso general McChrystal tanto ISAF como Libertad duradera? Si bien ISAF es legal, el conjunto de la intervención militar en Afganistán podría ser considerado como contrario al Derecho internacional. Por otro lado, ISAF no es una misión de la ONU, sino de la OTAN. No hay cascos azules en Afganistán. La diferencia es significativa porque la ONU no opera, al menos en la teoría, bajo la dirección de Washington y según los intereses concretos de la Alianza y/o sus miembros. Además, ISAF no es una operación de mantenimiento de la paz, ni producto de un proceso de paz que ni siquiera se ha intentado. La ex titular de Exteriores de EEUU, Condoleezza Rice, advirtió en febrero de 2008 que "la población [europea] debe comprender que no se trata de una misión de paz" (Público, 06/02/08).

Resulta prudente, por ser quien fue, hacerle caso. Afganistán no es Irak, ninguna guerra suele parecerse a otra. Sin embargo, un repaso a los mitos anteriores y un análisis de las razones de la intervención (que pocos dudan que estén relacionadas no con lo que contiene Afganistán -o quien vive allí-, sino con ser un enorme tablero de juegos en el que numerosos países se disputan poder y privilegios), invitan a concluir que, al menos en su lógica, esencia y maneras, y salvando las distancias, Irak y Afganistán se parecen mucho más de lo que nuestros esforzados políticos, comunicadores y analistas nos sugieren.

En España, los numerosos defensores de la intervención han sentenciado un falso escenario en el que sólo cabrían dos opciones diametralmente opuestas: el desastre actual u olvidarse por completo de Afganistán, y advierten que retirar las tropas supondría una catástrofe mayor, ninguneando una importante cantidad de alternativas no militares disponibles.

Se ha aumentado el contingente en un momento en el que seis de cada diez encuestados en junio de 2009 deseaban retirar los soldados o disminuir su número (sólo un 3,1% optaba por incrementarlo), según el Real Instituto Elcano, y se ha asegurado que, de retirarlos, en Afganistán habría guerra. Disculpen, en Afganistán ya existe una guerra con más muertes que durante la etapa de control talibán. La OTAN es una de las partes enfrentadas y también mata civiles (más de un tercio del total, y se cuentan por millares).

Los combatientes (mucho más numerosos que los talibán) necesitan bases de apoyo comunitario. Si la actividad de la insurgencia ha aumentado, quizá se deba a que aquellos apoyos también lo han hecho. Pero en lugar de preguntarnos porqué (los bombardeos de civiles, las connivencias con los caciques o el ninguneo de la población podrían guardar relación) y replantear la intervención, la respuesta sigue siendo siempre la misma: ¡más tropas! Al menos 93 de cada cien euros destinados por España y el mundo a Afganistán son gasto militar directo.

Sería más pertinente retirar los soldados, pero sin olvidarse de aquel país, y fomentar el pendiente acuerdo de paz; implementar las todavía ausentes fuertes medidas diplomáticas con los países vecinos para garantizar su colaboración y evitar apoyos a las facciones armadas; promover la participación visible y destacada de los legítimos representantes civiles en los que confía la población (y a través de los cuales se canalizaría la ayuda); dejar de apadrinar a señores de la guerra y de los negocios; respetar las maneras locales, su cosmovisión, sus prioridades (no tan distintas de las nuestras); realizar investigaciones sobre los crímenes de guerra cometidos por todas las partes (hoy como antes);

iniciar un procedimiento creíble y sincero de reparación a las víctimas y un proceso ambicioso y real de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes (no aquel camelo que hace años sólo desarmó a los más débiles); recoger la escandalosa cantidad de armas transferida a Afganistán (primer importador de EEUU y, por tanto, mundial, según The New York Times); y dificultar las conexiones políticas y financieras internacionales que facilitan toda guerra. Ocho años después, continúan existiendo alternativas a las maneras militaristas de la OTAN para comprometerse con Afganistán, y éstas pasan necesariamente por su maltratada población.

Somalia, un estado a la deriva

Escrito por Miquel González

Lunes, 30 de Noviembre de 2009

Somalia es un país que sufre una gran crisis social, económica y política. Desde 1991 no ha habido en Somalia un gobierno central efectivo y las continuas hostilidades entre clanes y otros grupos han destruido la economía del país y sus infraestructuras.

Somalia es uno de los cinco países más pobres del mundo, con 9 millones de habitantes de religión musulmana suní, 1,3 millones de desplazados internos y una alta dependencia de la ayuda humanitaria internacional.

En pocas palabras, la situación actual del país es desastrosa. Y como el Estado es incapaz de poder garantizar la seguridad en su territorio, la piratería ha crecido como una mala hierba en un jardín sin cuidar. Esta es la causa que se suele apuntar para explicar la explosión de la piratería en la costa somalí y, aunque esto sea cierto, no es ni mucho menos una explicación de toda la película.

La piratería en las costas de Somalia no es un hecho nuevo. Surgió durante la década de los noventa y lo hizo para hacer frente a la pesca ilegal por parte de pesqueros extranjeros ante la incapacidad del gobierno para controlar sus aguas territoriales. Eran pues, pescadores que hartos de una situación injusta se tomaban la justicia por su mano.

Hay leyes que regulan la pesca en los mares. Para empezar, existe un acuerdo internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece un orden jurídico con el propósito de preservar los ecosistemas marinos, los recursos pesqueros y el fomento de los usos pacíficos de los mismos. Por debajo de esta ley se encuentran las Organizaciones Regionales de Pesca, la tarea de las cuales es promover normas para luchar contra la pesca ilegal y las prácticas pesqueras destructivas. Y en tercer y último lugar están los estados, que regulan y controlan sus aguas territoriales.

Somalia no tiene acuerdos bilaterales de pesca con ningún país y eso quiere decir que, según el derecho internacional, es ilegal que un tercer país pesque en aguas somalíes. Este hecho, sin embargo, no ha frenado países como España, Corea del Sur o Japón, que llevan pescando en aguas territoriales somalíes, ricas en atunes, sardinas, caballa y especies tan reconocidas como la langosta o el tiburón, desde que estalló la guerra civil en el país, hace ya dos décadas.

La ONU, en un informe, ha valorado la expropiación de recursos pesqueros en aguas somalíes por parte de pesqueros extranjeros en 300 millones de dólares anuales. Y eso sin contar con los somalíes que han muerto y los que tienen problemas respiratorios e infecciones en la piel causadas por el vertido de productos tóxicos y radiactivos para barcos en aguas de este país. En otra publicación, la ONU ha estimado que a una compañía europea le cuesta cien veces menos verter sus residuos en aguas de Somalia que hacerlo responsablemente en Europa.

Además, los pesqueros llevan habitualmente banderas que son diferentes a la de sus estados de origen. Banderas como las Belice, Bahrain o Seychelles son utilizadas como banderas de conveniencia para evitar el control y la supervisión, tal y como se daría en sus países de origen. Así pues, pesqueros, petroleros y buques mercantes pueden navegar por las aguas de todo el mundo, a menudo implicando un gran peligro para el medio ambiente marino y haciendo lo que les place en la inmensidad de los océanos. Las costas desprovistas de seguridad de Somalia, en este sentido, han supuesto una oportunidad de oro para que muchos buques, especialmente pesqueros, hicieran su agosto.

Esta situación, precisamente, ha permitido una rápida expansión de los piratas somalíes. Al principio, los buques secuestrados pagaban con celeridad los rescates para evitar que su caso se hiciera público y fuera evidente que no tenían licencias o que habían cometido alguna otra ilegalidad. Esto hizo posible que los piratas somalíes ingresaran dinero desde el principio, el cual utilizaron para profesionalizarse: hoy están organizados, utilizan material de última tecnología y gestionan sus rescates millonarios a través de bufetes de abogados en Londres. Y el negocio parece tener futuro: tienen secuestrados trece buques con un total de doscientos treinta rehenes.

Respuesta internacional

La crisis de Somalia era evidente ya hace veinte años, pero los esfuerzos de la comunidad internacional se han concentrado en los últimos meses, después de que la ONU dictara una resolución instando a los estados, con la colaboración del gobierno somalí, a luchar con "los medios que sean necesarios" contra la piratería, ya que Somalia no puede garantizar la seguridad en sus aguas.

El golfo de Adén, al norte de Somalia, por donde pasa un gran flujo de buques mercantes y petroleros, las costas de Somalia y el océano Índico hoy son patrulladas por más de una treintena de buques de guerra procedentes en la gran mayoría de la OTAN, EEUU y la Unión Europea. El objetivo es acabar con la piratería somalí ya que ésta perjudica sus intereses nacionales, como es el abastecimiento de petróleo, y comerciales; son sus empresas las que transportan mercancías, aunque a menudo ondean otra bandera.

Somalia pone claramente sobre la mesa un hecho muy preocupante: la comunidad internacional está dominada por las principales potencias económicas, la ley sólo es válida cuando sirve para proteger sus intereses. Esta hipocresía ha llevado a la comunidad internacional a dejar Somalia a la deriva durante veinte años, tiempo durante el cual ha sido saqueada y contaminada por los mismos buques que ahora se intenta proteger de los piratas somalíes. Cabe preguntarse, pues, ¿quiénes son los verdaderos piratas de esta historia?

¿Quién amenaza a quien en Sudamérica?

Escrito por M. Gabriela Serra

Jueves, 12 de Noviembre de 2009

Publicado en Directa

La prensa "políticamente correcta" nos deleita periódicamente con sus objetivos valoraciones sobre las neurosis persecutorias que, al parecer, sufren algunos líderes sudamericanos. Y cuando digo líderes me refiero a legítimos presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, ... a quien-a pesar de sus manifiestas diferencias-la prensa bienpensante se empeña en ponerlos en el mismo saco del delirio populista.

Y si bien es cierto que las recientes proclamas belicistas del presidente Chávez hacen un menguado servicio a los que apostamos por los nuevos procesos democráticos que se viven en Sudamérica, no lo es menos que la razón le asiste cuando afirma sentir que, desde "el imperio norteamericano", se le amenaza. Veamos.

El Acuerdo entre los gobierno de Colombia y Estados Unidos para ampliar las bases estadounidenses en suelo colombiano respondía, según sus firmantes, a la necesidad de fortalecer los efectivos conjuntos de la lucha contra el narcotráfico lacra que, como es sabido, se cobra muchas vidas humanas-que es lo más importante-, financia guerrillas, crea reinos de taifas, aumenta la violencia urbana y rural, perjudica la salud de los que ingieren droga, corrompe guardianes del orden e impone la impunidad a sangre y fuego.

No sigo, aunque la lista podría ser mucho más larga. Este acuerdo ha provocado altas dosis de malestar y oposición por parte de los gobiernos del área. Ellos denuncian la pérdida de soberanía que significará aumentar la presencia estadounidense en la zona. Rafael Correa, ya durante su campaña electoral, prometió el desmantelamiento de la base estadounidense de Manta en la costa ecuatoriana del Pacífico en base a recuperar el legítimo control sobre la totalidad del territorio nacional. Y así lo hizo.

Curiosamente después vendría la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano persiguiendo guerrilleros de las FACR adentrados en este y la denuncia sobre la supuesta relación entre dicha guerrilla y el Presidente Correa. Evito toda explicación o referencia a las diversas acusaciones, amenazas desautorizaciones hacia Hugo Chávez y también a las realizadas por él hacia el presidente Uribe y hacia los Estados Unidos para que francamente ya tenemos suficiente. Ahora bien, quien lea se preguntará a qué viene todo este revuelo, pues aquí va.

Resulta que en fecha mayo de 2009, el Departamento de la fuerza Armada de los Estados Unidos presentó al Congreso estadounidense la propuesta de un programa de construcción militar para su aprobación en el año fiscal del 2010. Se pedía autorización para utilizar \$ 46 millones en la construcción de la base aérea Palanquero en Colombia. Objetivo: mejorar la Estrategia Global de la Política de Defensa de EEUU, garantizando con la base en Palanquero la posibilidad de realizar operaciones en el espectro completo de toda América del Sur incluyendo, como no, misiones contra el narcotráfico.

Así, desde esta base, la Fuerza Armada estadounidense tiene garantizado el acceso a todo el continente, "con la excepción de la región de Cabo de Hornos", si el combustible está disponible, sin tener que proveerse se. Y porque, en la época Obama se toman estas ingerènts decisiones? Fácil, porque más allá de sellar un profundo compromiso con Colombia-su fiel socio regional-, el establecimiento de esta localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) (eufemístico apodo para una base militar) dará una oportunidad única para las operaciones en "una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenazas constante por las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales".

Es más, si el Congreso no financia estos recursos requeridos, "el Comando Sur estaría limitado a las otras cuatro Municipios de Cooperación en Seguridad, que están restringidas y sólo pueden dar apoyo a las misiones aéreas contra el narcotráfico, y dos localidades que, aunque que no están restringidas, están demasiado lejos para acomodarse a los requisitos de las misiones en el Área de responsabilidad del Comando Sur ".

Los 46 millones de dólares ya han sido aprobados por el Congreso. Pero que no se preocupen los legítimos presidentes sudamericanos: Obama ya es Premio Nobel de la Paz.

Las mentiras del Estado de Israel

Escrito por Pere Ortega

Jueves, 29 de Octubre de 2009

Publicado en Directa

No se entiende como nuestro Gobierno catalán nos engañe invitando a falsas pacifistas israelíes como Noa en la Diada del 11-S cuando había justificado los ataques del ejército israelí en Gaza el pasado enero. Como tampoco se entiende, que los Gobiernos catalán y español se nieguen a aplicar sanciones económicas o poner fin a la venta de armas a Israel.

Israel ha forjado su historia como Estado a través de un montón de mentiras. La historia oficial del estado de Israel está falseada desde su nacimiento en 1948. Pocos recuerdan que Israel nace después de una limpieza étnica: la expulsión de 800.000 palestinos de sus tierras, con 530 pueblos arrasados y miles de personas ejecutadas. Pero no hubo suficiente, ya que después Israel ha ido conquistando por la fuerza de las armas Jerusalén y nuevos territorios palestinos. Es mentira que los israelíes convirtieran un desierto en un jardín, Palestina siempre ha sido una tierra fértil rica en regadíos y cultivos.

Y cuando se habla de semitas sólo se piensa en el pueblo judío, cuando los judíos residentes actuales todos son descendientes en un 98% de la diáspora, y en cambio no se considera a los palestinos que siempre han residido en aquellas tierras como los auténticos semitas. Así, el antisemitismo se asocia sólo con los judíos, pero nunca por practicado contra los palestinos.

Estas mentiras han sido posibles construirlas por la complicidad europea y occidental ante las barbaridades cometidas contra el pueblo judío a lo largo de siglos. Es la mala conciencia de los crímenes cometidos contra el pueblo judío, cuando los hicimos condenó a vivir en guetos, después la persecución y expulsión de muchos países, hasta llegar a la hecatombe y holocausto de más de seis millones de judíos perpetrada por el nazismo durante la II Guerra Mundial.

Ahora observamos los territorios palestinos. Hoy Cisjordania está ocupada por el ejército, dividida por un muro que serpentea el territorio para separar a los palestinos de las colonias ilegales israelíes; lleno de controles militares que impiden la libre circulación de personas y el desarrollo; y donde 500.000 colonos israelíes ocupan las mejores tierras, y donde todavía los palestinos siguen siendo expulsados de sus casas.

Después está Gaza, una franja de tierra desértica convertida en un enorme campo de refugiados palestinos de las guerras anteriores, donde malviven un millón y medio de personas, privadas de luz, medicamentos y comida por parte del ejército de Israel, que mantiene el territorio bloqueado como si fuera un enorme campo de concentración.

Entonces no se entiende como nuestro Gobierno catalán nos engañe invitando a falsas pacifistas israelíes como Noa en la Diada del 11-S cuando había justificado los ataques del ejército israelí en Gaza el pasado enero. Como tampoco se entiende, que los Gobiernos catalán y español se nieguen a aplicar sanciones económicas o poner fin a la venta de armas a Israel.

¿Quiénes son los piratas en Somalia?

Escrito por Jordi Calvo

Jueves, 11 de Junio de 2009

Tras el secuestro de la tripulación del atunero congelador Playa de Bakio, con base en Bermeo (Vizcaya), perteneciente a Pesquerías Vasco Santanderinas (PEVASA) y de que otro barco atunero vasco, el Playa de Aritzatxu, logró hace un tiempo escapar de un grupo que intentó secuestrarlo en alta mar.

Carmen Chacón decidió enviar al ejército español al cuerno de África, para proteger la flota atunera española que pesca en aguas del Océano Índico frente a la creciente oleada de ataques piratas. En la actualidad, unos 40 buques pesqueros europeos faenan en estas aguas, de los que la mayoría son españoles y el resto franceses.

Entre la flota española se encuentran los barcos mencionados, y probablemente otros de los armadores miembros de las asociaciones gremiales del sector ANABAC y OPAGAC, que son quienes han reclamado la protección militar. Otra de las empresas que puede pescar atunes somalíes puede ser la conocida empresa Calvo, que publicita en su web que tiene dos de sus barcos (Montealegre y Montecruz) faenando en las aguas del Índico, incluyendo las que corresponden a Somalia. Por todo ello, España ha enviado 395 militares, una fragata, un petrolero y un avión de patrulla marítima.

La misión se enmarca en la operación Atalanta, impulsada por la Unión Europea, para combatir la piratería en aguas de Somalia. Sin embargo la opción militar no parece la mejor opción para acabar con la piratería en Somalia, ya que no parece ser cosa de un grupo de parias olvidados por el sistema. De hecho, la Cadena Ser accedió a un informe de la inteligencia militar europea en el que se advierte que los ataques no son improvisados ni carecen de preparación. Porque disponen de una estructura superior de informadores muy bien situados, que desde Londres les indican los barcos que se pueden secuestrar, cuáles son sus rutas, sus cargas, sus nombres y sus nacionalidades.

Según la documentación militar, esta información se evidenció en el ataque al atunero vasco Felipe Ruano.

Somalia es un país con un Estado totalmente descompuesto en manos de señores de la guerra, que no ve la luz al final del túnel, donde la esperanza de vida es de tan solo 47 años. Su economía se sustenta en el sector primario y de subsistencia, especialmente la ganadería y la pesca que, según testimonios locales, también se ve afectada por la pesca en alta mar. Los asaltos a los pesqueros es una consecuencia más de esta situación contra la que no se puede luchar con el poder militar, porque la paz y la seguridad solo pueden garantizarse con el cese de la violencia y la creación de un clima idóneo de estabilidad y confianza para salir de la pobreza, y porque los verdaderos responsables de esta piratería parecen encontrarse más allá de las fronteras somalíes.

En definitiva, es más que cuestionable, por muy diversas razones, que el ejército español se dedique a asegurar que podamos seguir comiendo atún en lata. Por un lado no tenemos por qué ser todos los contribuyentes quienes paguemos las aventuras comerciales de empresas españolas en lugares donde no se dan las condiciones para hacerlo. ¿Cuánto nos costaría una lata de atún del cuerno de África si le sumáramos el coste de la escolta militar?

Por otro lado, esta operación parece otra de las muchas maneras que encuentra el gobierno para legitimar el enorme gasto militar español, que en tiempos de crisis puede verse puesto en cuestión por la ciudadanía que se queda sin trabajo ni prestaciones sociales. Finalmente, el Estado español no ha tenido nunca ningún interés en mejorar la situación de la población somalí, ya que, hasta 2006, la última vez que se conoce que España “ayudó” a Somalia fue en 1987 y 1989, cuando existían fuertes tensiones en el país que desembocaron en un conflicto armado y el colapso del Estado, proporcionando 215 camiones militares y un número indeterminado pero significativo de otros vehículos militares por valor de 2.420,3 millones de las antiguas pesetas como Ayuda Oficial al Desarrollo -a través de Fondos de Ayuda al Desarrollo-, generadores de deuda externa. Sin lugar a dudas, sería mejor dedicar el dinero que nos gastamos en desplazar a nuestros militares al Cuerno de África, a la población somalí, pero no a los secuestradores de allí o de Londres, sino a quienes sufren las consecuencias de la no existencia de Estado, de los señores de la guerra, y del abandono de la comunidad internacional.

La violencia de los estados e Israel

Escrito por Pere Ortega

Miércoles, 10 de Junio de 2009

Los estados son los principales agentes de la violencia en el mundo. Sobre esta cuestión se aborda la violencia del estado de Israel contra los palestinos.

Los estados son los principales agentes de la violencia en el mundo. Algunos pueden añadir que esta violencia es legítima, porque está amparada en el consenso general otorgado por la población en un contrato social llamado Constitución. Y ciertamente es así. Pero, se mire como se mire, la realidad es esta, y algo podemos decir los que rechazamos la violencia venga de donde venga, y objetar, apelando a la conciencia, sí la violencia se ejerce contra inocentes o sobrepasa los límites de los derechos humanos, por ejemplo con leyes abusivas que no respetan a las minorías, a las mujeres, los inmigrantes ..., o cuando toma proporciones tan terribles como las guerras. Pero seguro que alguien añadirá aquello de: "tenemos derecho a defendernos". Claro, deberíamos contestar, pero bueno habrá de algunos árboles que juzgue si la agresión es injusta o no y sea él quien arbitre las medidas para impedir la injusticia y si hay que utilizar la fuerza. Pero sobre la violencia todavía hay más cosas.

No debemos olvidar que la violencia más abundante la ejercen los poderosos (por eso lo son) de muchas maneras. Así los países más ricos practican el expolio de los recursos de los países empobrecidos, o dicho de manera más suave, imponen precios injustos a las materias primas, o imponen barreras a su comercio, lo que se llama comercio injusto, o preparan las guerras mediante ventas de armas, o enormes gastos militares para tener ejércitos que después practican las guerras todo el mundo.

Ahora hablamos de la violencia de un estado concreto, Israel. El pueblo judío a partir del momento en que alcanzó un estado propio, dio el salto de pasar de ser un pueblo perseguido por otros Estados a convertirse en un estado perseguidor de otros pueblos. Es curioso que esta ha sido una cuestión bastante generalizada en la historia de la humanidad, ver nacer nuevos estados que luego se dedican a practicar la violencia contra las minorías.

Es una cuestión a profundizar y que da bastante a pensar sobre la naturaleza de los estados. Pero ahora no tenemos espacio y volvemos a Israel. Este pueblo, el judío, pesa mucho en la mala conciencia de la ciudadanía occidental, por la persecución que practicó contra él. Y ahora, ante las barbaridades que comete sobre el pueblo palestino, calla y mira hacia otro lado. Es más, aunque sus crímenes rayen la barbarie, tienen múltiples defensores que justifican sus crímenes por la persecución a que estuvieron sometidos.

Así se permite a Israel, ocupar territorios de otros países, expulsar a sus habitantes, derribar sus casas, apropiarse de tierras, acuíferos, construir un muro para separar los ocupantes de los ocupados, practicar asesinatos selectivos, torturar, usar armas químicas , y en el caso de la franja de Gaza, este enorme Ghetto donde vive un millón y medio de personas, rodeado en todo su perímetro por tropas israelíes, cerrados los pasos fronterizos, y sus habitantes privados de energía, medicamentos y alimentos .

Todo esto lo hace un estado que tiene el índice de violencia armada (militarismo) más alto del mundo: 2,5% de soldados por habitantes; 8% del PIB para gasto militar; 3 años de servicio militar obligatorio para los chicos; armas nucleares, un complejo político / militar / industrial que domina el país, a modo de ejemplo recordar que los presidentes del gobierno israelí siempre son ex militares.

Y que hacen los estados de la comunidad internacional occidental para poner remedio a esta situación? No es que miren hacia otro lado, sino que ayudan a Israel de varias maneras: con convenios comerciales preferenciales (en el caso de la Unión Europea); en investigación nuclear; en ayuda militar y ventas de armas. Es decir, practicar una doble moral. Por un lado lamentarse del sufrimiento palestino, por otra ayudar a Israel a continuar con sus crímenes.

Si la Comunidad Internacional quiere poner remedio al terrorismo islamista, en lugar de hacer guerras inútiles que solo causan más sufrimiento para otros lugares del mundo (Irak y Afganistán). Lo que deberían hacer es poner remedio al sufrimiento de la población palestina que es, sin duda, la causa principal del terrorismo internacional.

Debido a la frustración y afán de revancha que contamina los sentimientos de todo el mundo árabe y musulmán. Haciendo cumplir a Israel las resoluciones de la ONU sobre los territorios ocupados de Palestina y sancionarlo por las violaciones de derechos humanos que está cometiendo contra los palestinos. Esta sería una buena manera de rebajar la colosal violencia de los estados en el mundo.

La OTAN y España, de Kosovo a Afganistán

Escrito por Jordi Calvo

Lunes, 06 de Abril de 2009

La ministra Chacón ha ocupado, otra vez –dudo que inconscientemente– buena parte de los titulares, con su sorpresivo anuncio de retirada de las tropas españolas de Kosovo. (Jordi Calvo, Diario de un altermundista, publico.es, 1 de abril de 2009)

Las críticas no han ido dirigidas tanto al hecho de retirarse en sí mismo, sino a las formas en cómo se ha llevado a cabo. La descoordinación ha sido tal, que parece que esta decisión fue tomada por Zapatero y Chacón, sin informar ni siquiera al ministro Moratinos, al representante de España en la OTAN y al embajador español en EEUU.

Independientemente de que el funcionamiento de la maquinaria diplomática española no parece el más deseado, de tal actuación podemos extraer tres lecturas.

Una de ellas se refiere a la relación de España con la OTAN. Cuando parece que estamos presos a seguir a pies juntillas las decisiones tomadas en su seno, de la cual somos miembros plenamente, resulta que nuestros gobernantes tienen margen de maniobra para desmarcarse de la OTAN, sin que ocurra ninguna catástrofe. Aunque deberíamos recordar que en el referéndum de 1986 en el que ganó el “sí” (excepto en Cataluña, Euskadi y Canarias) no se votó exactamente la incorporación plena de España en la OTAN, sino que el sí de la ciudadanía fue condicionado a que la incorporación no sería a la estructura militar integrada, de la cual ahora España forma parte.

Por otra parte, fue ilegal que la OTAN se saltara a la torera su mandato inicial de actuar en el Atlántico Norte, para defender a sus miembros de posibles agresiones, con el nuevo concepto estratégico firmado en 1999, que amplía su ámbito de actuación a todo el planeta y convierte a la OTAN en un organismo que puede realizar operaciones ofensivas. El gobierno español debió haber contado en este caso con la autorización del Parlamento, tal y como exige el artículo 94.1.b) de la Constitución, referido a los tratados internacionales de carácter militar.

Quizá, el hecho de que los gobernantes de este país se hayan saltado tradicionalmente sus obligaciones democráticas en cuanto al establecimiento de sus relaciones con la OTAN, –lo que pone en duda la legitimidad de nuestros compromisos con el mencionado organismo militar–, haya animado a la Ministra de Defensa a darse un baño de soberanía y decidir unilateralmente el retorno de los soldados españoles de Kosovo.

Una segunda lectura es que las misiones de España en el exterior, calificadas tantas veces por la ministra como humanitarias y de mantenimiento de la paz, dando pie a lo que se ha llamado, con cierta sorna, el oenegército, parece que están dando un giro radical, y una misión como la de Kosovo, de estabilización de un país en situación posterior al conflicto y que parece necesitar del apoyo internacional –preferiblemente no militarizado– para establecer las bases de un funcionamiento democrático consolidado, no es una prioridad para el gobierno español por razones de política interna. Porque pueden pensar que tener un destacamento español en un lugar que se ha autoproclamado independiente, puede alentar a que Euskadi o Cataluña sigan los mismos pasos.

Finalmente, la tercera lectura de la retirada precipitada de las tropas españolas de Kosovo puede tener relación con la próxima celebración del 60º aniversario de la OTAN en Estrasburgo, en tan sólo dos semanas. En la que con toda probabilidad se hablará sobre la presencia de la OTAN en Afganistán, y a la que Zapatero quiere acudir con una buena oferta bajo el brazo y así ganarse la confianza de Obama.

Además, si tenemos en cuenta que la opinión pública española sobre la presencia militar española en Afganistán es de cerca de un 60% a favor de la retirada o disminución, de un 30% a favor del mantenimiento de las tropas actuales, y sólo de un 5% por el aumento, podemos pensar que se trata de una estrategia del gobierno para que la opinión pública se muestre más propensa al aumento de tropas en Afganistán.

Así, el hecho de que Obama se haya mostrado molesto por la reducción unilateral del contingente español en Kosovo, puede haber ayudado a crear el marco propicio para que, con el objetivo de cultivar una buena relación con EEUU y con nuestros aliados de la OTAN, les compensemos con un aumento de nuestra presencia en Afganistán donde, el ejército español, tal y como muestran los datos, está en guerra –el 95% del gasto español en Afganistán es para operaciones militares–, al contrario que en Kosovo.

En definitiva, la retirada de España de Kosovo, no parece haber sido tan precipitada como nos hacen creer, porque forma parte de la estrategia global del gobierno español de aumentar su presencia militar en la escena internacional para reforzar su candidatura a los foros de poder internacionales.

Sin embargo, esta decisión nos sirve para pensar que si no seguimos a la OTAN con los ojos cerrados, no pasa nada, porque las relaciones internacionales, afortunadamente, se basan en algo más que en la participación en guerras como la de Afganistán.

La guerra de Afganistán es una guerra ilegal

Escrito por Eduardo Melero

Viernes, 09 de Enero de 2009

La mayoría de los políticos y de la prensa llevan años diciendo que la guerra de Afganistán es conforme con el derecho internacional. Uno de los mensajes que se dirigen a la opinión pública es que mientras la guerra de Irak era ilegal, la de Afganistán es perfectamente legal. Por el contrario, para la mayoría de los profesores de derecho internacional es una guerra contraria a la Carta de Naciones Unidas.

La guerra de Afganistán plantea cuatro problemas jurídicos básicos: 1) si la operación Libertad Duradera es conforme con el derecho de legítima defensa, 2) si la participación del ejército español en ISAF cumple con los requisitos del derecho español, 3) si la OTAN puede hacerse cargo de la dirección de la ISAF y, 4) qué relación existe entre Libertad Duradera y la ISAF.

El inicio de la operación Libertad Duradera se justificó en el derecho de legítima defensa regulado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. El presupuesto para el ejercicio de la legítima defensa es la existencia de un ataque armado. Aunque se haya entendido que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en sí suponen un ataque armado debido a su magnitud, el problema es si dicho ataque puede imputarse a Afganistán. El Gobierno talibán de Afganistán otorgó apoyo a la organización terrorista Al-Qaeda y permitió que estableciera campos de entrenamiento en su territorio.

Estas actividades de apoyo al terrorismo, aunque suponen la comisión de un ilícito internacional, al vulnerar el principio que prohíbe el uso directo o indirecto de la fuerza armada (art. 2.4 de la Carta de Naciones Unidas), no pueden ser considerados como un ataque armado que permita reaccionar frente a él en legítima defensa.

Pero incluso aunque se considerase que concurre el presupuesto del ataque armado, no se cumplen las condiciones a las que se somete el ejercicio del derecho de legítima defensa. Así, no concurre la inmediatez, ya que la operación Libertad Duradera comenzó casi un mes después de los atentados del 11 de septiembre. La legítima defensa también tiene que ser proporcionada.

La operación Libertad Duradera, que casi ha durado siete años, ha supuesto una guerra total en el territorio de Afganistán en la que se han cometido graves violaciones del derecho humanitario bélico, que deben calificarse como crímenes de guerra. Por ello tampoco se cumple el requisito de proporcionalidad. Finalmente, tampoco se ha tratado de una actividad provisional, en espera de que el Consejo de Seguridad adoptara las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales.

En conclusión, la operación Libertad Duradera debe calificarse como una guerra de agresión que vulnera el derecho internacional y que no puede considerarse cubierta por el ejercicio del derecho de legítima defensa.

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) se crea a partir de los acuerdos de Bonn, de 5 de diciembre de 2001. El 20 de diciembre de 2001, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la Resolución 1386, en la que autorizaba el establecimiento de la ISAF para mantener la seguridad en Kabul y sus alrededores, permitiendo que ISAF utilizara la fuerza armada para cumplir su cometido.

Pero ISAF no es una operación de Naciones Unidas, los soldados que participan en ella no son cascos azules. El régimen jurídico de ISAF se ha establecido en un acuerdo internacional, el Acuerdo técnico militar de 31 de diciembre de 2001, celebrado entre el Reino Unido y el gobierno provisional de Afganistán. Acuerdo que fue aceptado, el 10 de enero de 2002, por todos los Estados participantes en la fuerza internacional incluida España, a través de un «Memorando de Entendimiento».

La firma por España de este Memorando de Entendimiento se realizó infringiendo el artículo 94.1.b) de la Constitución española, que exige autorización previa de las Cortes Generales para que el Estado español pueda celebrar tratados o convenios de carácter militar. Del contenido del Memorando de Entendimiento se deduce claramente que debe considerarse como un tratado internacional de carácter militar. No es un acuerdo político, como ha considerado el Gobierno español. Por tanto, la participación del ejército español en la ISAF carece de base jurídica suficiente.

Eso sin tener en cuenta que el envío de tropas se realizó sin la previa autorización del Congreso de los Diputados y el Senado que exige el artículo 63.3 de la Constitución, en virtud del cual es necesaria autorización previa de las Cortes Generales para declarar la guerra. Aunque ya no se declaran las guerras, en mi opinión, del artículo 63.3 de la Constitución resulta obligatoria la autorización de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado conjuntamente) para que el ejército español pueda participar en un conflicto armado.

En agosto de 2003, la OTAN asume la dirección de la ISAF. A partir de entonces se produce una ampliación del ámbito territorial de la autorización otorgada ISAF a todo el territorio de Afganistán (Resolución 1510 del Consejo de Seguridad, de 13 de octubre de 2003).

La intervención de la OTAN en la guerra de Afganistán va más allá de lo establecido en los artículos 5 y 6 del Tratado del Atlántico Norte: operaciones de legítima defensa en el territorio de América del Norte y Europa. Es una de las operaciones llamadas como fuera de área. Su fundamento se encuentra en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN aprobado en 1999, que amplía el ámbito de actuación de la OTAN a todo el planeta.

El nuevo Concepto Estratégico es un acuerdo político que modifica totalmente el Tratado del Atlántico Norte. Debe considerarse ilegal ya que la firma del nuevo Concepto Estratégico de la OTAN no contó con la previa autorización de las Cortes españolas que exige el artículo 94.1.b) de la Constitución para la modificación de tratados internacionales de carácter militar.

Por último, las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la ISAF han legitimado, en cierta medida, la operación Libertad Duradera. Incluso, a partir de la Resolución 1510, de 13 de octubre de 2003, el Consejo de Seguridad ha alentado explícitamente la cooperación entre ISAF y Libertad Duradera.

Ya he señalado que Libertad Duradera vulnera la Carta de las Naciones Unidas, debe considerarse como una guerra de agresión. Aunque ISAF cuenta con la autorización del Consejo de Seguridad, en la realidad está muy vinculada a la operación Libertad Duradera. En la práctica, ISAF protege la retaguardia de la operación Libertad Duradera. De esta forma las tropas de ISAF se encargan de consolidar el terreno ganado y las tropas de la coalición que integra Libertad Duradera se pueden dedicar a seguir sus operaciones bélicas.

Pero incluso la ISAF ha llevado a cabo acciones ofensivas contra los talibanes o los insurgentes afganos. La importancia de ISAF dentro de la estrategia de la operación Libertad Duradera aparece más clara si se tiene en cuenta la ampliación de la ISAF a todo el territorio de Afganistán y que tras la guerra de Irak la disponibilidad de tropas estadounidenses se ha visto restringida.

El Consejo de Seguridad debe respetar la Carta de las Naciones Unidas. No puede convalidar actos de agresión ilegales como la operación Libertad Duradera, pero tampoco puede autorizar el uso de la fuerza a ISAF para apoyar Libertad Duradera.

En conclusión, Libertad Duradera e ISAF forman parte de la misma estrategia en la guerra de Afganistán. Ambas operaciones vulneran el derecho internacional. La participación española en ISAF no sólo es contraria al derecho internacional sino que también infringe la Constitución española.

La cooperación internacional financiando una paz de monocultivos y militarización en Colombia

Escrito por Laia Bertran Casanellas y Moritz Tenthoff

Miércoles, 07 de Enero de 2009

En el siguiente documento se analiza la cooperación internacional en Colombia y en específico los llamados Laboratorios de Paz como una propuesta que busca asegurar los intereses económicos de países europeos y empresas extranjeras. El actual gobierno de Álvaro Uribe ha podido impulsar con el apoyo de la cooperación internacional en los últimos años a nivel nacional un modelo de producción que beneficia los intereses del mercado global, pero que a la vez se sostiene en el desplazamiento forzado, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la militarización de la vida civil. Bogotá D.C. noviembre 2008.

1) La tierra colombiana

Según el informe del PNUD de 2007, 17 millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y 6 millones están en la indigencia. Colombia se encuentra dentro de los mayores índices de desigualdad del continente latinoamericano, sin embargo, tiene un crecimiento económico de 7% anual, uno de los más altos del continente latinoamericano.

En el conflicto armado de más de 60 años no hay cifras exactas sobre el total de tierra que ha sido acumulada a través de la violencia. El robo de tierras que se ha presentado solo desde el 1997 por parte de paramilitares, según la Procuraduría General de la Nación, asciende a casi 7 millones de hectáreas¹. Para realizar este despojo han sido desplazados solo en los últimos diez años cerca de cuatro millones de personas de sus tierras. A juicio de Jorge Rojas de la organización de derechos humanos CODHES, “este gobierno representa en buena parte a los apropiadores, llámense ganaderos, latifundistas, terratenientes, narcotraficantes o paramilitares”

El impulso que se ha dado en los últimos diez años al sector agroindustrial, igual que en la industria petrolera, la minería y la infraestructura, muestra un vínculo claro entre la violencia estatal, en múltiples casos a través de su estrategia paramilitar, y el “desarrollo” de la economía nacional. Los intereses económicos, en estos casos representados en recursos naturales, infraestructura, zonas francas y complejos industriales entre otros, no solo despiertan el interés de sectores económicos nacionales, sino también de internacionales. No sorprende entonces ver como empresas multinacionales y gobiernos extranjeros a través de programas de cooperación internacional buscan asegurar y promover sus intereses.

2) La cooperación internacional en Colombia

La prioridad de la cooperación internacional en Colombia del G-24 se centra en “apoyar política y económicamente al Gobierno y a la Sociedad colombiana en los esfuerzos hacia el Desarrollo, la Paz y la Reconciliación”³. Y según el gobierno de Uribe, la Estrategia para la Cooperación Internacional de 2007 hasta 2010 va dirigida a crear un Estado Comunitario que según el Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo: Afianzar los logros de la política de defensa y seguridad democrática, consolidar la confianza inversionista y crecimiento económico, y por último, avanzar en un programa social para reducir la pobreza y aumentar la equidad⁴.

Con la consigna “Sin la seguridad no crece la economía y si no crece la economía, no hay manera de financiar lo social”⁵, el 40,90% de los fondos de la cooperación internacional entre 2003-2004 fueron destinados a proyectos productivos alternativos y a programas regionales de desarrollo y paz. En su intento de centralizar la cooperación internacional el órgano presidencial Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional gestiona a 24 de septiembre de 2008, 1.393 proyectos con valor de 729.374.996 dólares⁶. La Unión Europea desde 2002 viene financiando los llamados “Laboratorios de Paz”⁷ donde los proyectos productivos en una gran parte están siguiendo el modelo agroexportador de los agrocombustibles. En la región de Montes de María la Comisión de la Unión Europea empezará el Tercer Laboratorio de Paz con una inversión de 24.200.000 dólares estadounidenses en 54 meses, finalizando el 30 de Junio 2010 y coordinado por el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI).

“El Programa de Paz del Magdalena Medio ha implementado iniciativas de desarrollo nocivas para el campesinado, contando con el dinero de la cooperación internacional, como el proyecto de palma aceitera, una iniciativa impuesta en Colombia por poderes industriales, latifundistas y narcotraficantes ligados al paramilitarismo que deja en el plano de pequeños productores de materia prima y de jornaleros a los campesinos, con el riesgo de perder las tierras frente a las presiones violentas de quienes promueven el cultivo o en manos de los usureros del sistema financiero”⁸.

3). El negocio de los agrocombustibles

El primer presidente colombiano que habló de agrocombustibles fue Pastrana, gestionando con el Banco Mundial un crédito para fomentar plantaciones de palma aceitera en ocho zonas del país. “De las ocho zonas seleccionadas para el programa cinco eran de dominio de los grupos paramilitares: Urabá, Córdoba-Sucre, Cesar, Magdalena Medio y centronorte del Meta. Y una zona donde había abierta expansión de esos grupos (oriente de Caldas-norte del Tolimanoroccidente de Cundinamarca)”⁹. Actualmente el Presidente Uribe tiene la ambición de llevar a Colombia al puesto número uno de los países latinoamericanos productores de agrocombustibles y para conseguirlo se beneficia de los programas destinados a la reinserción de paramilitares, de atención a desplazados y de sustitución de cultivos ilícitos.

En el convenio de cooperación “Etanol Caribe Colombiano”, suscrito en diciembre de 2007 entre la Alta Consejería para la Reintegración, la agencia de cooperación estadounidense USAID y Ethanol Consortium Board S.A. “se incluye el desarrollo de tres plantas (procesadoras de etanol) en Bolívar, Córdoba y Sucre con una inversión de 342 millones de dólares. El contrato permitirá la siembra de 45.000 hectáreas para producir 15.000 toneladas diarias de azúcar”¹⁰. “La producción de estas plantas será de un 85% para exportación, especialmente a Europa, y el 15% para el mercado local”¹¹.

La expectativa en la planta de Sucre (de primera generación con integración a segunda) es convertir caña de azúcar a alcohol carburante a una velocidad de 300.000 litros diarios. Este consorcio “ha previsto la siembra de 15 mil hectáreas entre Mahates y Maria la Baja, en una franja entre el Canal del Dique y las estribaciones de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre”¹². En el caso del cultivo de la caña a nivel nacional, “se cuentan con 3.898.221 hectáreas potencialmente cultivables, de las cuales sólo se están explotando 477.797 hectáreas. Aprovechando en un 100% las áreas potenciales, se lograría generar 701.680 nuevos empleos”¹³.

Este modelo no es nuevo en la zona “En Maria la Baja, después de la desmovilización (2005) se impuso a la población retornada el cuidado de la palma africana ya sea como cultivadores en su propia tierra o como jornaleros. Se les paga con bonos de 150.000 pesos, los cuales deben cambiar por alimentos en almacenes del propietario de la plantación. Esto demuestra, entonces, que los procesos de retorno que se presentan paralelos a las llamadas desmovilizaciones tienen por finalidad convertir a las poblaciones desplazadas en la base social del proceso de negociación paramilitar”¹⁴.

A finales de 2007 se crearon nueve zonas francas especiales para la producción de agrocombustibles que se dirijan a los mercados externos.

Pero los beneficios que da el Gobierno van más allá, “los beneficios adicionales previstos son la reducción de la tarifa del impuesto de renta, la ampliación de las exenciones del IVA para materias primas y productos terminados y la eliminación del impuesto de remesas para fomentar la inversión extranjera”¹⁵, creando un clima de inversión que permita a las empresas generar sus ganancias, dejando sin embargo la situación laboral de los trabajadores en pésimas condiciones.

4. El control de tierras

Al iniciar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el departamento de Sucre fue decretado junto con Arauca como “zona de rehabilitación y consolidación” para “garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil”¹⁶ y en la práctica, coincidiendo con el trayecto del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Este decreto fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional el 29 de abril de 2003 y según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas¹⁷: “Las zonas (...) fueron establecidas y manejadas bajo la inquietante e injusta presunción de que sus pobladores civiles colaboran con los grupos guerrilleros. Al amparo de tan descabellada presunción abundaron los abusos, los desbordamientos y las intencionales omisiones. (...) Puede afirmarse que los grupos paramilitares lograron consolidaciones y expansiones dentro de esas zonas, sin que para contrarrestarlas se evidenciara un gran esfuerzo de los cuerpos armados oficiales”.

Aunque la zona de rehabilitación y consolidación se terminó en abril de 2003 la militarización ha continuado hasta la fecha en los Montes de María. El ejemplo más flagrante fueron las detenciones masivas que se efectuaron el 17 de agosto de 2003 en los Municipios de Chalcán, Colosó y Ovejas, donde fueron detenidas ciento cincuenta y seis personas, por la Fiscalía, Policía y la Infantería de Marina y que fueron dejados en libertad el en el mes de noviembre del mismo año.

Actualmente, el gobierno departamental comenzó a investigar el fenómeno de la venta masiva de tierras en la región de los Montes de María (...) Lo que más llama la atención es el súbito incremento de los precios de las tierras en esa zona en el último año, pues el valor de la hectárea ha pasado de alrededor 200 mil pesos en épocas de recrudescimiento del conflicto armado a precios que oscilan entre millón y medio y dos millones de pesos¹⁸. Según declaraciones de un representante del Comité de Atención de Desplazados Roberto Hernández los compradores son gente del interior y según sus averiguaciones, representan a unas cinco empresas que requieren tierras privilegiadas, como las de los Montes de María, para cultivos que se emplearán en producción de agrocombustibles¹⁹.

En el Consejo Comunal del 9 de agosto de 2008 celebrado en San Juan Nepomuceno (Bolívar), se conocieron denuncias de personas que advirtieron recibir presiones de terceros para que vendan extensas fincas que fueron desocupadas en la época de la violencia paramilitar y de las amenazas que reciben los campesinos para que entreguen sus parcelas a cualquier precio, Uribe pidió a los alcaldes, a los jueces y al gobernador de Bolívar estar muy pendientes. (...) “No podemos permitir que los pobres sean más pobres. Esto hay que investigarlo a fondo y si necesitan el apoyo de las Fuerzas Militares cuenten con eso”, dijo Uribe (...) ²⁰

5. Consolidación con las acciones cívico-militares bajo el concepto de paz

El gobierno Colombiano ha buscado formar desde 2002 una red de informantes de un millón de personas que armados con medios de comunicación hacen labores de inteligencia para el ejército y la policía. Programas como “Soldados por un Día” y el programa de “Familias Guardabosques” han vinculado a su vez a alrededor de 400.000 personas a labores de inteligencia vinculadas a la Fuerza Pública. La población civil sin embargo no está colaborando solo en el tema de la información y labores de inteligencia. El programa de los soldados campesinos ha buscado armar a alrededor de 100.000 civiles desde 2002, para que ejercen labores de la fuerza pública en su propia comunidad.

En julio de 2008 se propuso que los alrededor de 180.000 vigilantes privados, agrupados en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que tiene Colombia se vinculan a la Fuerza Pública y la Policía en labores de seguridad y de anti-terrorismo. Esta propuesta vuelve a la memoria la experiencia de los Convivir, grupos civiles armados vinculados también a la misma Superintendencia, reconocidos por haber participado en masacres, desapariciones y asesinatos.

Pero la llamada Seguridad Democrática va más allá todavía. No solo da tareas militares a civiles, sino que también ha buscado involucrar a los militares en tareas civiles, a través de la Doctrina de Acción Integral. “La doctrina implica no sólo la coordinación existente a través del Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que integra a todas las agencias del Estado, sino que también definirá la participación y responsabilidad de las autoridades locales y la de otros sectores, como el privado, a través de los gremios, y las agencias de cooperación internacional”²¹.

En 2004 nace el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), que “coordina entre varias agencias las estrategias de recuperación social del territorio en las zonas recuperadas por la Fuerza Pública” y es “liderado por la Presidencia de la República donde tienen presencia permanente delegados de las Fuerzas Militares, la Policía

Nacional, los Ministerios de Protección Social, Educación, del Interior y de Justicia y entidades que lideran la aplicación de las Herramientas de Equidad, así como entidades de otros poderes estatales como la Registraduría y la Fiscalía, con el fin de crear un equipo interinstitucional que coordina y apoya la acción integral del Estado en zonas prioritarias escogidas por (i) su importancia estratégica, (ii) el desarrollo de operaciones militares que requieren como complemento la inversión social y generación de ingresos, (iii) la necesidad de atender una crisis humanitaria y (iv) la evidencia de poca presencia del aparato estatal en la zona²².

Las zonas prioritarias definidas por el gobierno Colombiano en donde opera el CCAI, desde 2004 hasta la fecha han sido 11 y coinciden en su totalidad con zonas donde existen o procesos fuertes de resistencia civil y/o proyecciones de grandes plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar y/o importantes proyecciones de ampliación de infraestructura para la integración al mercado internacional. Resaltamos los procesos de resistencia entre otros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, el Proceso de Comunidades Negras, Asociación Campesina del Valle de Cimitara, las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, las organizaciones sociales de Arauca y las organizaciones sociales de Catatumbo

Resaltamos a la vez los intereses económicos, representados en las plantaciones de palma aceitera en Tumaco, en el Bajo y Medio Atrato y los que están proyectados para la zona de Montes de María. Las plantaciones de caña de azúcar por su lado tienen una fuerte presencia en el Cauca.

Y en cuanto a proyectos de ampliación de infraestructura hay que destacar la carretera panamericana (zona del Bajo Atrato), en plan Arquímedes para la integración fluvial (Bajo y Medio Atrato), el puerto internacional de Buenaventura, el puerto internacional de Turbo, el oleoducto de Caño Limón – Coveñas (Montes de María, Arauca), el canal seco interoceánico en el Putumayo y Tumaco.

En Sucre se empezó bajo el liderazgo del Centro de Fusión Integral de Montes de María el 1 de julio de 2008 la construcción de la carretera Transversal de Montes de María. El director del Centro, el Coronel Colón Torres, con la mano de obra de soldados pertenecientes al Batallón de Ingenieros Militares Vergara y Velasco proyecta terminar la carretera de 38 kilómetros entre Carmen de Bolívar y el corregimiento de Chinulito del municipio de San Onofre entre 2 a 3 años.

6. Conclusiones

La estrategia cívico-militar del actual gobierno busca consolidar los espacios “recuperados” en los últimos 10 años a través de la estrategia paramilitar, a partir de la mezcla de labores civiles y militares en diferentes regiones del país. Esta estrategia permite que los intereses económicos y geoestratégicos de empresas y gobiernos nacionales e internacionales, se puedan implementar y extraer beneficios. Lo que no se tiene en cuenta y sólo crea costos a la población civil es la militarización y la consecuente violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

La convocatoria para el III Laboratorio de Paz se terminó en septiembre y aun no se conocen los resultados, pero todo apunta a que los millones de euros de la cooperación europea estarán financiando en Sucre una propuesta agroindustrial en tierras que fueron usurpadas de los pequeños campesinos a través de una estrategia de terror, en beneficio de los mismos gobiernos y empresas europeos

Pobreza y guerra

Escrito por Pere Ortega

Jueves, 20 de Noviembre de 2008

Reflexión sobre la relación entre pobreza y conflictos armados publicado por Justicia y Paz de Madrid el 01/11/2008.

La pobreza es producto de la violencia estructural que se sustenta en un orden social injusto mediante una distribución desigual de la riqueza que recae en manos de unos pocos en detrimento de la mayoría de la población. Violencia estructural que se sustenta en cuestiones de casta, etnia, género o puesto dentro de la escala social. Violencia estructural en la que se entremezclan otras violencias, la cultural, patriarcal, moral, política...

Entonces, podemos convenir que la pobreza genera conflictos, pero éstos no necesariamente acaban en conflicto armado. Desde luego puede ser una de las causas que, entremezcladas con otras de tipo político, económico, territorial o identitario, acaben conduciendo a un conflicto armado. Pero no existe un solo ejemplo en que la pobreza haya sido la causa principal de una guerra.

Es, entonces, una afirmación problemática pensar que hay una relación de causa/efecto entre pobreza y conflicto armado. Si se observa África, el continente más empobrecido del mundo, y de acuerdo con el informe del PNUD y su clasificación de los países con el índice de desarrollo humano más bajo, la relación entre pobreza y conflicto armado no se confirma.

Pues por un lado encontramos un buen número de países que no sufren conflicto armado alguno y en cambio figuran a la cola del ranking de los países empobrecidos: Níger, Mali, Burquina Faso, Zambia, Mozambique, Malawi, Benin, Tanzania, Djibuti por citar solo algunos. Pero también es cierto que, por otro lado, hay otro buen número con conflictos abiertos o muy recientes que también se encuentran entre países pobres, como Chad, Sudán, Sierra Leona, Guinea Bisau, República Centroafricana, Etiopía, Burundi, Costa de Marfil, Rwanda, Somalia, Congo y Guinea.

Entonces, ¿cuáles son las grandes causas de los conflictos armados? Me atrevo a resumirlas en dos. La más extendida, los agravios que se producen contra la población, debido a las cuestiones citadas, que se pueden concretar en luchas por acceder al poder, falta de libertades, justicia social, reparto muy desigual de la riqueza, la geopolítica, cuestiones identitarias, religiosas, territoriales, de independencia o mayor autonomía. En éstos agravios, la cuestión política es fundamental, y es la que abraza mayor peso, girando el resto de motivaciones a su alrededor.

Con lo cual, añadido, es un grave error hablar de conflictos de una sola causa, y calificarlos como étnicos, religiosos o de expansión, pues en los conflictos se entremezclan siempre diversas motivaciones.

En referencia a la geopolítica, cuenta y mucho, la geoestrategia de los estados, en la que éstos dirimen cuestiones de poder internacional e influyen de manera determinante en la explosión de muchos conflictos armados.

La otra gran cuestión es la codicia. Son los conflictos que surgen del deseo de apoderarse de un territorio para acceder a sus recursos, de ahí que algunos conflictos estén ligados a los diamantes, el oro, las maderas tropicales, el petróleo, la coca, el opio, o minerales como el cobre, coltán, fosfatos...

Esta codicia puede ser una causa determinante, pero difícilmente será única. Y también irá acompañada de cuestiones geopolíticas. Así, los grupos implicados en el conflicto recibirán ayuda exterior de otros estados interesados en acceder a esos recursos. Y en consecuencia, tendrán condicionantes políticos, económicos y a su vez se podrán revestir, sí es el caso, de cuestiones étnicas.

Una vez determinadas esas dos grandes causas. No es menos cierto que muchos de los conflictos armados actuales se dan en contextos de pobreza. En muchos casos, en países con un estado débil, sin instituciones capaces de ofrecer seguridad a sus habitantes. Estados que no han sido capaces de elaborar políticas económicas eficaces que permitan redistribuir la riqueza, los recursos o llevar a cabo programas de desarrollo que permita a su población sobrevivir de manera digna. Pero de ello, no se debe responsabilizar sólo a los gobiernos locales. Los países ricos tienen también una buena parte de culpa. Recordemos que vivimos en un sistema global donde las economías están interconectadas.

Y las decisiones de las grandes organizaciones mundiales que rigen los destinos del comercio, la política y las finanzas (BM, FMI, OMC u ONU) tienen mucha responsabilidad del trato desigual que se da a los países con estructuras políticas más débiles, pues afecta de manera negativa sus economías.

En muchos casos las políticas de liberalización económica emanadas de esos organismos han conducido a que se hayan privatizado empresas y servicios públicos con saldos muy negativos para la población, que se han visto privados de servicios sociales gratuitos; han visto sus mercados inundados de productos mucho más baratos que han hundido su producción interior; o por el contrario, debido a factores especulativos externos se hayan producido subidas del precio de los cereales (arroz, maíz, trigo) o productos de alimentación básicos que han provocado revueltas populares de protesta que se han saldado con violencia.

Así ha ocurrido recientemente en México, Guatemala, Egipto, Kenia y Tailandia. Esas revueltas pueden provocar enfrentamientos y muertes. Pero no hemos visto que esas protestas en ningún caso desemboken en conflictos armados, sino que necesitan estar entremezcladas con cuestiones de reivindicación más política.

Los conflictos armados surgen en contextos de pobreza porque las personas son mucho más vulnerables. Si escasean las tierras cultivables, si hay sequías, malas cosechas, faltan oportunidades para la población, como el acceso al trabajo o a la educación, se genera mucha frustración, especialmente entre los más jóvenes.

Si la esperanza de acceder a una vida mejor se pierde, puede empujar a los jóvenes a buscar en la violencia una salida fácil que satisfaga sus necesidades de progresar socialmente. Ha sido en países con estados débiles y economías de escaso desarrollo donde han surgido grupos armados y aparecido conflictos armados. El pertenecer a un grupo armado, puede ser para un joven, un cambio de estatus social para salir de la miseria, y tener mejor ropa, comida y acceder a lujos que antes ni podía soñar. No es extraño ver a jóvenes armados ataviados con prendas de vestir, relojes y gafas de marca. Pues un arma en las manos otorga poder a quien la posee y podrá ser utilizada para arrebatarse cuanto se le antoje a los demás. Los líderes de estos grupos, permiten el pillaje a sus miembros, que roban, violan y cobran por ofrecer protección. Estos grupos están liderados por personajes denominados acertadamente como señores de la guerra.

Personajes que practican la guerra para acceder al poder en territorios donde existen recursos muy preciados en el mercado internacional, método que les permitirá enriquecerse. Si consiguen el control de minas, bosques, cultivos de coca, opio o campos petrolíferos, las empresas transnacionales y estados estarán interesados en acceder a la explotación de esos recursos y pagarán para continuar haciendo negocios. Con lo cual, el soborno, la corrupción y la transferencia de armas se instalará en la región.

Estos hechos no sólo son exclusivos de señores de la guerra locales, también son extensibles a los gobiernos de algunos estados. Observemos que en Afganistán, Pakistán, Colombia, Congo, Chad, Sudán, Yemen, Líbano, Malasia, Indonesia. Por citar algunos, los gobiernos tienen tanta responsabilidad como los señores de la guerra locales en la corrupción y conflictos que se derivan de la explotación de la coca, opio, maderas, petróleo o minerales.

Si la pobreza no es condición sine qua non que conduzca al conflicto armado. Después de lo expuesto, sí que podemos afirmar que la violencia estructural en sociedades con una gran desigualdad y sin justicia social puede empujar a la violencia personal.

La Palma de aceite. El caso colombiano.

Los últimos 10 años el cultivo de la palma africana en Colombia ha vivido un fuerte incremento, ha pasado de ocupar 145.000 has. en 1998 a 300.00 en la actualidad, y se estima que hasta 6 millones de hectáreas serán destinadas a su cultivo.

La Palma aceitera es una palmera tropical de climas cálidos, muy apropiada para la elaboración de agrodiesel, además de otros aprovechamientos, puesto que entre las oleaginosas es de las que tiene un mayor rendimiento por hectárea. Los principales productores mundiales de aceite de palma son Malasia e Indonesia.

En Indonesia se talaron más de 18 millones de hectáreas de bosque para sembrar palma aceitera, en Malasia son conocidos los efectos devastadores que ha tenido su cultivo intensivo que ocasionó el 87% de la deforestación ocurrida entre 1985 y 2000 y que ha hecho disminuir la diversidad agrícola y la calidad del agua por el uso de fertilizantes, pesticidas y maquinaria. Especialmente grave fue la situación en 1998 cuando una nube de humo cubrió estos dos países, producto de la quema de bosques.

El gobierno de Uribe ha hecho de la extensión de los cultivos de palma una cuestión estratégica de dominio político, social, económico y militar del territorio. Apoya nuevos proyectos, como el Proyecto Gaviotas 2, que espera cubrir 3 millones más de hectáreas con lo que se ha venido a denominar como “desierto verde” de la palma. El gobierno está ligando estos proyectos a la reinserción de paramilitares con lo que aseguraría disponer de un control político-militar del territorio y del control sobre una mano de obra barata.

Fidel Mingorance, en su excelente estudio, “El flujo del aceite de palma Colombia-Bélgica-Europa”(2) ha documentado la violencia que ha acompañado el proceso de expansión de las plantaciones de palma africana, mostrando cómo su extensión ha coincidido con las áreas de expansión y presencia paramilitar.

Del análisis de las zonas de producción se desprende que la apropiación de tierras, el desplazamiento forzoso, el asesinato de sindicalistas, líderes sociales y campesinos, las masacres, las desapariciones forzadas, el lavado de activos del narcotráfico y el paramilitarismo no son hechos puntuales sino que responden a un modelo, que Mingorance ha resumido en 5 fases:

1.- Conquista paramilitar. Fase inicial en la que se crea un clima de terror generalizado , con asesinatos, masacres y desapariciones forzadas para provocar el desplazamiento forzado masivo de sus habitantes y la desaparición de cualquier tipo de contestación social o sindical.

2.- Apropiación ilegal de tierras, robo o compra con intimidación. Las tierras conquistadas por los paramilitares entran en un proceso de “legalización” totalmente irregular en las que unas son directamente robadas a sus propietarios y otras son compradas a precios muy bajos mediante la intimidación armada y financiadas con dinero del narcotráfico.

3.- Siembra de la palma. Las empresas palmeras establecen las grandes plantaciones de la palma africana. Si hay bosque, se hace tala rasa y se vende la madera, obteniendo un beneficio extra a la espera de poder recoger las primeras cosechas (3 años tras la siembra). En la mayoría de casos se incumplen las normativas ambientales.

4.- Una vez establecido el complejo palmero se inicia el proceso agroindustrial del aceite de palma. Los paramilitares continúan vinculados a las plantaciones, muchas veces como desmovilizados. La tutela paramilitar asegura una paz laboral y social armada.

5.- Control territorial y beneficio económico. Se consigue un dominio económico, político y militar de las tierras plantadas con palma y de otro la explotación de la incorporación del aceite de palma en el flujo comercial del mercado nacional e internacional.

(Esquema modelo palmero colombiano, gráfico)

Si en épocas anteriores fueron los empresarios palmicultores quienes conformaron y financiaron grupos paramilitares como cuerpos de seguridad frente a la guerrilla, posteriormente las plantaciones de palma se han expandido al mismo ritmo que la actividad paramilitar, hasta llegar a casos como el del Chocó donde fueron los propios paramilitares los que invitaron a los empresarios palmicultores a instalarse en sus zonas de control.

Los desplazamientos forzosos y los más de cien crímenes violentos que han sufrido las comunidades del Jiguamandó y Curvaradó desde 1997, o los setenta asesinatos de trabajadores y sindicalistas en Cesar y Santander los últimos años, son una pequeña muestra de la violencia que acompaña este proceso.

El controvertido proceso de desmovilización paramilitar ha supuesto una fuerte inyección de dinero público para el desarrollo de nuevas plantaciones de palma en zonas de fuerte presencia paramilitar, que está provocando situaciones en que las víctimas deben trabajar como asalariadas en las fincas que fueron de su propiedad y que les fueron arrebatadas por los mismos paramilitares que ahora se reinserten.

A pesar de todo, las resistencias se organizan: indígenas, afro descendientes y campesinos defienden sus territorios y derechos fundamentales. Se están organizando zonas humanitarias y de biodiversidad dónde las comunidades de desplazados retornan a su territorio y desde donde reivindican la recuperación de sus tierras. El verano pasado, y también el anterior, las comunidades de desplazados del Curvaradó, de afro descendientes y de indígenas emberakatio, se reunieron durante 11 días en las zonas humanitarias de Caño Claro y de biodiversidad de Cetino. Hartos de la impunidad y de la morosidad de las instituciones legales para reconocer sus derechos, empezaron a recuperar sus tierras por la vía de los hechos, tirando a tierra más de 50 hectáreas de palma plantada a sus tierras usurpadas y volviendo a plantar los cultivos tradicionales,

Estos hechos podrían parecernos lejanos o ajenos sino se supiera el destino de esta producción. El 73% de la producción de aceite de palma crudo colombiano es exportado, y es Europa el principal importador. En 2005 el Reino Unido fue el principal destinatario de estas exportaciones con 106.699 toneladas de aceite de palma, equivalentes al 41% de las exportaciones totales de aceite de palma crudo colombianas, seguido por España con el 22% y Alemania con el 11%. Estos números sitúan claramente la responsabilidad que tienen nuestros países y nuestra voracidad energética en las violaciones de los derechos humanos y la violencia

Prevención y Resolución de Conflictos

Escrito por Pere Ortega

Domingo, 28 de Octubre de 2007

(Solo disponible en lengua catalana)

Análisis de los diferentes agentes que trabajan en la Resolución de Conflictos desde una concepción integradora, tanto de los que trabajan desde la mediación, la ayuda humanitaria como en la vertiente de la cooperación i la ayuda al desarrollo.

Ponencia presentada en la XXII edición de la Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat del Vallès, julio de 2007.

Pere Ortega

El gasto de las misiones españolas en el exterior

Escrito por Pere Ortega

Miércoles, 16 de Mayo de 2007

Los gastos de las misiones militares en el exterior se contabilizan en el presupuesto de Defensa con una cantidad muy inferior a la realmente desembolsada al final del ejercicio. Esto es así porque, hasta cierto punto es comprensible que en el momento de elaborar el presupuesto no se puedan prever las misiones que se llevarán a cabo. Con lo cual se declaran estas partidas ampliables y las van incrementando a lo largo del año para hacer frente a los gastos extraordinarios ocasionados.

Pere Ortega, Materiales de Trabajo, núm 31 (abril 2007)

Evolución de los conflictos en el comienzo del siglo XXI

Escrito por Francesc Benítez

Jueves, 02 de Noviembre de 2006

Un breve balance cuantitativo de los primeros cinco años del siglo XXI en cuanto a la evolución de tres de las posibles caracterizaciones de los conflictos: su carácter intra o interestatal, su desarrollo regional y sus principales causas.

Francesc Benítez, Materiales de Trabajo, núm.29 (julio 2006)

Las violencias en el mundo

Escrito por Tica Font

Martes, 17 de Enero de 2006

Acabada la Guerra Fría menos encontramos que ha habido un cambio substancial en en la violencia armada, si antes se enfrentaban grupos que obedecían a ideologías concretas, ara nos encontramos que la violencia armada no obedece a ideologías y sí causas muy ligadas al control de territorios, recursos o economía delictiva.

Tica Font, ponencia presentada en la Universitat Internacional per la Pau de Sant Cugat, julio 2005.

Las guerras y sus causas en un contexto de globalización

Escrito por Tica Font

Martes, 16 de Noviembre de 2004

El final de la guerra fría ha supuesto el final del enfrentamiento bipolar Este – Oeste i ha supuesto que las guerras dejen de ser ideológicas, a partir de ahora los nuevos conflictos presentan nuevos actores, nuevos escenarios, nuevos métodos de lucha y nuevas formas de financiación. Tica Font (julio 2004)

Escritos por el centro Delàs

El anteproyecto de la ley de la opacidad de la defensa

Miércoles, 11 de Abril de 2012

Propuesta del *Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno*.

El Anteproyecto de la Ley de Transparencia consagra la defensa nacional como un ámbito opaco al escrutinio de los ciudadanos. El Anteproyecto pretende reconocer el derecho de acceso a la información en poder de las Administraciones públicas. Sin embargo, este derecho no puede ejercerse sobre aquella información que afecte a la seguridad nacional y a la defensa. La exclusión en materia de defensa tiene carácter absoluto al quedar totalmente fuera del concepto de información pública.

El anteproyecto de la Ley de Transparencia es así mucho más restrictivo que la Ley sobre Secretos Oficiales. Según esta última, el Gobierno puede clasificar como secreta aquella información cuyo conocimiento público pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Es la existencia de una situación de riesgo la que justifica que se mantenga oculta a los ciudadanos determinada información.

El anteproyecto de la Ley de Transparencia no exige que el conocimiento de la información pueda suponer un peligro para la defensa. Se trata de un matiz muy importante, ya que de esta manera se permite que el Gobierno decida libremente qué información hacer pública y cuál no. Obviamente, no se informará sobre aquellas cuestiones que puedan ofrecer a los ciudadanos una imagen negativa de la defensa. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa no tendría porqué informar sobre el coste económico de las operaciones militares en el exterior o sobre la cifra de muertos y heridos que se han producido.

La regulación es coherente con el concepto de cultura de defensa establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Cultura de defensa que tiene como finalidad que la sociedad española se identifique con la actuación de las Fuerzas Armadas

Según el anteproyecto, el derecho de acceso a la información pública también podrá ser restringido si la divulgación de la información puede suponer un perjuicio a los intereses económicos y comerciales. Esta excepción podría aplicarse a cuestiones relacionadas con la defensa nacional como el comercio de armamento. El Gobierno clasificó como secretas las actas del órgano administrativo que decide sobre las autorizaciones de exportación de armamento. La futura Ley de Transparencia podría aumentar la opacidad sobre el comercio de armamento al considerar que la transparencia en esta materia puede perjudicar los intereses de la industria armamentista. El secretismo en el comercio de armas tiene como única finalidad favorecer las exportaciones de armamento, como se puso de manifiesto con el escándalo de la exportación de bombas racimo españolas a Libia en 2008.

En definitiva, el Anteproyecto de la Ley de Transparencia no hace más que confirmar que la defensa nacional es uno de los ámbitos políticos con mayor déficit democrático. Nuestros poderes públicos no quieren que se abra un debate público sobre la política de defensa, sobre porqué y de qué debemos defendernos. Ésta es la razón de fondo por la que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información sobre cualquier cuestión relacionada con la defensa.

Una concepción democrática de la defensa exige, por el contrario, que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a saber sobre la información relacionada con la defensa nacional. Por ello, se solicita la modificación del anteproyecto para que se incluyan expresamente la información relativa a la defensa y al comercio exterior de armamento como materias propias del derecho de acceso a la información pública.

El riesgo de militarizar los conflictos laborales

Lunes, 28 de Marzo de 2011

La intervención del ejército para resolver un conflicto laboral es la peor de todas las soluciones posibles. Y más en España. Desde, como mínimo, los tiempos de la Restauración, el recurso a los militares como ardillas o como represores de trabajadores en huelga, forma parte de las páginas más negras de la historia de España de los siglos XIX y XX.

Declarar el estado de alarma para aplastar a un colectivo de huelguistas es una decisión grave. Recurrir a los militares para hacerlo efectivo es aún más grave, sobre todo si se tiene en cuenta que la legislación vigente no obligaba a tomar esta decisión (era una opción legal entre otras posibles). Y lo que ya directamente clama al cielo-y es además contrario a la legislación vigente-es prorrogar ambas cosas, estado de alarma y militarización, con la única finalidad de impedir que los controladores pudieran ejercer su derecho constitucional a la huelga durante las vacaciones de Navidad.

Militarización que por otra parte podía comportar juicios militares y prisión por algunos años. El que nos obliga a preguntarnos: ¿qué tipo de democracia es ésta que permite acusar de sedición a unos trabajadores por el hecho de abandonar su puesto de trabajo? Pensamos que mañana la misma medida se podría aplicar, y también por razones de "seguridad", a otros colectivos de trabajadores, por ejemplo a los de los ferrocarriles, metro, autobús o personal de aeropuertos porque impiden igualmente el transporte de personas.

El gobierno se atrevió a adoptar estas medidas después de constatar la debilidad política y la pésima imagen social de los controladores. Y no sólo porque se trata de un colectivo que cobra sueldos astronómicos, sino también por su aislamiento social producto de su elitismo y corporativismo. Los 2.500 controladores tienen dos sindicatos propios que nunca han querido saber nada de los llamados "sindicatos de clase".

Reiteradas veces se han mostrado insensibles a los problemas de otros colectivos de asalariados de dentro y de fuera de los aeropuertos. Sin ir más lejos, la USCA (Unión Sindical de los Controladores Aéreos) se negó a sumarse a la huelga general del pasado 29 de septiembre.

Ahora bien, lo más preocupante en todo este asunto es el gran apoyo social que ha obtenido la declaración del estado de alarma.

En este apoyo puede estar la semilla de una nueva mayoría social y electoral que, entre otras cosas, esté convencida de que a partir de ahora los conflictos laborales deben ser tratados básicamente como problemas de orden público que se solucionan llamando a la policía al ejército. Esperemos que no se convierta en costumbre enviar a los militares en la calle así como así, sino este país parecerá el de otros tiempos.

<http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20100917/los-controladores-anuncian-que-haran-huelga-29-s/print-483997.shtml>

L'exèrcit torna a envair els espais educatius

Martes, 22 de Marzo de 2011

La campaña "Desmilitaricemos la Educación" denuncia la presencia del ejército en el Salón de la Enseñanza de Barcelona que tendrá lugar del 23 al 27 de marzo y pide al Departamento de Enseñanza su retirada.

Este año, el ejército ha sido invitado de nuevo a participar en el Salón de la Enseñanza de Barcelona. Desde el convencimiento de que la misión de las instituciones y los agentes educativos es el fomento de la cultura, la ciencia y los valores de la convivencia y la diversidad, la Campaña "Desmilitaricemos la Educación" cree que ejército y educación son conceptos manifiestamente antagónicos.

El manifiesto elaborado desde la campaña "Desmilitaricemos la Educación" denuncia que la propaganda que la juventud recibe del Ministerio de Defensa es engañosa, desprende una imagen idílica de la vida militar y edulcorante el papel de las fuerzas armadas españolas en los conflictos bélicos. Argumenta que en un marco de fuerte crisis económica y de recortes presupuestarios, es intolerable que se dedique dinero público a la promoción del ejército, del militarismo y de la cultura de defensa, ya costosas campañas de publicidad de reclutamiento y de mejora de la imagen de las fuerzas armadas, cuando hay otras prioridades de primer orden en nuestro país.

La Campaña Desmilitaricemos la Educación y la Confederación Catalana de ONG por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo, en un comunicado conjunto el 21 de diciembre de 2010, exigieron al Gobierno que reconsiderara la convocatoria para subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las Fuerzas Armadas para el 2011, adjudicando un total de € 645.370 para promover cursos, seminarios, foros y proyectos de investigación por el público en general y en el ámbito escolar que traten temas como la Estrategia de Seguridad Española o el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN. El comunicado pedía por otra parte que el Gobierno priorizara el fomento de una cultura de paz a través de la investigación y educación para la paz, así como una acción humanitaria y cooperación desmilitarizadas.

Esta cuestión llegó al Congreso de los Diputados, el pasado 23 de febrero, gracias a una interpelación de CiU, donde finalmente el Congreso instó por unanimidad al Gobierno a velar para que el Ministerio de Defensa cumpla de forma efectiva la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de 2005, así como continuar con la política de austeridad y reducción de los gastos en materia de propaganda de defensa.

Por todo ello, y por coherencia con los valores para una cultura por la paz y la desmilitarización de la educación en las aulas, la Campaña "Desmilitaricemos la educación" manifiestan su firme rechazo a la presencia del ejército en el Salón de la Enseñanza y conmina al Departamento de Enseñanza, en calidad de coordinador, y en la Feria de Barcelona, en calidad de organizadora, a retirarle la invitación para las ediciones de este año y las próximas.

Manifiesto DESMILITARICEMOS EL SALÓN DE LA ENSEÑANZA

Un año más, el ejército ha sido invitado a participar en el Salón de la Enseñanza de Barcelona (del 23 al 27 de marzo). Y un año más la sociedad civil catalana, a favor de la paz, consideramos que su presencia en este evento educativo no es admisible por las siguientes razones:

- Los valores que transmiten las instituciones militares, la obediencia, la disciplina, el patriarcado, el androcentrismo y especialmente el recurso a la violencia como método para la resolución los conflictos, contradicen los valores de paz y diálogo que deben regir la educación de los y las jóvenes de nuestro país.

- La propuesta que el ejército ofrece a los estudiantes se opone a la LOE, que se inspira en "La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social ", y se orienta a la consecución de "la formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos. "

- La presencia del ejército en este salón se enmarca en la cada vez más incisiva participación en los espacios educativos. El ejército español pretende potenciar el eufemística "Cultura de la defensa" y "el espíritu militar" entre la juventud para mejorar su deteriorada imagen pública y paliar las actuales dificultades de reclutamiento.

- La propaganda que la juventud recibe del Ministerio de Defensa es engañosa, desprende una imagen idílica de la vida militar y edulcorante el papel de las fuerzas armadas españolas en los conflictos bélicos. El ejército es presentado casi como una ONG de ayuda humanitaria, que

oculta su rol de defensa de intereses más espurios. En ningún caso se informa rigurosamente de las consecuencias que se desprenden de la acción militar.

- En un contexto donde la seguridad humana debería medirse con indicadores de sanidad, de seguridad alimentaria, de acceso al trabajo, de respeto a los derechos humanos, de conservación del medio natural o del derecho a la educación, transmitir esquemas militaristas como solución de los problemas que afectan a nuestras sociedades es contradictorio y caduco. Así, desde el convencimiento de que la misión de las instituciones y los agentes educativos es el fomento de la cultura, la ciencia y los valores de la convivencia y la diversidad, creemos que ejército y educación son conceptos manifiestamente antagónicos. Además, en un marco de fuerte crisis económica y de recortes presupuestarios, no se puede tolerar que se dedique dinero público a la promoción del ejército, del militarismo y de la cultura de defensa, ni a costosas campañas de publicidad de reclutamiento y de mejora de la imagen de las fuerzas armadas, cuando hay otras prioridades en nuestro país

Por eso manifestamos nuestro firme rechazo a la presencia del ejército en el Salón de la Enseñanza y conminamos el Departamento de Enseñanza, en calidad de coordinador, y la Feria de Barcelona, en calidad de organizadora, a retirarle la invitación para las próximas ediciones. Las armas no educan, matan!

Entidades miembros de la Campaña DESMILITARICEMOS LA EDUCACIÓN:

ACASC, Asociación Ciudadana Anti-sida de Cataluña,
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT),

AMPA CEIP Jaume Balmes - Sant Feliu de Codines,

AMPA Escuela Patronato Domènech,

Asamblea Antimilitarista de Madrid,

Asamblea Mundet,

Ateneo Arte y Cultura (L'Escala),

Brigadas Internacionales de Paz de Cataluña,

Centro UNESCO de Cataluña,

Centro Virtual de Cultura de Paz de Cataluña,

Colectivo Antimilitarista de Sant Cugat,

Colectivo de Estudiantes del Maresme (CEM),

Coordinadora de ONG Solidarias (Comarcas de Girona y Alt Maresme),

Coordinadora Tarragona Patrimonio de la Paz,

Coordinadora Otro Mundo es Posible (Sabadell),
Mujeres x mujeres,
Edualter, Entrepueblos,
Escuela Guinardó SCCL,
Estudiantes en Acción,
Estudiantes en Lucha,
Federación Catalana de ONG por los Derechos Humanos,
Federación Catalana de ONG para el Desarrollo,
Federación Catalana de ONG por la Paz,
Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC),
Fundación Akwaba,
Fundación K-MON,
Fundación Món-3,
Fundación para la Paz,
Hermandad Obrera de Acción Católica,
Grupo de Educación para la Paz,
Grupo Cívico Cultural HUELLAS,
Grupo de Empordanesas y Ampurdaneses por la solidaridad,
Joves d'Esquerra Verda,
Justicia y Paz,
Movimiento por la Paz,
Plataforma Aturem la Guerra,
Plataforma por la Paz Lloret,
Prodi Cataluña,
Servicio de Información de la Objeción fiscal al Gasto Militar,
Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes,
Sociedad Catalana de Educación Ambiental ,
Universidad Internacional de la Paz,
USTEC · STEs (IAC),
Vallirana por la paz.

Correo de la campaña: desmilitaritzem@gmail.com

Página web: <http://desmilitaritzem.blog.pangea.org>

Intervención Junta accionistas BBVA 2011

Lunes, 14 de Marzo de 2011

Intervención de la Campaña BBVA sin armas en la Junta de Accionistas del BBVA 2011

Buenos días señores y señoras accionistas del BBVA, mi nombre es Jordi Calvo Rufanges y les hablo de estudios por la paz en representación de diversos accionistas y de la Campaña BBVA sin armas integrada por las organizaciones, Justicia y Paz Barcelona, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y la Federación SETEM. Mi intervención es para mostrarles que el BBVA es el banco español que más invierte en armamento controvertido: armas nucleares, bombas de racimo y armas de uranio empobrecido.

El BBVA dice tener una normativa interna para limitar las operaciones con la industria armamentística. Es cierto, pero de acuerdo con nuestras investigaciones, sabemos que los fondos de inversión gestionados por el BBVA incluyen acciones y bonos de 16 empresas que fabrican armas controvertidas, que el BBVA ha concedido préstamos a 8 de estas compañías desde 2006 y ha dado apoyo a 4 de ellas en la emisión de bonos y acciones. Esto muestra que su normativa interna de financiación del sector defensa no sólo es insuficiente, sino también un engaño a sus accionistas, trabajadores y a la opinión pública, vista la larga lista de compañías del sector militar que el BBVA continúa financiando.

Veamos en detalle de qué operaciones estamos hablando y qué tipo de armas fabrican las empresas financiadas por el BBVA, para que comprendan la gravedad de la situación:

- El BBVA ha gestionado fondos de inversión por valor de 26,85 millones de euros de empresas productoras de misiles nucleares, como BAE Systems, EADS y Boeing que además fabrica aviones de guerra. El BBVA gestiona también fondos de inversión de L-3 Communications, empresa que produce componentes cruciales de municiones de racimo, de Lockheed Martin, una de las grandes productoras de bombas de racimo, cuyo producto estrella es la bomba de racimo M30, con un alcance de 70 km y que está involucrada junto a Northrop Grumman (también cliente del BBVA) en la producción de los misiles nucleares intercontinentales Minuteman III.

En esta macabra lista aparece también McDermott International, empresa involucrada actualmente en la producción de bombas nucleares, cuya experiencia proviene de su participación en el Proyecto Manhattan que desarrolló las bombas atómicas que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki; y Textron, que produce municiones de racimo utilizadas en la guerra de Irak.

- El BBVA participó con un montante de 78 millones de dólares en octubre de 2008 en una emisión de acciones de Finmeccanica, empresa armamentística italiana, participada en un 2,01% por la Libian Investment Authority (LIA) del gobierno libio, que ha realizado recientes y suculentos negocios con el gobierno de Gadafi, cuyas armas han sido muy probablemente utilizadas en la represión de la población civil de este país de las pasadas semanas.

- El BBVA ha asistido durante 2009 a Boeing, EADS y General Dynamics en la emisión de bonos de estas compañías por un valor total de 104,2 millones de euros. General Dynamics (de quien también se gestionan fondos de inversión) destaca por su implicación en la producción de armas nucleares y armas de uranio empobrecido, muchas de ellas usadas en las guerras de Oriente Medio. Esta empresa ha sido una de las productoras más importantes de bombas de racimo.

- El BBVA es propietaria de bonos de EADS y Thales a través de fondos de inversión por un valor de 310.000 euros. Estas dos empresas están desarrollando el destructivo misil M51 que puede ser lanzado sobre un objetivo de más de 6.000 kilómetros, lo que la convierte, evidentemente, en un arma ofensiva.

- En los últimos cinco años el BBVA ha participado en créditos sindicados que están pendientes de devolución a un gran número de empresas que fabrican armas controvertidas, como las mencionadas anteriormente (Boeing, EADS, Finmeccanica, General Dynamics y Lockheed Martin, aunque a este última el crédito le fue cancelado en aplicación de la normativa interna del BBVA en febrero de 2010) y otras como Honeywell International, Larsen & Toubro y McDermott, productoras de armas nucleares.

Desde la aplicación oficial de su normativa interna el BBVA ayuda con variadas operaciones financieras que superan los 1.000 millones de euros en los últimos cinco años a la producción de bombas de racimo, bombas nucleares y armas de uranio empobrecido, muchas de ellas probablemente usadas en algunos de los conflictos armados de los últimos años, con lo que constatamos que la normativa del BBVA sobre armamento no ha servido para reducir sus inversiones en la industria militar más cuestionable.

Sr. Presidente, quisiéramos saber qué parte de sus 4.606 millones de beneficios anunciados para el ejercicio 2010 provienen de sus negocios con el sector armamentístico y en concreto de la producción de armas nucleares, municiones de racimo o de uranio empobrecido. De saberlo, podrían valorar sus accionistas si prefieren seguir lucrándose del negocio de las armas, o si como la gran mayoría de la sociedad española rechaza los beneficios provenientes de negocios ilegítimos y reprobables como los relacionados con la producción de armamento tan controvertido como el aquí expuesto.

No importa el tipo de operación financiera de que se trate, no valen excusas, usted Sr. González es el principal responsable de que el BBVA haga negocios con empresas de armas rechazadas socialmente y prohibidas por tratados internacionales. Le exigimos que cancele totalmente sus operaciones con las empresas de armamento, especialmente con las aquí expuestas. De no hacerlo, debe usted saber que seguiremos denunciando desde la Campaña BBVA sin armas cómo el BBVA se lucra de una industria que genera violencia armada, destrucción y miles de muertos en todo el mundo.

Gracias por su atención.

Imágenes Jornadas Delàs 09

Martes, 20 de Octubre de 2009

El Tablero de Ajedrez Mundial.

Un año más, desde el Centre d'Estudios por la Paz JM Delàs, estamos muy satisfechos de haber organizado unas jornadas como las de este año. La temática ha girado en torno en Afganistán y Pakistán y los intereses generados en esta parte del mundo. Como ponente principal hemos tenido el honor de tener entre nosotros a Tariq Ali.

Si queréis leer el comunicado de las jornadas clicad [aquí](#).

A continuación os presentamos un reportaje fotográfico de las jornadas junto con el vídeo del seminario de la mañana.





Para ver el vídeo del seminario dirigiros a: tots x tots o link de youtube.

Intervención en Junta Banco Santander 2010

Viernes, 21 de Enero de 2011

Intervención de Jordi Calvo, del Centro de Estudios por la Paz JM Delàs de Justicia y Paz, en la Junta de Accionistas del Banco Santander 2010.

Buenos días, Sr. Presidente, señores y señoras accionistas y miembros del Consejo de Administración.

Mi nombre es Jordi Calvo, soy miembro del Centro de Estudios por la Paz Josep Manel Delàs de Justicia y Paz de Barcelona. Me dirijo a ustedes como accionista representante de más de 242.259 acciones, con la intención de mostrarles las relaciones que el Banco Santander mantiene con la industria armamentística y los derechos humanos.

El Banco Santander financia o ha financiado el sector armamentístico principalmente de tres maneras: una, a través de la participación accionarial en empresas que fabrican armas; dos, mediante la concesión de créditos a empresas fabricantes de armas; y tres, mediante la financiación de exportaciones de armas. Quisiera destacar que es de especial relevancia la actual relación de su entidad con la fabricación de armas nucleares y bombas de racimo.

El Banco Santander participa en la actualidad con el 22,6% en la empresa de armas MaxamCorp Holding, a través de su sociedad de capital riesgo Vista Desarrollo. Este holding cuenta entre sus empresas con Explosivos Alaveses (Expal), empresa que se dedica íntegramente a la producción de bombas y explosivos y que, hasta que fue prohibido por ley, fabricaba minas antipersona y bombas de racimo.

El Banco Santander posee o gestiona acciones de la empresa de armas estadounidense Textron por un valor de 510.000 dólares, una empresa que vende misiles con municiones de racimo. Las bombas de racimo son un tipo de arma que al ser lanzadas dispersan su carga sobre amplias zonas y que cuando no explotan se convierten en una variante de las minas antipersona, siendo un arma que desgraciadamente cuenta con miles de civiles entre sus víctimas.

Las bombas de racimo han sido recientemente prohibidas en España, en virtud del Tratado Internacional del que es signatario. Sin embargo, Estados Unidos, de donde es la empresa Textron, no ha firmado este tratado, por lo que sigue produciendo bombas de racimo que, recordemos, financia su entidad. Además, probablemente, Explosivos Alaveses (Expal) pueda estar produciendo bombas de racimo en alguna de sus filiales de países no signatarios del mencionado tratado.

El Banco Santander también mantiene relaciones comerciales y posee acciones de EADS-CASA por valor de 2.540.000 dólares. Esta compañía fabrica misiles que llevan cargas nucleares que, si desgraciadamente llegan a ser utilizados, tampoco distinguirían entre combatientes y población civil.

En definitiva, el Banco Santander contribuye directa e indirectamente a la producción de armamento nuclear y de bombas de racimo. Muy probablemente no me equivoco, Sr. Presidente, si le aseguro que la mayoría de la sociedad española y, por tanto, de sus accionistas y clientes, están en contra de cualquier relación con la industria armamentística, por la contribución que esto supone a la promoción de la violencia armada.

Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que la financiación de la producción de misiles nucleares y de bombas de racimo por parte del Banco Santander aquí denunciada, es plenamente rechazada por sus presentes y futuros accionistas y clientes.

Le pedimos, Sr. Presidente, que elimine toda relación del Banco Santander con la industria armamentística, especialmente con las productoras de bombas nucleares y de racimo.

Con esta decisión se vería beneficiada no solo la humanidad, sino muy probablemente también su entidad que, de desvincularse del sector armamentístico, no solo no dejaría de percibir unos probablemente ínfimos ingresos, sino que el Banco Santander se vería beneficiado en términos de imagen corporativa de las prácticas que una actitud responsable con la construcción de una cultura de paz le reportaría.

Le pedimos, finalmente, Sr. Presidente, que nos clarifique la política del Banco Santander en relación a la financiación de la industria armamentística.

Por otro lado, en relación a proyectos de alto riesgo para comunidades y medio ambiente, tenemos información de la participación de Banco Santander en otro polémico proyecto hidroeléctrico con riesgos similares al Complejo Rio Madeira que denunciaba la ONG SETEM en las últimas dos Juntas.

Este proyecto se encuentra en el río Sogamoso en Colombia, donde la represión ha llegado hasta el extremo de asesinar a líderes sociales opuestos al proyecto. ¿Podrían confirmar o desmentir que han otorgado un crédito a la empresa colombiana ISAGEN para ejecutar dicho proyecto? En caso afirmativo les recomendamos la retirada del mismo para no verse involucrados en estas severas violaciones de los DDHH.

Muchas gracias.

Nota de prensa sobre el juicio a miembros de la Coordinadora Tarragona Patrimonio de la Paz

Miércoles, 20 de Octubre de 2010

El pasado mes de junio, en pleno periodo de presentación del IRPF, activistas de la Coordinadora Tarragona Patrimonio de la Paz realizaron una acción informativa de la campaña de Objeción Fiscal al gasto militar. La acción consistió en hacer dos pintadas en el suelo dónde se decía: RECORTAMOS EL GASTO MILITAR. HACEMOS OBJECCIÓN FISCAL. El objetivo de la acción era informar a los ciudadanos de la posibilidad de no contribuir a la absurdidad que representa el enorme gasto militar del Estado español. Esta posibilidad es, claramente, una forma de denuncia de la política del gobierno que destina tanto dinero a preparar y hacer la guerra. Una política todavía más irresponsable en los actuales momentos de crisis y de necesidad de invertir en medidas sociales.

Los mossos d'esquadra identificaron a los activistas y recibieron una citación para un juicio de faltas el día 6 de octubre. Este juicio ha sido aplazado, por motivos burocráticos, hasta el día 10 de noviembre.

Consideramos que es desproporcionado traer a juicio alguien por haber hecho una acción como la descrita. Y más si recordamos que, en un pleno municipal de febrero de 2003, se aprobó que Tarragona es una "ciudad contra la guerra".

Por otro lado, hace falta añadir que el Ayuntamiento de Tarragona ha estado pintando también el suelo de las calles para promocionar la candidatura de la ciudad a los Juegos Olímpicos de la Mediterránea. Nos encontramos, pues, con dos valoraciones diferentes de una determinada actividad, según quien sea el autor.

El mismo día en qué se había programado el juicio que después se ha aplazado, entraba en el puerto de Tarragona un barco de guerra de la VI flota de los EE.UU., procedente de Irak. No deja de ser una incongruencia que una ciudad que se autoproclama como antibélica, denuncie una acción antimilitarista inofensiva y acoja barcos de guerra.

Reflexiones tras Fukushima. Recursos energéticos y militarización.

Martes, 21 de Junio de 2011 09:07

El desastre de Fukushima ha hecho cuestionar el uso de la energía nuclear como fuente de energía. Todavía es pronto para tomar plena conciencia de la magnitud del desastre, los efectos contaminantes que tendrá sobre el mar, el aire y la alimentación y sobre los territorios que quedarán inhabitables para las generaciones futuras. Pero, ya lo anticipamos, habrá que hacer frente a los intentos de minimizar el desastre, los intentos de justificar la existencia de las centrales nucleares como un mal menor, pero necesario.

Fukushima vuelve a poner en primer plano la crisis energética y el modelo energético dominante que se caracteriza por un consumo desaforado, por la concentración, en unas pocas manos, de la extracción, producción y distribución de los recursos energéticos, y porque utiliza unos recursos energéticos que pronto se agotarán. Además, este modelo energético acentúa el desequilibrio entre los pueblos del Norte y los del Sur.

La utilización civil de la energía nuclear ha estado ligada al desarrollo del armamento nuclear y, por tanto, ha contribuido a la carrera armamentística y el riesgo real de guerra atómica. Ya que cada vez son más escasos los recursos energéticos fósiles, es necesario un cambio de rumbo, rápido y decidido, hacia otro modelo energético. En caso contrario, se abrirá una etapa de incertidumbre y de peligro de aumento de la conflictividad militar por el control y la obtención de estos recursos.

Quién controla las fuentes del petróleo y de las otras energías fósiles y sus vías de circulación, tiene el poder. De ahora en adelante, el petróleo se tendrá que ir a buscar a lugares donde su extracción es más costosa desde el punto de vista tecnológico y económico, en países del Sur con gobiernos débiles e inestables, donde la extracción provoca desastres medioambientales y conflictos con la población. Los hidrocarburos han ocasionado conflictos armados en Asia Central, Oriente Medio, en Sudamérica y en África.

La extracción de recursos es una fuente de corrupción que mantiene regímenes cleptocráticos. Es una fuente de conflicto que despoja a sus legítimos propietarios de territorios ancestrales, como el caso del Delta del Níger o de las selvas amazónicas de Perú y Ecuador.

Este modelo energético va ligado a la obsesión por el control y la seguridad de las fuentes de energía.

El desastre de Fukushima debería poner en la agenda política mundial el compromiso de sustitución del modelo energético actual por un modelo nuevo que priorice la reducción del consumo de energías fósiles y evite así la emisión del temido dióxido de carbono, uno de los causantes del cambio climático.

Un modelo capaz de satisfacer las necesidades de toda la población, basado en la utilización de energías renovables, en la producción de energía a partir de fuentes locales y en la descentralización de su distribución. El control del proceso de producción y distribución de energía no puede estar concentrado en pocas manos.

Necesitamos, en definitiva, alternativas energéticas que no nos lleven a conflictos armados. Está en juego la paz y el futuro del planeta.

JUSTICIA Y PAZ Participa en el FORO SOCIAL MUNDIAL 2009 (Belém, Brasil)

Miércoles, 21 de Enero de 2009

Entre los próximos 27 de enero y 1 de febrero de 2009 tendrá lugar el VIIIè Fòrum Social Mundial en la ciudad de Belén, en Brasil. En esta edición una delegación de Justicia y Paz y del Centro de Estudios por la Paz formada por 8 miembros: Arcadi Oliveres, Tica Font, Pere Ortega, Francesc Benítez, Josep M^a Fisa, Eulàlia Reguant, Alejandro Pozo y Jordi Calvo participará en Seminarios del Foro.

Justicia y Paz ha organizado dentro del FSM, conjuntamente con otras entidades, diferentes seminarios de trabajo (los cuales relacionamos a continuación) vinculados con nuestros ámbitos de actuación. De igual modo, la delegación de la entidad tiene previsto participar en otras actividades del FSM sobre estas y otras temáticas. Justicia y Paz ha participado activamente en las diversas ediciones de los FSM desde el año 2004.

29/01/2009, 15:30h: "Quedada de Comisiones de Justicia i Paz del mundo participantes al FSM" organiza: Justicia i Paz

29/01/2009, 08:30h: "Desmantelando el Poder de las Transnacionales: experiencias y estrategias de los pueblos de América Latina y Europa" organiza: Justicia y Paz, SETEM, OMAL- Observatorio de las Multinacionales de América Latina i Enlazando Alternativas. Con Arcadi Oliveres, presidente de Justicia i Paz.

30/01/2009, 12:00h: "Asamblea Campaña anti-OTAN" organiza: Justicia y Pau, El Movimiento de la Paz, INES, IALANA, International Peace Bureau, Global Peace and Justice Coalition from Turkey and Stop the War Greece. Con Jordi Calvo, técnico del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs de Justicia y Paz.

31/01/2009, 15:30h: "La remilitarización de América Latina" organiza: Justicia y Paz y Coordinación Latinoamericana del SERPAJ. Con Tica Font y Pere Ortega, vicepresidenta de Justicia i Paz.

Les mantendremos informados con crónicas desde Belén.

Más información en: www.justiciaipau.org · 93 317 61 77 · premsa@justiciaipau.org

Comunicado sobre el fin de la violencia de ETA

Viernes, 21 de Octubre de 2011

Comunicado con motivo del cese de las actividades armadas de ETA

Expresamos nuestra gran alegría por esta noticia histórica, que hace mucho tiempo que esperábamos, y que es un paso muy importante y necesario para erradicar la violencia política que tanto sufrimiento ha generado. Consideramos que con este anuncio se ha iniciado la fase decisiva de un proceso que debe llevar al logro de una paz justa y definitiva y la reconciliación. Instamos especialmente al actual y al futuro Gobierno español para que administre esta situación con prudencia y responsabilidad y que impulse las medidas políticas oportunas que faciliten la irreversibilidad del proceso de paz. Esperamos que la voluntad expresada por ETA tenga continuidad y se materialice con el desmantelamiento de su organización y la entrega de todas las armas que aún disponga.

Así mismo esperamos que el nuevo escenario lleve a determinar progresivamente la situación penitenciaria más adecuada de las personas condenadas por la comisión de acciones terroristas y favorecer así su reinserción social.

Pedimos que en el camino que ahora se inicia no se olvide el sufrimiento ni las necesidades de todas las víctimas de la violencia y se busque hacer posible el perdón y la reconciliación.

Consideramos que, en todo este proceso, la aportación de un equipo internacional de mediadores o asesores, con experiencia en la resolución de conflictos similares, puede ser muy constructiva. Pedimos también, como hemos hecho en otras ocasiones, en todas las instituciones y partidos políticos, entidades cívicas y religiosas, y en general a toda la sociedad vasca y española, que se impliquen activamente, por la vía del diálogo, en favor del logro de una paz justa y definitiva, en la que se respeten íntegramente los derechos humanos y el derecho a la libre determinación del pueblo vasco.

Reconocemos y agradecemos a todas las personas e instituciones que han contribuido a hacer posible esta nueva oportunidad de paz que no se debe dejar perder.

Por la Paz en Libia, no a la intervención militar

Viernes, 11 de Marzo de 2011

Comunicado sobre la situación en Libia y las amenazas que los estados europeos, incluido el Estado Español, están lanzando sobre una posible intervención militar.

Estados Unidos y Europa occidental, a través de la OTAN, están estudiando la posibilidad de intervenir militarmente en el conflicto libio. El que fuera en otro tiempo dictador rechazado por las potencias occidentales, Muamar Gadafi se reconvirtió después en firme aliado con quien se firmaban convenios comerciales y a quien se suministraban armas. Ahora, tras una revuelta popular, que tiene opciones de derrocar su régimen, Gadafi lo ha convertido en un indeseable a quien se ha de sacar del poder mediante la utilización de la fuerza militar.

Es de una enorme hipocresía hablar de intervención militar sin considerar que hay muchos otros lugares del Norte de Africa, Oriente Próximo y el mundo donde hay dictaduras que reprimen su población y donde la reacción se reduce a intentar obtener provecho económico y político de la situación. ¿Es tan diferente el régimen de Gadafi de los de Yemen, China, Argelia, Arabia Saudí o Guinea Ecuatorial, países con los que se sigue firmando acuerdos comerciales o transferido armamento? No será que a Europa y Estados Unidos les preocupan más los importantes yacimientos de hidrocarburos y otros negocios e intereses en una eventual Libia post-Gadafi que las libertades del pueblo libio?

Además, cualquier intervención militar se sabe cuando empieza pero nunca cómo ni cuándo termina. O si provocará una espiral de nuevas violencias. Recordemos los casos recientes de Irak y Afganistán, donde a pesar de los insistentes discursos "humanitarios", los intereses políticos, económicos y estratégicos han sido finalmente patentes. Además, una presencia militar extranjera coartaría la posibilidad de que sean los propios libios los que escojan su futuro político.

Además, consideramos que hay medidas pacíficas, de presión política y económica que aún no se han agotado y por las que debería optar la Comunidad Internacional. Como sanciones de Naciones Unidas con embargos económicos, de todas las cuentas del gobierno libio en el exterior (incluyendo los indirectos), de las compras de hidrocarburos.

Porque ninguna intervención militar ha demostrado ser imparcial y buscaría indudablemente favorecer los intereses geoestratégicos y económicos de los países miembros de la OTAN, tanto el control de recursos estratégicos como el petróleo y el gas, como por aspectos relacionados con la inmigración, entre otros.

Por estas razones pedimos al Gobierno español, como miembro de la OTAN, que se posicione claramente por la no intervención militar en Libia, absteniéndose de enviar soldados españoles y de prestar ayuda logística o de cualquier otro tipo, incluyendo el uso de las bases militares de Morón y Rota.

Por la paz en Libia, no a la intervención militar, sí a la intervención política y económica, para aislar el régimen del dictador Gadafi, para favorecer la transformación hacia la democracia que el pueblo libio pide.

El debate sobre el ejército español en Afganistán

Jueves, 02 de Noviembre de 2006

El pasado 11 de mayo de 2006 tuvo lugar en el Congreso de los Diputados un debate sobre la pertinencia de enviar a Afganistán un nuevo contingente de 150 soldados españoles. Se materializaba así por primera vez la obligatoriedad de someter a aprobación cualquier tipo de intervención militar en el exterior, tal y como se recoge en el artículo 17.1 de la nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de 17 de noviembre de 2005.

Comunicado sobre la declaración de alto el fuego de ETA

Martes, 11 de Enero de 2011

La organización terrorista ETA acaba de emitir un comunicado en el que declara un alto el fuego permanente, de carácter general y verificable, lo que lo convierte en el anuncio hasta ahora más contundente de ETA de abandono de las armas y de búsqueda de una solución política al conflicto vasco.

Hubiéramos preferido escuchar que el abandono de las armas y la lucha armada es definitivo, dado que los altos al fuego anteriores fueron rotos posteriormente. Pero también hay que tener en cuenta que lo prioritario es continuar el proceso de pacificación del conflicto vasco para acabar el sufrimiento y la violencia armada.

Por esta razón afirmamos que es una muy buena noticia un "alto el fuego", pues es un paso importante en el proceso de solución del conflicto vasco. Asimismo hacemos un llamamiento a los gobiernos de España y de Euskadi, a los partidos políticos y a la sociedad vasca y española a sumar esfuerzos para hacer posible el fin de la violencia en Euskadi.

Caminos de paz para Euskadi

Miércoles, 13 de Octubre de 2010

La aparición de los dos comunicados de ETA en el mes de septiembre anunciando primero un alto al fuego y después mostrando su disposición a reunirse con mediadores internacionales, ha puesto de nuevo sobre la mesa la esperanza del fin de la violencia en Euskadi.

La situación actual respondería a un proceso que se inició hace unos meses fruto del debate interno a la izquierda abertzale sobre la necesidad de desvincularse de la lucha armada de ETA. Aunque este proceso está siendo asesorado y acompañado por especialistas como Brian Currin- que actuó de mediador en los conflictos de Sudáfrica e Irlanda-, de momento no cuenta con el apoyo ni con la implicación de los gobiernos estatal y autonómico, ni tampoco con el reconocimiento de los principales partidos del Estado español.

Sin embargo, el proceso ya ha empezado a dar pasos importantes como la Declaración de Bruselas de marzo firmada por 19 personalidades, entre las que había cuatro premios Nobel por la Paz, en la que se pedía a ETA un alto al fuego permanente, unilateral, incondicional y verificable. Los dos comunicados de ETA de septiembre se pueden interpretar como una respuesta sujeta a muchas interpretaciones, pero de momento abre puertas que no se deberían desaprovechar.

Estos días se han oído todo tipo de valoraciones por parte de representantes de partidos políticos, los gobiernos estatal y de Euskadi, y de las plumas de diferentes analistas en el tema a los medios de comunicación. Así, hemos oído por un lado las que directamente desprecian y sacan credibilidad a estos comunicados debido a las experiencias de fracaso del pasado, y por otro las que de forma muy cautelosa indican que "no son una mala noticia", pero que no cubren las expectativas de paz necesarias ya que no se trata de una declaración definitiva e irreversible de la violencia armada.

En los últimos años hemos visto como desgraciadamente algunas de las principales potencias mundiales no han dudado en "ir a la guerra", construyendo y enviando a la opinión pública argumentarios que se han demostrado falsos y totalmente tributarios de intereses económicos y estratégicamente partidistas . En contraposición a esta hipocresía, creemos profundamente que la disposición de las sociedades democráticas y de sus representantes, debe ser la "de ir a la paz" allí donde pueda brotar y sin caer tampoco en prejuicios que en el fondo esconden recelos a los procesos democráticos.

El fin de la violencia armada en Euskadi será el fruto de numerosas acciones, en el que han intervenido e intervendrán actores provenientes de todos los ámbitos, del estado central y autonómico, los partidos, de la izquierda abertzale, de mediadores, y de la sociedad civil. Todos debemos tener presente que la paz no se puede construir en contra de nadie. La paz es simplemente un camino, no aprovecharlo es menospreciar la esperanza de los que la desean.

Aumentar el compromiso con Afganistán retirando las tropas

Domingo, 21 de Diciembre de 2008

El reciente y lamentable ataque que ha ocasionado dos muertos y cuatro heridos españoles merece abordar tres cuestiones con el ánimo de aportar claridad sobre nuestra contribución en Afganistán.

En primer lugar es necesario insistir en que ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a Afganistán) no es una operación de Naciones Unidas, como defiende el gobierno. No existe en Afganistán un solo casco azul. Aunque autorizada por la ONU, ISAF es una intervención de la OTAN, está dirigida por la OTAN y responde a los intereses y maneras de actuar de la OTAN. Además, si quien controla y dirige la fuerza en Afganistán, EE.UU., no diferencia actuaciones ni operaciones militares, englobadas en su conjunto en la denominada «Guerra contra el Terror» (cuyo segundo pilar es la intervención en Irak), que en España pretendamos establecer límites, aun suponiendo buenas intenciones, resulta ingenuo. La segunda pregunta apunta a si es razonable atribuir a los taliban todos y cada uno de los ataques a las tropas internacionales.

En Afganistán operan más de ochocientos grupos armados diferenciados, muchos de ellos vinculados a los taliban, pero muchos otros no relacionados e incluso contrarios a sus prácticas. Una parte de ellos se ha constituido como respuesta a la condenable estrategia militar occidental de ataques indiscriminados núcleos habitados (los «daños colaterales» duplican las muertes del 11-S). Incluso los grupos taliban son «contratados» por sus bases de apoyo para que les defiendan de agresiones externas, tanto afganas como occidentales.

Entonces, cabe preguntarse sobre las presuntas buenas intenciones en lo que concierne a la reconstrucción de Afganistán y la mejora de las condiciones de vida de su población. El PIB afgano es cinco veces inferior al gasto militar anual de EEUU en Afganistán. 92 de cada 100 euros de la contribución mundial oficial hasta 2006 son militares, y la relación parece mantenerse en la actualidad.

La proporción coincide en el caso de España, que no ha dedicado nada a programas de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes y sólo ha proporcionado el 0,68% de los fondos totales para desminado. Peor es el panorama en las crisis humanitarias: España no ha aportado un solo euro a las tres llamadas urgentes de 2008 en Afganistán, destinadas, entre otros aspectos, a paliar los efectos de la permanente sequía y la subida del precio de los alimentos.

Los indicadores sociales básicos en Afganistán no han mejorado, y la población sigue muriendo de las mismas cuestiones evitables que antes. Afganistán sólo es una prioridad en cuestiones militares, y la ocupación no responde a las necesidades de su población sino a los intereses de Estados Unidos y sus aliados.

España debería retirar sus tropas de Afganistán, pero no olvidarse de este país. Sería deseable que invirtiera sus prioridades e invitara a otros a emularla. En primer lugar, es necesario acabar con los bombardeos de pueblos y la obsesión antiterrorista.

Segundo, debe fomentarse el diálogo con todos los grupos armados (sin un mediador interesado), priorizando sus bases civiles, las numerosas estructuras sociales hasta ahora ninguneadas y las medidas diplomáticas con los países vecinos (para evitar nuevos apoyos a las facciones). Tercero, mostrar una implicación sincera y comprometida y promover la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Existen muchas maneras no militares de contribuir a un Afganistán mucho más seguro.

¿Qué hace España en Afganistán?

Jueves, 02 de Octubre de 2008

El Centre de Estudis per a la Pau JM Delàs de Justicia y Pau organiza las Jornadas

¿Qué hace España en Afganistán?

La participación española en la guerra de Afganistán a debate. (ver el programa)

¿Cuáles son los motivos reales de la guerra d'Afganistán? ¿Traer la democracia y la libertad, perseguir a Bin Laden, acabar con el cultivo del opio y la segregación de las mujeres? ¿Quizás controlar una zona de gran importancia geoestratégica? ¿Revitalizar la OTAN? Luchar contra el terrorismo? ¿Se trata de una guerra legal o ilegal?

¿Qué hacen la OTAN y las tropas españolas en Afganistán? ¿Se trata de una operación humanitaria? ¿de paz? ¿de reconstrucción? El gobierno mantiene que las tropas españolas no forman parte de la ocupación ni hacen acciones de combate, sino que trabajan en la reconstrucción del país. Hasta hoy, el Estado español ha gastado más de 1.100 millones de euros en la intervención militar en Afganistán.

Actualmente, más de la mitad de la población española ve como negativa la presencia de tropas en Afganistán. ¿Es pertinente la participación española a la guerra de Afganistán?

Programa

28, 29 y 30 d'Octubre de 2008. Sala d'actos de l'edifici «Francia» de la Universitat Pompeu Fabra, Paseo de la Circunvalación 8 de Barcelona. (junto a l'Estación de Francia) Metro Barceloneta (Línea 4) La entrada es gratuita pero se recomienda inscripción previa (delas@justiciaipau.org Esta dirección electrónica está protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o 93 317 61 77)

La guerra vuelve a Europa

Martes, 02 de Septiembre de 2008

La reciente guerra en Osetia del Sur, entre Georgia y Rusia, pone de nuevo encima de la mesa el enfrentamiento en territorio europeo de las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. Los países europeos integrados en la estructura militar de la OTAN, les guste o no, han tenido que tomar partido al lado del país que ha empezado la guerra, Georgia, aliada d'EE.UU. y aspirante a entrar en la OTAN.

La reciente guerra en Osetia del Sur, entre Georgia y Rusia, pone de nuevo encima de la mesa el enfrentamiento en territorio europeo de las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. Los países europeos integrados en la estructura militar de la OTAN, les guste o no, han tenido que tomar partido al lado del país que ha empezado la guerra, Georgia, aliada d'EE.UU. y aspirante a entrar en la OTAN.

Una vez más, las armas han suplantado la razón y Europa ha asistido impasible a que las grandes potencias jueguen a la guerra en su territorio. El pasado 7 de agosto, el gobierno de Georgia, aliado de los Estados Unidos y aspirante a entrar en la OTAN, lanzaba una ofensiva militar sobre Osetia del Sur con el afán de recuperar este territorio perdido tras una guerra de dos años (1990-92) en la que esta provincia, al igual que la de Abjazia, salían victoriosas y se declaraban independientes del gobierno georgiano. La respuesta de Rusia, que está presente en ambas provincias con fuerzas armadas, ha sido contundente, respondiendo con una guerra abierta y desmesurada en Georgia. Como todas las guerras, las consecuencias han sido desastrosas para la población, centenares de muertes, destrucción de infraestructuras civiles, decenas de miles de refugiados y expulsión de población con connotaciones de limpieza étnica, entre las dos partes enfrentadas.

Para comprender este conflicto hace falta tener en cuenta sus razones históricas, la responsabilidad directa de Rusia y de Georgia y la influencia de las políticas de los EE.UU. y la OTAN en el calentamiento del ambiente bélico en la región.

El Cáucaso, es una región multiétnica, dónde la convivencia entre las diferentes comunidades no ha sido fácil en su historia pasada. Las dos provincias tienen lengua y cultura propias. Tanto en Georgia, como Osetia del Sur y Abjazia, ha habido desde 1990 múltiples denuncias de violaciones de los derechos humanos de las minorías. Osetia del Sur como Abjazia, son provincias que, ejerciendo el derecho de autodeterminación, se declararan independientes en 1989 y 1992, respectivamente; lo que no fue aceptado por el gobierno de Tbilisi. Por su parte, Rusia tiene tropas destacadas en las dos provincias, fruto de los acuerdos de paz de 1992.

La responsabilidad inicial de esta nueva guerra recae en la política del nacionalista Saakashvili que gobierna Georgia de no respeto de los acuerdos de paz de 1992, por haber lanzado una ofensiva militar sobre la provincia de Osetia del Sur. Aun así, Rusia también tiene graves responsabilidades criminales en el Cáucaso. En primer lugar, porque respondió con una guerra desmesurada al ataque de Georgia a Osetia del Sur. En segundo lugar, por que mientras reconoce a Osetia del Sur y Abjazia el derecho de autodeterminación –debido a su carácter pro ruso– se lo niega a Chechenia, dónde ha llevado a cabo una guerra brutal con más de 50.000 muertos y 200.000 refugiados.

Desde un punto de vista geopolítico, Georgia tiene un alto valor para las dos grandes potencias mundiales –los EE.UU. y Rusia. Por Georgia pasa el más importante oleoducto que proviene del mar Caspio en dirección al mar Negro y al mar Mediterráneo (el BTC), cuya protección ha sido financiada por EE.UU. Es por eso por lo que Georgia tiene grandes posibilidades de entrar en la OTAN. Lo cual ha sido considerado por Rusia como una amenaza contra su seguridad, junto con al hecho que los Estados Unidos haya llegado a acuerdos para instalar el escudo antimisiles en la República Checa y Polonia.

Estados Unidos y Rusia han utilizado esta guerra para comprobar su influencia geoestratégica en el mundo. Hoy han medido sus fuerzas en Georgia, mañana quizás lo hagan en otras partes del mundo, como Ucrania, Transnistria de Moldavia, o Irán.

or otra parte, es importante resaltar que el derecho a la libre autodeterminación es un derecho inalienable de cualquier pueblo o nación, tal y como está recogido en el art.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Si a Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Montenegro y Kosovo se les ha reconocido el derecho de autodeterminación y a formar un estado propio, por qué no pueden disfrutar de este derecho Osetia del Sur y Abjazia?

Finalmente, Europa occidental es prisionera a través de la OTAN de la política de los EE.UU., comportándose de manera irresponsable ante una posible nueva guerra fría en Rusia, favoreciendo la expansión de la OTAN y la instalación del escudo antimisiles ante las fronteras rusas.

Por tanto, sería deseable una política exterior del gobierno español y de la UE encaminada a conseguir una Europa neutral y distanciada de las políticas de las dos grandes potencias y que juegue un papel de mediación en la solución política y pacífica de los conflictos.

El gobierno español debería distanciarse claramente de las políticas agresivas de la OTAN y de los Estados Unidos y trabajar activamente por construir un mundo en paz dónde la violencia no sea nunca una opción para resolver los conflictos.

Agro combustibles y violencia

Sábado, 21 de Junio de 2008

Si en los conflictos por el petróleo lo que está en juego es el control de las zonas productoras y las vías de transporte, los agrocombustibles están generando nuevos conflictos violentos dónde lo que está en juego es el control y posesión de la tierra y la agroindustria, en colisión con el derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria de las poblaciones indígenas y de millones de campesinos y campesinas de todo el mundo, que la han trabajado a lo largo de generaciones.

Tomàs Gisbert, Materiales de Trabajo, núm. 34 (junio 2008)

La crisis energética global ha puesto encima de la mesa el debate sobre los agrocombustibles, que son presentados no sólo como una salida a la crisis energética cada vez más próxima sino también al calentamiento global. Decisiones de la Unión Europea y de los Estados Unidos están encaminadas a incentivar la producción y el uso del agrodiesel y el agroetanol. La UE mediante la directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 8 de mayo de 2003, “relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables para el transporte” marca metas de sustitución de combustible fósil por agrocarburantes para el transporte. Estas metas, para ser cumplidas por los estados miembros, son del 5,75% para el 2010 y están encaminadas hacia una sustitución del 20% para el 2020.

Estados Unidos, por otro lado, aprobó la Ley de Política Energética de agosto de 2005, para incentivar económicamente el desarrollo, consumo e importación de fuentes alternativas renovables de energía, especialmente el etanol y el agrodiesel.

Estados Unidos y la Unión Europea están llevando a cabo una agresiva política para estimular la producción de agrocombustibles, para poder sustituir una pequeña parte del petróleo con el que satisfacen sus desmesuradas necesidades energéticas, base del actual modelo de producción y de consumo. Pero esta política ya está teniendo graves efectos sobre los países del Sur. El Norte no puede cubrir por sí mismo los objetivos de sustitución planteados. Se calcula que si Europa tuviera que cubrir el 20% de la producción prevista para el 2020 necesitaría destinar a agrocombustibles la mitad de la tierra cultivable en Europa, y además este 20% sólo cubriría el incremento estimado de consumo de combustible hasta 2020, es decir, que no sustituiría nada del actual consumo sino que sólo aseguraría el incremento estimado.

Estas políticas, han convertido los territorios cultivables del Sur en un botín codiciado para satisfacer las necesidades de consumo de los países desarrollados y una agravación de la tierra como fuente de conflictos.

Los agro combustibles ya están teniendo un efecto sobre el hambre en el mundo, en particular por el cambio en el uso de las tierras de países del Sur. De hecho, han añadido más presión sobre zonas eco sensibles ya muy amenazadas como las selvas tropicales, causando deforestación y destrucción de ecosistemas; afectando la fertilidad del suelo, la disponibilidad y calidad del agua; y están desplazando cultivos alimentarios poniendo en peligro la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos. Esta “oleada verde” de los agro combustibles, bajo el presupuesto de superar la crisis del calentamiento global y el consumo dependiente del petróleo que dicen encarar las políticas de la UE y de Estados Unidos, están provocando en países como Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, México, Indonesia, Malasia o Argentina una fuerte oleada de violaciones de los derechos humanos, de apropiación ilegal de la tierra, de descampesinación y de destrucción ambiental

Los países del Norte plantean los agro combustibles como una alternativa estratégica para diversificar las fuentes energéticas y minimizar la dependencia del petróleo y de las zonas conflictivas dónde se produce. Alrededor del petróleo se ha construido toda una geopolítica de guerra para asegurar el control y el suministro en un marco de mayor competencia por un recurso que se acaba. Estados Unidos ha hecho del acceso al petróleo uno de los elementos clave para mantener su hegemonía mundial. En 1980 un presidente demócrata, Jimmy Carter, definió la denominada Doctrina Carter, la cual afirmaba el suministro de petróleo del Golfo Pérsico como un interés vital para EEUU y añadía que se usaría cualquier medio necesario, incluida la fuerza militar, para garantizar el suministro de petróleo. Las diferentes administraciones norteamericanas han mantenido esta doctrina y, en estos últimos 20 años, cuatro grandes operaciones militares han estado marcadas por esta doctrina (la escolta en 1987 de petroleros kuwaitíes bajo pabellón estadounidense durante la guerra Irán - Iraq; la guerra del golfo de 1991, la guerra de Afganistán en 2001 y la invasión de Iraq en 2003).

Estados Unidos, al asegurarse el papel de potencia dominante en las zonas productoras, consigue no sólo garantizarse un futuro aprovisionamiento de petróleo, sino también ejercer un control sobre el aprovisionamiento energético de otros países importadores de petróleo, que ven su seguridad energética condicionada a la presencia de una poderosa fuerza militar norteamericana en las zonas productoras(1).

Esta dinámica de guerra viene sustentada por un ejército que, él mismo, se ha convertido en uno de los principales consumidores de combustible del mundo. Sólo en 2005, el ejército estadounidense consumió 134 millones de barriles de crudo, lo mismo que consumió un país entero como Suecia.

Pero el impulso que se está dando a los agro combustibles no está sirviendo para desactivar la dinámica de guerra del petróleo, porque si por un lado a estas alturas ya está clara la imposibilidad de sustitución del consumo energético fósil por agro combustibles, por otro lado, los agro combustibles han abierto una nueva vía de conflictividad.

Si en los conflictos por el petróleo lo que está en juego es el control de las zonas productoras y las vías de transporte, los agro combustibles están generando nuevos conflictos violentos dónde lo que está en juego es el control y posesión de la tierra y la agroindustria, en colisión con el derecho a la tierra y a la soberanía alimentaria de las poblaciones indígenas y de millones de campesinos y campesinas de todo el mundo, que la han trabajado a lo largo de generaciones.

El caso colombiano, que vive un largo conflicto en el que no hay que menospreciar el papel que en él tiene su condición de país productor de petróleo, puede servir para ilustrar el conflicto que están provocando los agro combustibles.

Afganistán. El fracaso del intervencionismo

Jueves, 15 de Noviembre de 2007

Afganistán. El fracaso del intervencionismo

Procesos de paz asiáticos: Afganistán. El fracaso del intervencionismo

Los desmanes del cliché Somalia

Miércoles, 24 de Enero de 2007

Los discursos actuales sobre lo sucedido en Somalia presentan un cóctel de muchos de los estereotipos peyorativos y concepciones simplistas que se suelen atribuir a los africanos y a los musulmanes. Por un lado, cabe atribuir los mensajes distorsionados a la extendida ignorancia de todo aquello que representa Somalia, olvidada por los grupos de información y opinión desde hace más de una década. Por el otro lado, Somalia reúne los ingredientes necesarios para convertirse en el nuevo chivo expiatorio de la política perversa llevada a cabo por EE. UU. bajo la denominación de "Guerra contra el Terror"

Alejandro Pozo, Materiales de Trabajo núm.30 (Enero 2007)

ONG y expertos rechazan la injerencia de los ejércitos

Jueves, 02 de Noviembre de 2006

Los ejércitos ni están preparados, ni son idóneos, ni tienen como función atender a la población en situaciones de crisis, guerra o emergencia humanitaria y, cuando lo hacen, actúan normalmente con menor competencia y eficiencia que las organizaciones especializadas, a menudo creando más problemas de los que resuelven. Ésta, es la principal conclusión de las Jornadas organizadas por el Centre D'Estudis per la Pau J. M. Delàs de Justícia i Pau, en las que, participaron expertos de diferentes ONGs, profesores universitarios, periodistas y algunos militares.

Frente a la ampliación del contingente militar español en Afganistán

Viernes, 05 de Mayo de 2006

Ante la intención expresada por el Gobierno español de incrementar los efectivos militares en Afganistán, el Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, desea expresar su preocupación en lo referente a los siguientes aspectos:

Humanitarismos que matan

Jueves, 27 de Abril de 2006

Los ejércitos han encontrado en la implementación de tareas humanitarias una nueva fuente de legitimación de su política exterior en contextos de conflicto armado. Antes, se encargaban de proporcionar un entorno seguro para que las organizaciones humanitarias pudieran prestar asistencia a las víctimas de la violencia. Ahora, los soldados prestan asistencia médica, y construyen escuelas y centros de salud.

El Islam y Al Qaeda

Lunes, 02 de Mayo de 2005

(Artículo no disponible en castellano)

Este trabajo quiere enfocar el fenómeno del Islam y Al-Qaeda bajo una vertiente estrictamente política, relacionando la eclosión de una nueva ideología política (del islamismo político) con el resurgimiento de un activismo armado que convierte trasnacional (porque afecta diferentes países de una misma zona geográfica).

Àlex Sánchez Alcázar (febrero 2005)

Las tropas españolas en Afganistán y el riesgo radioactivo

Jueves, 25 de Noviembre de 2004

Las tropas españolas que han ido a Afganistán han recibido un "Manual de Área" elaborado por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) en el que se explica la situación local y los riesgos que habrán de afrontar. El pasado año las tropas que participaron en la ocupación de Irak también recibieron un Manual de Área específico.

Galería de "Monstruos"

Viernes, 23 de Abril de 2004

Vinculaciones de los actuales dirigentes norteamericanos en la cruzada contra el "eje del mal", con la industria petrolera y armamentista.

(Juny 2003) Materiales de Trabajo 23.

Guerras: las mujeres y las criaturas primero

Viernes, 23 de Abril de 2004

Parece que la guerra sea inevitable e inevitable sea que los hombres adultos la perpetren y que las mujeres y las criaturas sean sus víctimas. Los medios de comunicación nos presentan los desastres de la guerra y en ellos viven las mujeres y los niños. Elena Grau Biosca. (Maig 2002). Materiales de Trabajo núm. 20

El negocio de las armas en el conflicto de Afganistán

Miércoles, 25 de Febrero de 2004

La guerra llevada a cabo por Estados Unidos contra Afganistán, también ha representado un buen negocio, tanto en el suministro de armamentos como por el construcción del gaseoducto que atravesará el país.

¿La conferencia de donantes o "Alí Babá y los 40 ladrones?"

Viernes, 20 de Febrero de 2004

Después de la guerra de Irak, se vislumbra un gran negocio en su reconstrucción. Todos los países que aspiran a conseguir contratos se han reunido en esta conferencia para repartirse el pastel. Tica Font, enero 2004; Materiales de trabajo num.23.

La guerra de Irak y el nuevo desorden mundial

Viernes, 20 de Febrero de 2004

(Artículo no disponible en castellano).

El final de la guerra fría ha supuesto el final de las confrontaciones ideológicas entre bloques, ha supuesto la victoria de los EEUU y el inicio una nueva dinámica en los conflictos internacionales. La guerra de Irak representa una nueva estrategia de guerra para conquistar o controlar mercados.

Tica Font, abril 2003.

Plan Colombia: un plan de guerra

Miércoles, 28 de Enero de 2004

(No disponible en castellano). Plan Colombia: un plan de guerra. Publicat a Cuadernos para la solidaridad, Justicia y Paz, n 12, junio 2001. Diana Kathryn Mason, traducción: Assumpta Vinyals.

Las guerras se preparan

Viernes, 19 de Diciembre de 2003

(Artículo no disponible en catalán). La guerra de Irak ha tenido entre otras causas, la cuestión del petróleo. Arcadi Oliveres, Presidente de Justicia y Paz.